

RESUMEN

2 0 2 5

INFORME SOBRE **EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN ESPAÑA**



FUNDACIÓN FOESSA

FOMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES
Y DE SOCIOLOGÍA APLICADA

RESUMEN

2 0 2 5



SOBRE
EXCLUSIÓN
Y **DESARROLLO**
SOCIAL
EN **ESPAÑA**

Madrid, 2025

Referencia bibliográfica

FLORES MARTOS, R. (coord.) (2025).

IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Resumen

Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA, 128 p.

© FUNDACIÓN FOESSA

Embajadores, 162

28045 Madrid

informacion@foessa.org

www.foessa.es

© Cáritas Española Editores

Embajadores, 162

28045 Madrid

Teléf.: 91 444 10 00

publicaciones@caritas.es

www.caritas.es

ISBN: 978-84-8440-960-1

Depósito Legal: M-22409-2025

Preimpresión e impresión:

Advantia, Comunicación Gráfica

www.advantiacg.com

Impreso en España/Printed in Spain

Índice

Introducción	11
Una sociedad en transformación. La evolución del modelo social	19
1. España ha experimentado una fragmentación de su estructura de clases. La antigua hegemonía de las clases medias se ha desgarrado hacia abajo, disolviéndose la identidad obrera tradicional y avanzando en una atomización social que dificulta la creación de identidades colectivas sólidas y proyectos comunes de sociedad	19
2. La transición migratoria ha transformado España de país emisor a receptor de 8,8 millones de inmigrantes. Este cambio, junto al envejecimiento poblacional y la fecundidad frustrada, ha reconfigurado completamente la composición demográfica y las dinámicas reproductivas del país	20
3. La revolución laboral femenina y las nuevas formas familiares reflejan una sociedad más diversa, sin embargo, las desigualdades de género persisten, evidenciadas en la doble jornada laboral femenina. Las transformaciones se construyen sobre viejos cimientos, perpetuando desequilibrios que obstaculizan la verdadera igualdad	22
4. La precariedad laboral se ha normalizado en el mercado laboral, afectando a millones de trabajadores. La inestabilidad laboral se convierte en la norma, configurando una sociedad donde esta situación determina la salud mental y contribuye a la fragmentación social	23
5. España ha desarrollado un modelo inmobiliario especulativo que privilegia la inversión sobre el uso social de la vivienda, alimentando booms constructivos y una artificialización (2)intensiva del territorio mientras amplias capas sociales quedan excluidas, demostrando que el problema no es la falta sino la distribución y accesibilidad	25
6. España mantiene un modelo de desarrollo ecológicamente insostenible que necesitaría 2,5 planetas para generalizarse globalmente, con el 90% de su déficit físico contraído con países empobrecidos, una huella ecológica que triplica su capacidad territorial y profundas desigualdades energéticas vinculadas a su modelo económico y social	27

7. El teléfono móvil se ha convertido en el símbolo de la época, representando una nueva forma de hegemonía tecnológica y generando tanto oportunidades como riesgos de control social	28
8. Los movimientos sociales han desarrollado una sucesión de ciclos de protesta, desde el activismo anti-globalización hasta el 15M y el posterior resurgimiento del feminismo como fuerza transformadora	29
9. España configura una sociedad del desasosiego donde la bonanza económica aparente coexiste con malestares estructurales profundos en múltiples dimensiones, generando tensión entre vulnerabilidad ecológica, fragmentación social y desorientación cultural, pero manteniendo capacidades de resistencia y voluntad transformadora que rechazan la resignación	31

Desigualdad y estructura social

10. La precariedad laboral es la nueva normalidad, con alta temporalidad y rotación, especialmente para colectivos vulnerables. El trabajo parcial involuntario actúa como trampa de pobreza mientras la digitalización emerge como nueva fuente de precariedad con condiciones laborales inciertas y falta de protección social	33
11. La polarización del empleo impulsa simultáneamente ocupaciones de alta y baja cualificación, debilitando las clases medias y ampliando desigualdades. La inteligencia artificial ofrece oportunidades pero plantea retos urgentes de adaptación laboral y diseño de políticas de transición justas que eviten mayor fractura social	35
12. La desigualdad laboral persiste agravada porque los salarios más bajos caen fácilmente en periodos de crisis, aunque se recuperan algo más rápido en épocas de crecimiento. Esto cronifica brechas salariales que afectan especialmente a jóvenes, mujeres y personas extranjeras, siendo una realidad estructural que requiere soluciones de fondo	36
13. La juventud se incorpora al mercado laboral con salarios notablemente más bajos que las generaciones anteriores. Cuando lo hace en periodos de crisis, un efecto cicatriz consolida su precariedad y limita proyectos vitales, situación que se agrava en baja cualificación donde la pérdida salarial se convierte en condena persistente	38
14. España mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa pese al crecimiento económico. La vivienda se consolida como factor clave en la reconfiguración de las clases medias mientras la limitada capacidad redistributiva del Estado agrava la situación, demostrando que sin ampliar y reformar políticas sustancialmente, la equidad sigue pendiente	39
15. La pobreza en España se ha vuelto más crónica y multidimensional, golpeando con fuerza a la infancia y alcanzando a sectores de las clases medias trabajadoras, lo que exige respuestas urgentes, integrales y sostenidas en el tiempo	41
16. Aumenta la concentración de riqueza con la vivienda como motor de desigualdad donde el 10% más rico concentra más de la mitad del patrimonio. Paralelamente la pobreza en activos emerge como nueva vulnerabilidad, dejando a casi la mitad de la población sin red financiera ni posibilidad de acumular capital, amenazando con perpetuar desposeídos frente a acumulación	43
17. Pese al crecimiento, la inestabilidad de ingresos impide la proyección vital de millones de hogares, agravada por prestaciones sociales insuficientes que revelan un sistema de protección débil. España emerge como caso extremo de fragilidad económica en Europa, con vulnerabilidad desproporcionada ante las crisis, exigiendo reformas estructurales urgentes	44
18. El origen familiar sigue siendo decisivo en las oportunidades de vida desmintiendo la idea del mérito personal. Quienes provienen de familias con bajo nivel educativo o migrantes tienen más probabilidades de pobreza y empleos precarios mientras la ocupación parental y redes familiares influyen directamente, dificultando la movilidad ascendente y protegiendo a familias acomodadas	46

19. Los persistentes patrones territoriales de desigualdad muestran un mapa de renta y pobreza prácticamente estable, destacando la brecha entre norte y sur del país. Las prestaciones sociales ejercen un peso decisivo aunque desigual en el mantenimiento de las rentas en las distintas regiones	47
20. La transición energética, pese a su necesidad, está agravando las desigualdades al penalizar de forma desproporcionada a los hogares más vulnerables, lo que exige desplegar con urgencia estrategias que garanticen una transición justa y mitiguen sus efectos regresivos	49
21. La infancia y la juventud son las grandes perdedoras de un modelo que recorta futuro y oportunidades. Generaciones sacrificadas por la inestabilidad, la falta de apoyos y unas condiciones que impiden construir proyectos de vida	50

La dinámica de la exclusión social en España tras dos décadas de erosión: crisis reiteradas y recuperación insuficiente

51

22. La exclusión social es un fenómeno multidimensional, dinámico y estructural que no puede medirse con una única cifra ni superarse con respuestas sectoriales. FOESSA aporta dos décadas de evidencia rigurosa y abre nuevas líneas cualitativas para comprender los procesos y orientar políticas activas de inclusión que transformen, a la vez, personas y contextos	51
23. Cada crisis ensancha la fractura social, y las recuperaciones ya no logran cerrarla. La integración social se erosiona progresivamente, arrastrando al conjunto de la sociedad hacia mayores niveles de precariedad. En 2024, la exclusión severa continuaba siendo un 52% superior a la de 2007, a pesar de la mejora tras la pandemia	53
24. El empleo ya no protege ni incluye, está polarizado entre empleos cualificados y trabajos precarios. La inestabilidad, el desempleo crónico y la parcialidad impiden construir vidas sostenibles. La transformación tecnológica y la infravaloración de sectores esenciales, como cuidados u hostelería, cierran el acceso al empleo digno a los vulnerables. Sin una reforma profunda, trabajar ya no garantiza escapar de la exclusión	56
25. No fallan las personas, falla el sistema. La mayoría de quienes están en exclusión se esfuerzan, pero se enfrentan a servicios fragmentados, poco personalizados y mal dimensionados. Sin inversión en orientación, formación y coordinación, su activación se convierte más en un circuito interminable que en una puerta de salida efectiva	57
26. La vivienda es un nuevo vector de desigualdad y un factor clave en la exclusión social. Una vivienda adecuada es un derecho inaccesible para muchas familias, quienes sufren inseguridad e inadecuación. Esto impacta en los recursos económicos, la salud y los proyectos vitales de los jóvenes	59
27. La ESO ya no protege: en la España digital, el «cortafuegos» contra la pobreza se ha desplazado al Bachillerato y a la FP, por lo que el título postobligatorio se convierte en la nueva llave de la integración; sin él, el futuro laboral se achica y la exclusión se hereda. Reforzar la educación inicial, evitar el abandono y multiplicar las segundas oportunidades ya no es solo un objetivo de equidad: es el dique que impide convertir la brecha educativa en desigualdad crónica	62
28. La brecha digital actúa como un muro invisible. En una España hiperconectada, la brecha digital ya no es solo un problema técnico, sino que representa la llave que abre o cierra el acceso a empleo, educación y ciudadanía. Blindar la conectividad y las competencias de los hogares vulnerables se ha convertido en una nueva política social imprescindible en nuestro tiempo	64

29. La salud se ha convertido en un espejo de la desigualdad: mientras los diagnósticos de depresión y ansiedad entre la población en exclusión severa duplican la media, las listas de espera y la privatización minan el acceso a la atención sanitaria. Desde 2021 ha crecido el número de hogares que necesitó tratamiento por enfermedad grave o crónica y no lo recibió, el doble en los hogares más vulnerables	66
30. Las relaciones son un eje central en la exclusión-inclusión, actuando como factor protector y de riesgo. Fortalecer estos vínculos es clave, como lo es desarrollar políticas basadas en derechos que reconozcan las necesidades de los colectivos en exclusión y garanticen su acceso efectivo a la inclusión	68
31. La desconexión política de sectores vulnerables se intensifica paralelamente al debilitamiento comunitario, lo que exige políticas de inclusión que reconstruyan lazos sociales y promuevan espacios de participación en el entorno cotidiano	69
32. La inseguridad alimentaria afecta al 11,6% de los hogares, especialmente a mujeres, menores y hogares pobres. El derecho a una alimentación adecuada no está garantizado. Los programas asistenciales solo alivian lo urgente y la falta de una estrategia pública basada en derechos convierte el acceso a alimentos seguros y nutritivos en un privilegio	70
33. La infancia y la juventud están atrapadas en una precariedad estructural: 2,5 millones de jóvenes en exclusión y una infancia que representa un tercio de la exclusión severa. Se consolida una cronificación alarmante que duplica las tasas de 2007	71
34. La perspectiva de género muestra la complejidad de la exclusión social. Las desigualdades no son claras en datos agregados, ya que el hogar compensa la distribución por sexo. No obstante, emergen al examinar quién sostiene la economía familiar y el tipo de familia	72
35. La integración de la población inmigrante mejora, pero de forma insuficiente. Es crucial agilizar la regularización, garantizar el acceso a empleo digno y vivienda, combatir la discriminación y reforzar la inclusión desde el inicio. Esto reducirá la distancia que separa a muchos extranjeros de la plena ciudadanía y permitirá aprovechar su potencial demográfico, económico y cultural	75
36. Con un peso demográfico similar al de Aragón, la comunidad gitana soporta los mayores niveles de exclusión. Es vital una estrategia integral que combine empleo digno, vivienda asequible, éxito escolar temprano y lucha eficaz contra la discriminación sistémica. Sin esto, la histórica brecha continuará reproduciéndose generacionalmente	77
37. La discriminación étnica se duplicó desde 2018, siendo un motor de exclusión social. Afecta especialmente a la población gitana y africana, agravando la pobreza al limitar el acceso a empleo y vivienda, y se retroalimenta con el auge de discursos de odio. Para romper este círculo, se requieren políticas antirracistas integrales que combinen protección legal, sanción del discurso de odio y medidas de inclusión con enfoque interseccional	78
38. La exclusión social muestra una brecha territorial persistente. Se concentra y cronifica en barrios urbanos desfavorecidos. Los entornos intermedios sufren deterioro por migración urbana. El espacio rural resiste económicamente, pero con carencias sanitarias y educativas por el envejecimiento y la falta de servicios. Una gran diversidad de modelos socioeconómicos condiciona los niveles de integración	79

Las políticas sociales en España: actores, políticas y retos en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales

39. El Estado de Bienestar español tiene un fuerte respaldo ciudadano. A su vez, se ve amenazado por las tensiones geopolíticas, las políticas privatizadoras, la apuesta por el rearme europeo, los discursos individualistas y la debilidad del sistema fiscal	85
40. Las 28.000 organizaciones del tercer sector representan el trabajo silencioso del bienestar social, de gran alcance, pero invisible en el debate público sobre la cohesión social española	87
41. La provisión mercantil de pensiones y sanidad, que hasta ahora actúa como complemento y no como sustituto del sistema público, refuerza desigualdades mientras crece su papel ante la debilidad de lo público	88
42. La polarización ideológica amenaza la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Algunos sectores políticos muestran una desconfianza profunda hacia el sistema fiscal, promoviendo agendas partidistas que dificultan alcanzar el consenso social necesario para garantizar su financiación	89
43. El sistema sanitario español se debilita entre fracturas estructurales acumuladas y dinámicas privatizadoras crecientes, mientras la enfermedad sigue teniendo causas sociales complejas que la política sanitaria, por sí sola, no puede resolver	90
44. El modelo español de cuidados afronta el reto histórico de pasar del ámbito privado del hogar a la responsabilidad comunitaria en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado y cambio social profundo	91
45. La vivienda se ha convertido en un eje crítico de la exclusión social contemporánea que exige una respuesta pública decidida, estructural y coordinada para priorizar definitivamente la vivienda como derecho frente a su consideración como bien de inversión y objeto de mercantilización	92
46. Sostener las pensiones en una sociedad que envejece aceleradamente exige mucho más que ajustes financieros, requiere construir un pacto intergeneracional sólido, duradero y equitativo basado en recursos suficientes y legitimidad social renovada para garantizar la solidaridad entre generaciones	93
47. El Ingreso Mínimo Vital mejora sustancialmente la protección social duplicando cobertura previa, pero su alcance transformador sigue lastrado por múltiples problemas de acceso, permanencia, desigualdades territoriales y baja cobertura real que limitan su impacto como suelo universal de ciudadanía social	94
48. La integración ya no es una opción secundaria ni fase posterior, sino que debería constituir el centro del nuevo ciclo de la política migratoria en España como imperativo ético y necesidad estratégica para la cohesión social	96
49. Los servicios sociales enfrentan el reto transformador de redefinirse en un contexto de creciente complejidad social, soledad no deseada y desarraigo comunitario, buscando centrarse en la conexión social, la inclusión comunitaria y las capacidades relacionales más que en la mera subsistencia	97
50. La reforma fiscal pendiente surge de la contradicción entre una creciente demanda de protección social que choca con un sistema fiscal obsoleto y una débil disposición ciudadana a sostenerlo, revelando la principal grieta estructural del Estado de Bienestar español	98

51. España se encuentra en una encrucijada histórica que exige ir más allá del modelo clásico en el que el Estado asume en solitario la responsabilidad del bienestar, para avanzar hacia un nuevo pacto social basado en la corresponsabilidad inteligente y articulada entre Estado, mercado, familias y comunidad	99
Confianza en el modelo de bienestar y capital social	101
52. La legitimidad del Estado de Bienestar depende de una democracia robusta, capaz de representar, escuchar y responder; sin participación efectiva y sin confianza en las instituciones, el contrato social que lo sostiene se debilita y pierde su fuerza integradora	101
53. El amplio respaldo ciudadano a los servicios públicos refuerza la legitimidad del Estado de Bienestar, pero sostenerlo en el tiempo exige reconstruir la confianza en el sistema fiscal, fortalecer la cultura de corresponsabilidad y vincular de forma visible los impuestos con derechos y bienestar colectivo	103
54. Se debilita la red de lazos personales con una confianza alta en círculos cercanos (familia, amistades) pero muy baja hacia personas desconocidas. La participación asociativa disminuye, y la pobreza agrava el aislamiento, fragmentando lazos comunitarios y limitando la cooperación social	104
55. La juventud española vive con un profundo pesimismo ante su futuro, marcado por la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y la incertidumbre sobre el relevo generacional y la sostenibilidad del sistema de pensiones	106
56. La vivienda se ha convertido en una barrera estructural que bloquea la emancipación juvenil, alimenta la frustración y erosiona la confianza en el Estado de Bienestar, al prolongar la dependencia familiar y hacer inalcanzable el acceso a una vida digna e independiente	107
57. La emergencia climática y sus efectos son una preocupación creciente. Se demanda una acción colectiva y global. La confianza en la capacidad de las instituciones para ofrecer soluciones es crucial para movilizar a la sociedad y evitar el fatalismo ambiental	108
58. Vivimos en una sociedad marcada por la aceleración, la incertidumbre y el desarraigo, en la que el malestar se canaliza a menudo a través de identidades excluyentes que erosionan la cohesión social	109
59. La proliferación de noticias falsas en el entorno digital polariza la opinión pública y socava la credibilidad informativa. Esto erosiona la verdad compartida y dificulta el diálogo democrático, planteando un desafío fundamental para la cohesión social y la toma de decisiones informadas	110
El futuro que estamos construyendo	113
60. Hemos llegado a la sociedad del miedo conscientes de los riesgos que enfrenta refugiándose en un improbable «sálvese quien pueda». Necesitamos reaccionar individual y colectivamente ante un futuro ya presente sin lugar para lo auténticamente humano, superando la instalación en el lado privilegiado del mundo	113
61. No podemos aspirar a llegar a otro lugar haciendo lo mismo de siempre. Necesitamos políticas públicas audaces que afronten la crisis sistémica, respondiendo coherentemente a todas sus dimensiones sin dejar a nadie atrás, elaborando un nuevo pacto social que cuestione consensos construidos y genere un nuevo imaginario social	115

62. La creciente y transformada desigualdad desvela cómo la integración social depende más de la posición de partida y la herencia que del mérito propio, contrastando con la idea vigente de meritocracia. El cambio necesario precisa reconocernos como seres interdependientes y eco-dependientes, recuperando una ética del trabajo desligada del empleo	116
63. En el marco del debilitamiento individualista de lo comunitario y del cuestionamiento neoliberal de lo estatal, estamos situados en un falso e interesado debate entre sociedad y Estado que es preciso reubicar en términos complementarios, necesitando entrar en la lógica de lo común para profundizar en la democracia	118
64. Tenemos una ética construida para un mundo que ya no existe. La ética del buen vecino empático con lo próximo es insuficiente en el mundo global e interconectado donde lo hecho aquí afecta allí. Necesitamos construir la ética del buen antepasado capaz de empatizar con lo lejano y operar en lógica de trascendencia	120
65. La espiritualidad como dimensión constitutiva de lo humano es sustento esencial para aportar profundidad al cambio necesario, pues conlleva pertenencia a algo más amplio, permitiendo la experiencia trascendente y proponiendo la conversión como práctica. Ambas cuestiones son sustentos necesarios para avanzar en la dirección deseada y deseable	122
66. Es urgente avanzar hacia un cambio radical de paradigma civilizatorio pasando de la visión mecanicista y darwinista a una que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. El feminismo aporta valores relacionales, el ecologismo sitúa la sostenibilidad como eje y el ecofeminismo invita a poner la vida en el centro	124
67. Debemos girar la mirada del mero bienestar hacia el biencuidar, poniendo los cuidados como eje de la vida social y avanzando hacia una democracia del cuidado que lo haga cuestión política. Frente a la cultura de apropiación se crea un mundo responsivo que une receptividad, respuesta y responsabilidad con relaciones vibrantes y transformadoras	127

Introducción

España vive un momento histórico de profunda complejidad. Tras décadas de transformaciones aceleradas que han reconfigurado por completo su estructura social, económica y territorial, el país se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas. Los indicadores macroeconómicos sugieren recuperación y crecimiento, pero bajo la superficie aparente de bonanza se extiende un malestar estructural que atraviesa todas las dimensiones de la vida colectiva. Esta contradicción del crecimiento económico coexistiendo con vulnerabilidad social, la estabilidad institucional conviviendo con desafección democrática, y la modernización tecnológica acompañada de fragmentación comunitaria; constituye el núcleo de lo que podríamos denominar la «sociedad del desasosiego» española contemporánea.

El IX Informe FOESSA responde a la necesidad de comprender esta realidad contradictoria y compleja, de ofrecer un análisis riguroso que permita no solo interpretar los procesos en curso, sino identificar las palancas necesarias para una transformación que sitúe la justicia social y el bien común en el centro de nuestro proyecto colectivo. No se trata de un ejercicio académico neutro, sino de un esfuerzo intelectual comprometido con la construcción de una sociedad más justa y enfocada al bien común.

Los seis capítulos que componen el informe ofrecen una radiografía integral de la España actual en relación con el mundo que habitamos, abordando desde las transformaciones más profundas en la estructura social hasta los retos más acuciantes en materia de políticas públicas, pasando por el análisis detallado de los procesos de exclusión, las dinámicas de desigualdad, los desafíos del Estado de Bienestar y la crisis de confianza en las instituciones democráticas. Cada capítulo constituye una pieza fundamental de un puzzle complejo que solo puede comprenderse en su conjunto, donde los hilos conductores: la precariedad estructural, el impacto generacional desigual, la crisis habitacional, la fragmentación social y la necesidad urgente de un cambio de paradigma; tejen una narrativa coherente sobre los desafíos y las posibilidades de transformación de nuestra sociedad.

Una sociedad transformada desde sus cimientos

El primer capítulo nos adentra en las transformaciones estructurales que han reconfigurado España en las últimas décadas. La estructura de clases tradicional se ha fragmentado radicalmente, con una erosión significativa de las clases medias y la práctica desaparición de la identidad obrera tradicional. Esta atomización social ha generado una proliferación de identidades múltiples que dificultan la construcción de proyectos comunes y solidaridades colectivas.

España ha experimentado simultáneamente una transformación demográfica histórica, convirtiéndose en uno de los principales receptores de inmigración europea, mientras enfrenta una crisis de fecundidad donde las barreras estructurales, precariedad laboral, crisis habitacional y feminización de los cuidados, impiden a las mujeres materializar sus deseos reproductivos. La revolución laboral femenina ha sido espectacular, pero no se ha traducido en redistribución del trabajo doméstico, perpetuando la sobrecarga del «segundo turno».

La precariedad laboral se ha normalizado, afectando a casi la mitad de la población activa, mientras el modelo de desarrollo genera situaciones contradictorias: viviendas vacías, usadas como segundas residencias u orientadas al uso turístico mientras amplias capas sociales enfrentan graves problemas de acceso a la vivienda. Simultáneamente, España mantiene un déficit ecológico estructural que evidencia la insostenibilidad del modelo económico si este pretendiera generalizarse globalmente. Todos estos procesos configuran una «sociedad del desasosiego» que, a pesar del crecimiento económico aparente, experimenta malestares estructurales profundos, pero que mantiene, sin embargo, capacidades de resistencia y voluntad transformadora que se expresan en diversos ciclos de movilización social.

La cristalización de la desigualdad estructural

El segundo capítulo profundiza en cómo estas transformaciones cristalizan en patrones persistentes de desigualdad. La precariedad laboral emerge como fenómeno sistémico, mientras la polarización del empleo, crecimiento de ocupaciones extremas y debilitamiento de posiciones intermedias, se acelera con la inteligencia artificial, planteando retos urgentes que amenazan con ampliar la fractura social.

La desigualdad salarial se revela estructural, con brechas que se enquistan especialmente entre generaciones, rompiendo expectativas de progreso. España mantiene niveles de desigualdad significativamente superiores a la media europea, evidenciando que el crecimiento no reduce brechas sin políticas redistributivas activas. La vivienda se consolida como factor determinante que redefine la estructura social incluso más que los ingresos.

La pobreza se ha vuelto más crónica y multidimensional, golpeando con especial dureza a la infancia y, paradójicamente, extendiéndose a sectores de las clases medias trabajadoras que experimentan privación material creciente a pesar del crecimiento económico. La concentración de la riqueza se intensifica, con una pequeña fracción de la población acumulando una proporción creciente del patrimonio total mientras amplios sectores apenas poseen activos, siendo la vivienda el principal motor de esta polarización patrimonial.

La inestabilidad de los ingresos impide la proyección vital de millones de hogares, especialmente los más vulnerables, convirtiendo a España en un caso extremo de fragilidad económica en el contexto europeo. El origen familiar sigue siendo determinante en las oportunidades vitales, desmintiendo la retórica meritocrática y evidenciando que la movilidad social continúa condicionada por el capital económico, cultural y social heredado. Las diferencias territoriales se mantienen prácticamente estables, configurando un mapa persistente de desigualdad regional, mientras la transición energética necesaria agrava paradójicamente las desigualdades al impactar desproporcionadamente sobre los hogares más vulnerables.

La acumulación progresiva de fracturas en la exclusión social

El tercer capítulo analiza la exclusión social como fenómeno multidimensional, dinámico y estructural que requiere comprensión integral. Tras dos décadas de seguimiento riguroso, se revela una dinámica preocupante: cada crisis ensancha la fractura social y las recuperaciones posteriores no logran cerrarla completamente, dejando un poso acumulativo de vulnerabilidad. La exclusión severa se mantiene significativamente por encima de los niveles previos a las crisis, afectando a millones de personas adicionales respecto al inicio de la serie histórica.

El mercado laboral ha perdido su capacidad tradicional de proteger e incluir, convertido en un espacio de polarización donde empleos de alta cualificación coexisten con trabajos precarios. La parcialidad involuntaria, la inestabilidad contractual y los bajos salarios impiden construir proyectos de vida sostenibles, hasta el punto de que una proporción significativa de trabajadores ocupados vive en situación de exclusión social, demostrando que el empleo ha dejado de ser garantía de integración.

El análisis desmonta el mito de la pasividad de las personas en exclusión: la inmensa mayoría de hogares en exclusión practica una resistencia activa, trabajando en lo que pueden, movilizando estrategias de inclusión y participando en programas formativos o de servicios sociales. El problema no radica en la falta de voluntad individual, sino en la fragmentación, insuficiente personalización y dimensionamiento inadecuado de los dispositivos públicos de inserción. Sin inversión decidida en orientación, formación y coordinación intersectorial, la activación se convierte más en un circuito interminable que en una puerta de salida efectiva.

La vivienda emerge como el nuevo vector determinante de desigualdad y factor clave en las dinámicas de exclusión social. El mercado de alquiler se ha consolidado como principal vía hacia la exclusión residencial debido a una inaccesibilidad económica creciente combinada con la escasez dramática de vivienda pública social. La crisis habitacional no refleja únicamente problemas de oferta, sino una deriva estructural donde la vivienda ha dejado de ser garantía de estabilidad para convertirse en objeto de especulación.

El análisis educativo revela un desplazamiento preocupante: la educación obligatoria ya no protege contra la exclusión social, y el «cortafuegos» contra la pobreza se ha trasladado a niveles postobligatorios de formación, multiplicando significativamente el riesgo de exclusión severa para quienes no completan estos estudios. Paralelamente, la brecha digital actúa como un muro invisible en una sociedad

hiperconectada, donde una proporción importante de hogares vulnerables vive en «apagón digital» que refuerza y amplifica todas las demás formas de exclusión.

La salud se ha convertido en espejo de la desigualdad, con los diagnósticos de problemas de salud mental entre la población en exclusión severa duplicando ampliamente la media nacional, mientras las listas de espera sanitarias y las barreras de acceso minan especialmente la atención a los hogares más vulnerables. Las relaciones sociales emergen como factor protector y de riesgo simultáneamente, constituyendo el eje que articula y da sentido al resto de factores que inciden en las dinámicas de exclusión-inclusión, pero registrando un debilitamiento que multiplica la soledad entre los sectores más vulnerables.

El Estado de Bienestar en tensión

El cuarto capítulo revela un Estado de Bienestar que, pese al fuerte respaldo ciudadano, se encuentra sometido a tensiones múltiples que amenazan su sostenibilidad y eficacia. Las presiones geopolíticas, las tendencias privatizadoras, la apuesta por el rearme europeo y el debilitamiento del sistema fiscal configuran un escenario complejo donde el impulso social pospandemia corre el riesgo de revertirse.

El tercer sector constituye una infraestructura social grande pero invisible en el debate público, realizando decenas de millones de intervenciones anuales y movilizando una cantidad ingente de personas voluntarias. Paralelamente, la provisión mercantil de servicios como pensiones complementarias y sanidad privada, actuando como complemento del sistema público, refuerza las desigualdades sociales existentes al beneficiar, sobre todo, a quienes disponen de mayor capacidad económica para acceder a estos servicios.

La sostenibilidad del modelo se ve amenazada por un clima de polarización ideológica donde una desconfianza fiscal estructural se plasma en agendas partidistas que debilitan el consenso social necesario para su financiación adecuada. Esta tensión se manifiesta de manera especialmente intensa en el sistema sanitario, que se debilita progresivamente entre fracturas estructurales acumuladas y dinámicas privatizadoras crecientes, mientras las desigualdades en salud persisten tozudamente pese a décadas de universalidad formal, evidenciando que el acceso igualitario no garantiza automáticamente resultados equitativos.

El modelo de cuidados afronta el reto histórico de transitar del ámbito privado familiar a una responsabilidad verdaderamente comunitaria en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, con una financiación que resulta claramente insuficiente en comparación con la media europea y que perpetúa la feminización del cuidado y su precariedad estructural. La vivienda se ha convertido en eje crítico de exclusión social que exige una respuesta pública decidida, estructural y coordinada para priorizar definitivamente su dimensión como derecho frente a su consideración como bien de inversión y objeto de mercantilización.

El sistema de pensiones requiere mucho más que ajustes financieros técnicos. Necesita construir un pacto intergeneracional sólido y duradero basado en recursos suficientes y legitimidad social reno-

vada. El Ingreso Mínimo Vital, pese a representar un avance histórico al ampliar significativamente la cobertura previa, queda atrapado en una lógica de inclusión selectiva debido a múltiples barreras estructurales que limitan dramáticamente su alcance transformador como auténtico suelo universal de ciudadanía social.

La integración de la población migrante debe dejar de ser el «eslabón olvidado» para constituir el centro neurálgico del nuevo ciclo de política migratoria, superando enfoques meramente defensivos o laboristas para construir activamente ciudadanía intercultural. Los servicios sociales enfrentan el reto de redefinirse radicalmente, transitando de una lógica centrada en la mera subsistencia hacia su papel como instrumentos de conexión social, inclusión comunitaria y fortalecimiento de capacidades relacionales.

La reforma fiscal pendiente emerge de una contradicción estructural e insostenible entre demandas sociales crecientes de protección y un sistema tributario desactualizado, fragmentado e insuficiente. Todo ello exige superar el modelo clásico donde el Estado asume en solitario la responsabilidad del bienestar, avanzando hacia un nuevo pacto social basado en la corresponsabilidad inteligente y articulada entre Estado, mercado, familias y comunidad, donde cada actor asuma papeles distintos pero complementarios al servicio de una sociedad cohesionada y justa.

La erosión de la confianza social y política

El quinto capítulo aborda la crisis de legitimidad que atraviesan las instituciones españolas y su impacto corrosivo en la cohesión social. La legitimidad del Estado de Bienestar no depende únicamente de su capacidad para garantizar derechos sociales, sino fundamentalmente de la solidez del sistema democrático que lo sostiene. Sin embargo, amplios sectores de la ciudadanía perciben que la democracia ha perdido eficacia, capacidad de respuesta y conexión genuina con la sociedad, alimentando una desafección progresiva que erosiona el compromiso cívico y la participación política activa.

La corrupción persistente, la incapacidad manifiesta para resolver problemas estructurales como el acceso a la vivienda, y el sentimiento creciente de no ser escuchados por parte de las instituciones refuerzan una desconfianza institucional profunda. Esta situación genera una realidad inquietante: mientras existe un amplio y estable respaldo social a los servicios públicos esenciales, la disposición efectiva a financiarlos mediante impuestos sigue una trayectoria mucho más volátil y fragmentada, evidenciando una fractura grave en el principio de reciprocidad que debe articular el contrato social.

La red de lazos personales se debilita progresivamente, mostrando una confianza alta dentro de círculos cercanos pero muy baja hacia personas desconocidas, configurando una sociedad de vínculos fragmentados. Simultáneamente, la participación asociativa y comunitaria disminuye, mientras la pobreza agrava dramáticamente el aislamiento social, rompiendo vínculos de apoyo y debilitando la solidaridad necesaria para una cohesión comunitaria real.

La juventud española vive con un profundo pesimismo ante su futuro, marcado estructuralmente por la precariedad laboral endémica, las dificultades insuperables de acceso a la vivienda y la incertidum-

bre angustiante sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando les corresponda jubilarse. Esta preocupación no es solo económica sino profundamente política. Expresa el temor de quedar definitivamente fuera de un contrato social que ya no perciben como inclusivo ni sostenible para su generación.

La emergencia climática genera una conciencia social creciente sobre la interdependencia fundamental entre la salud del planeta y el bienestar humano, demandando acción colectiva y coordinación global. Sin embargo, la confianza en la capacidad real de las instituciones para ofrecer soluciones efectivas resulta crucial para movilizar a la sociedad y evitar que el reconocimiento del problema derive en fatalismo ambiental paralizante.

Vivimos en una sociedad marcada profundamente por la aceleración vital, la incertidumbre estructural y el desarraigo comunitario, donde el malestar social se canaliza frecuentemente a través de identidades excluyentes que erosionan la cohesión y dividen en lugar de unir. La proliferación de noticias falsas en el entorno digital fragmenta el espacio público, refuerza peligrosamente la polarización ideológica y erosiona la noción misma de verdad compartida necesaria para el diálogo democrático constructivo y la toma de decisiones colectivas informadas.

Las plataformas digitales, lejos de cumplir su promesa original de conectar sociedades y personas, tienden paradójicamente a generar nuevas formas de aislamiento y fragmentación afectiva, cuestionando seriamente los fundamentos relacionales sobre los que debe asentarse una democracia genuinamente deliberativa y participativa.

Hacia un cambio de paradigma civilizatorio

El capítulo final plantea la necesidad urgente de un cambio radical que supere la «sociedad del miedo» en la que estamos atrapados. Hemos transitado hacia una sociedad consciente de los múltiples riesgos que enfrenta, pero que se refugia en un individualismo defensivo completamente ilusorio ante desafíos globales como el colapso ecológico o la exclusión social.

Este cambio requiere superar la instalación en el lado privilegiado del mundo y desacelerar radicalmente nuestros ritmos de vida, reconociendo que la aceleración tecnológica constante nos despoja de la capacidad de establecer relaciones profundas con nuestro entorno social y natural. No podemos aspirar a llegar a otro lugar, continuando haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora. Necesitamos con urgencia políticas públicas verdaderamente audaces que afronten la crisis sistémica de manera integral, respondiendo coherentemente a todas sus dimensiones sin dejar a nadie atrás en el proceso de transformación.

Es preciso elaborar un nuevo pacto social sobre bases radicalmente distintas capaces de generar un imaginario renovado. La desigualdad creciente desvela cómo la integración social depende más de la posición de partida que del mérito personal, contrastando brutalmente con la idea de meritocracia. El cambio nos exige reconocernos como seres fundamentalmente inter y ecodependientes, y recuperar una ética del trabajo desligada de su identificación exclusiva con el empleo asalariado.

Frente al debilitamiento individualista de lo comunitario y el cuestionamiento neoliberal de lo estatal, debemos resituar urgentemente el falso debate entre sociedad y Estado en términos de complementariedad necesaria. Necesitamos entrar en la lógica de lo común para profundizar genuinamente en la democracia, entendiendo que tanto las instituciones públicas como las redes comunitarias son partes inseparables del hecho social.

Tenemos una ética construida para un mundo que ya no existe: la ética del buen vecino, centrada en la empatía con lo próximo. Este planteamiento resulta insuficiente en el mundo globalizado donde lo hecho aquí afecta inevitablemente allí. Necesitamos construir la ética del buen antepasado, capaz de empatizar con lo lejano y operar desde una lógica de trascendencia que supere el cortoplacismo dominante.

La espiritualidad se revela como sustento esencial para aportar profundidad al cambio necesario, pues conlleva pertenencia a algo más amplio que el yo individual y propone la conversión como práctica transformadora imprescindible.

Es urgente transitar de la visión mecanicista y darwinista hacia una cosmovisión que ponga en el centro la inter y ecodependencia y el cuidado. El feminismo aporta la centralidad de los valores relacionales; el ecologismo sitúa la sostenibilidad como eje vertebrador; y el ecofeminismo nos invita a poner la vida en el absoluto centro.

Finalmente, debemos girar la mirada desde el mero «bienestar» hacia el «biencuidar», avanzando hacia una democracia del cuidado que haga de este una cuestión política y no meramente privada.

El horizonte de la transformación

El presente informe ofrece herramientas analíticas para una transformación urgente y profunda. Los datos y tendencias revelan que, pese a la gravedad de los desafíos, personas y colectivos despliegan capacidades de resistencia, sostienen la voluntad de cambio y protagonizan experiencias transformadoras que demuestran que otro modelo social es posible.

La combinación de la sociología con las múltiples disciplinas que nutren el informe, constituye un conjunto de conocimientos aplicados a la acción, orientados a desentrañar los mecanismos que perpetúan la desigualdad y la exclusión, pero también a identificar las grietas por las que puede emerger la transformación social.

Por todo ello, el IX Informe FOESSA aspira a contribuir a esa transformación, poniendo las ciencias sociales al servicio de la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con los límites planetarios. Porque las sociedades no cambian por decreto ni por inercia, cambian cuando confluyen el análisis riguroso de la realidad, la voluntad política de transformación y la movilización social hacia horizontes de justicia.

Raúl Flores Martos

Coordinador del IX Informe FOESSA

Capítulo 1

Una sociedad en transformación. La evolución del modelo social (*)

1. España ha experimentado una fragmentación de su estructura de clases. La antigua hegemonía de las clases medias se ha desgarrado hacia abajo, disolviéndose la identidad obrera tradicional y avanzando en una atomización social que dificulta la creación de identidades colectivas sólidas y proyectos comunes de sociedad

El desgarramiento de las clases medias españolas se ha producido hacia estratos sociales inferiores, generando una fragmentación social sin precedentes en la estructura social contemporánea

La estructura social española ha experimentado una transformación radical en las últimas tres décadas. Mientras que en 1994 las clases medias representaban un sólido 58% de la población, en 2024 esta proporción se ha reducido al 43%. Lo más significativo no es solo esta reducción numérica, sino la fragmentación que se ha producido hacia abajo. La antigua clase obrera y media baja se ha desgarrado en múltiples segmentos: un 17% se identifica como clase pobre, un 13% como clase obrera y un 12% como clase media baja. Esta fragmentación refleja un proceso de atomización social que dificulta la creación de identidades colectivas sólidas y proyectos comunes de sociedad.

Las divisiones clásicas de clase han perdido protagonismo; en su lugar proliferan identidades múltiples que erosionan la cohesión social. La antigua solidaridad forjada en el trabajo se diluye: profesión y posición laboral pesan menos que la pertenencia a edad, género, generación o hábitos culturales, especialmente

(*) Estas páginas recogen el resumen del primer capítulo de: FLORES MARTOS, R. (coord.) (2025). *IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

RESUMEN IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2025

el consumo audiovisual. Lengua, tradiciones y costumbres regionales se convierten asimismo en ejes de afiliación. En la era digital, la producción simbólica se dispara y el individualismo se acentúa, de modo que las personas se definen más por rasgos culturales y biográficos que por su rol en el mundo laboral.

La identidad obrera tradicional ha experimentado una amplia disolución, pasando del 35% al 13% de autoidentificación en el transcurso de apenas tres décadas de transformación social

Uno de los cambios en la estructura social española ha sido la práctica desaparición de la identidad obrera tradicional. En 1995-1996, un 35% de las personas se reconocía como clase obrera, y un 45% admitía ese origen familiar, representando una identidad colectiva sólida heredada del periodo de desarrollo económico de los años sesenta. Sin embargo, en 2024, solamente un 13% se identifica con esta categoría según las encuestas del CIS, lo que supone una caída de más de 20 puntos porcentuales en tres décadas. Esta disolución no es meramente semántica, sino que refleja transformaciones profundas en la estructura productiva, las formas de trabajo y las identificaciones culturales. La deslocalización industrial, la terciarización de la economía y la precarización laboral han erosionado las bases materiales sobre las que se sustentaba la conciencia obrera.

2. La transición migratoria ha transformado España de país emisor a receptor de 8,8 millones de inmigrantes. Este cambio, junto al envejecimiento poblacional y la fecundidad frustrada, ha reconfigurado completamente la composición demográfica y las dinámicas reproductivas del país

España ha experimentado una transformación migratoria histórica sin precedentes, pasando de 184.000 inmigrantes en 1980 a 8,8 millones de residentes extranjeros en la actualidad

España ha experimentado una transformación demográfica sin precedentes, convirtiéndose de país emisor en receptor de inmigración internacional. En 1980 residían en España apenas 184.000 personas nacidas en el extranjero, mientras que en 2024 esta cifra alcanzó los 8,8 millones, lo que significa que el territorio español se ha mundializado. Esta transformación ha reconfigurado completamente la composición poblacional del país. Las personas de origen inmigrante se han convertido en el factor determinante del crecimiento poblacional, ya que desde hace una década la población autóctona fallecida supera a la nacida, lo que genera un saldo natural negativo. Por otro lado, los flujos migratorios han respondido fundamentalmente a las demandas del modelo productivo español, no a ningún vacío demográfico, desafiando los discursos sobre «reemplazo demográfico». La inmigración ha sido la respuesta a la segmentación del mercado laboral que demanda mano de obra no cualificada y mal remunerada, especialmente en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios de atención personal. Esta transición migratoria ha colocado a España entre los principales países receptores de Europa, duplicando los flujos de entrada entre 2012 y 2022, y consolidando su posición en el núcleo avanzado del sistema migratorio internacional. La población inmigrante es la ventana que nos asoma al momento económico, ecológico, político, social y cultural que estamos viviendo.

España se ha convertido en líder europeo de crecimiento migratorio internacional, duplicando los flujos de entrada de inmigrantes permanentes con proyección de continuidad hasta 2030

España se ha posicionado como el país con mayor crecimiento de inmigración permanente en Europa. Mientras países como Francia e Italia han experimentado incrementos moderados o incluso reducciones, España ha mostrado un dinamismo migratorio excepcional que la sitúa como segundo país receptor en Europa, solo por detrás de Alemania. Los datos de la OCDE confirman que España recibe anualmente entre 400.000 y 500.000 personas inmigrantes con propósito de permanencia, lo que representa un aumento del 33% en el periodo 2013-2023, frente al 51% de Alemania, el 18% de Francia y el 13% de Italia. Esta progresión ha llevado a que el peso de la inmigración haya aumentado del 12% al 18% de la población total en una década. La composición de estos flujos muestra un equilibrio entre inmigración familiar (22%), libre circulación europea (35%), laboral extracomunitaria (11%) y humanitaria (5%). Esta transformación ha consolidado la plena inserción de España en el núcleo avanzado del sistema migratorio internacional, donde el modelo económico español requiere abundante mano de obra para su funcionamiento, convirtiendo la veloz transición migratoria en una prueba fehaciente de esta integración en los flujos globales.

El país enfrenta una crisis demográfica caracterizada por la fecundidad frustrada, donde persiste una brecha entre los deseos reproductivos de mujeres nativas y extranjeras y las múltiples barreras estructurales para la maternidad

España enfrenta una profunda crisis de fecundidad caracterizada por la brecha entre los deseos reproductivos y las posibilidades reales de cumplirlos. Las preferencias de las mujeres respecto al número de hijos/as no han variado durante los últimos 30 años (se quieren dos hijos), pero las posibilidades reales de cumplir este deseo se han reducido drásticamente (1,2 de media). Esta situación configura un «déficit de natalidad» o «fecundidad frustrada». La edad media al primer hijo se ha retrasado hasta los 31,5 años, la más tardía de Europa, cuando las propias mujeres declaran que la edad ideal sería los 28 años. Este retraso forzado provoca un aumento de la infecundidad involuntaria, hasta el punto de que un 15% de las mujeres que quiere tener descendencia no lo consigue. Las barreras son fundamentalmente estructurales: precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, feminización de las tareas de cuidados y debilidad de las políticas públicas de apoyo.

Las mujeres emigran para trabajar y mejorar sus vidas y las de sus familias, y no tienen la maternidad como base del proyecto migratorio. Sin embargo, se observan particularidades específicas. Las madres foráneas no retrasan tanto la maternidad y tienen su primer hijo alrededor de los 28 años, pero se observa una convergencia hacia el mismo patrón restrictivo.

Las mujeres extranjeras se integran rápidamente en el contexto de dificultades estructurales: falta de viviendas asequibles, problemas para conseguir autorización de residencia y discriminación laboral. Estas dificultades repercuten en el retraso de la maternidad y la reducción de la fecundidad, produciendo una convergencia hacia la pauta española de baja fecundidad que sitúa el conjunto en 1,2 hijos por mujer. El resultado es que tanto las mujeres nativas como las extranjeras se ven «empujadas» a tener los hijos que pueden, pero no los que les gustaría, configurando un «déficit de felicidad» en la esfera reproductiva.

3. La revolución laboral femenina y las nuevas formas familiares reflejan una sociedad más diversa, sin embargo, las desigualdades de género persisten, evidenciadas en la doble jornada laboral femenina. Las transformaciones se construyen sobre viejos cimientos, perpetuando desequilibrios que obstaculizan la verdadera igualdad

Las mujeres han protagonizado una revolución laboral pasando del 40% al 70% de la participación laboral, pero mantienen la sobrecarga del segundo turno doméstico sin corresponsabilidad masculina efectiva

Las mujeres han protagonizado la transformación social más significativa de las últimas tres décadas en España. Su participación laboral ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando del 40% en 1995 al 70% en 2024 entre los 32 y 42 años, representando el gran cambio estructural de la sociedad española. Sin embargo, esta incorporación al mercado laboral no se ha traducido en una transformación simultánea de su posición en los hogares. Las mujeres han asumido responsabilidades fundamentales para el apoyo económico familiar sin obtener un alivio paralelo en las tareas reproductivas y domésticas. El 50,5% de las mujeres se ocupan de la mayor parte de los quehaceres domésticos, frente al 18,9% de los hombres, evidenciando la persistencia del «segundo turno». Esta sobrecarga es especialmente intensa en el ámbito de los cuidados, donde el 31,1% de las mujeres se encargan de la mayor parte frente al 5,5% de los hombres. La revolución femenina ha sido, por tanto, incompleta: ha transformado el ámbito productivo, pero no ha conseguido modificar sustancialmente la división sexual del trabajo en la esfera reproductiva, generando nuevas tensiones y cronificando las ya existentes, así como desigualdades en la organización social de los cuidados.

Las formas familiares se han diversificado, transformándose desde el matrimonio tradicional secuencial hacia trayectorias vitales más dinámicas, modificables y adaptables a circunstancias cambiantes

La tasa bruta de primonupcialidad (el número de primeros matrimonios) entre 1991 y 2023 ha descendido de 10,6‰ a 5,8‰, mientras la edad media al primer matrimonio se ha retrasado nueve años, situándose en 36,9 años para hombres y 34,9 para mujeres. Paralelamente, las parejas de hecho han crecido del 4% al 13,5%, y los nacimientos de madres no casadas han aumentado del 10% al 50%. Esta diversificación refleja la aparición de trayectorias vitales más heterogéneas y cambiantes, donde el curso de vida ya no sigue un único patrón, sino que permite múltiples transiciones. Los matrimonios mixtos (con al menos un extranjero) alcanzan el 20%. Las familias monoparentales han crecido del 11,1% al 23,6% de los núcleos familiares, siendo las mujeres el soporte fundamental en el 81% de los casos, y las que sostienen la responsabilidad de la familia, y en ocasiones exponiéndose a una mayor fragilidad de las condiciones de vida. Esta transformación amplía la familia nuclear, dando paso a configuraciones familiares diversas, con la capacidad de reconstituirse en nuevos parentescos.

Las desigualdades de género en el trabajo doméstico y de cuidados persisten de forma estructural, manteniéndose prácticamente inalteradas pese a los aparentes avances en igualdad formal

A pesar de los avances en igualdad formal, persisten profundas desigualdades de género en la división del trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres dedican una media de 55,2 horas semanales a los cuidados frente a las 38,2 de los hombres, una diferencia de 16,9 horas semanales que se mantiene incluso entre personas ocupadas a jornada completa. En las tareas domésticas, solo el 36,4% de las mujeres declara compartir estas actividades frente al 41,6% de los hombres, pero un 38% de hombres reconoce encargarse solo de una pequeña parte frente al 8,6% de las mujeres. Esta desigualdad se inicia en la adolescencia y se mantiene durante toda la vida, intensificándose especialmente durante la formación familiar y la llegada de los hijos. En los cuidados de larga duración, el 69,2% de las personas cuidadoras principales son mujeres, dedicando más intensidad temporal y asumiendo las tareas más rutinarias y menos prestigiosas. Los efectos sobre las trayectorias laborales son significativos: el 22,6% de las mujeres trabaja a tiempo parcial por motivos de cuidados frente al 4,9% de los hombres. Esta persistencia de la desigualdad doméstica y de cuidados constituye un obstáculo estructural para la plena igualdad de género en el mercado laboral, el desarrollo profesional femenino y su plena protección social.

4. La precariedad laboral se ha normalizado en el mercado laboral, afectando a millones de trabajadores. La inestabilidad laboral se convierte en la norma, configurando una sociedad donde esta situación determina la salud mental y contribuye a la fragmentación social

La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad del mercado de trabajo español, afectando al 47,5% de la población activa (11,5 millones de personas) atrapadas en diversas modalidades de inseguridad laboral

Esta realidad precaria se compone de múltiples situaciones que van más allá de la tradicional temporalidad: incluye a 7,6 millones de asalariados en condiciones inestables, 1,2 millones de autónomos sin empleados en situación vulnerable y 2,7 millones de desempleados con experiencia laboral previa.

La precariedad laboral contemporánea presenta un carácter multidimensional que abarca seis situaciones específicas de inseguridad: la población asalariada con relación laboral temporal, la que trabaja con jornada parcial involuntaria, la subocupación funcional donde se tiene una ocupación que requiere estudios muy por debajo del nivel alcanzado, las personas que trabajan de forma autónoma en situación precaria, la población ocupada subempleada⁽¹⁾ por insuficiencia de horas y la desempleada que

⁽¹⁾ Según la OIT, la población ocupada subempleada por insuficiencia de horas incluye a aquellas personas ocupadas, ya sean asalariadas o autónomas, que desean trabajar más horas y que están disponibles para trabajar y cuyas horas efectivas trabajadas son inferiores a las horas semanales que habitualmente trabajan las ocupadas a tiempo completo de la rama de actividad en la que el subempleado tiene su empleo principal.

ha trabajado previamente. Las ocupaciones más castigadas por esta realidad son los trabajos elementales (26,2%), seguidos por los servicios de restauración y atención personal (23,1%), que han aumentado su peso considerablemente en las últimas décadas.

Esta extensión generalizada de la precariedad ha transformado radicalmente el papel tradicional del empleo como mecanismo de integración social. En su dimensión material, millones de trabajadores encuentran dificultades para acceder a derechos y condiciones de vida normalizados, viéndose obligados en ocasiones a combinar varios empleos precarios para subsistir. En el plano identitario, se ha erosionado el trabajo como elemento de identificación social que tradicionalmente proporcionaba referencias colectivas estables. El resultado es una sociedad donde casi la mitad de la población trabajadora carece de la estabilidad básica necesaria para planificar su futuro, acceder a una vivienda digna o formar una familia en condiciones adecuadas, configurando nuevas formas de vulnerabilidad social estructural que trascienden la mera coyuntura económica.

España ha experimentado un proceso profundo de desindustrialización y terciarización económica hacia los servicios, generando una creciente polarización ocupacional entre los extremos de cualificación

España ha experimentado una transformación profunda en su modelo productivo, caracterizada por el declive industrial continuado y la consolidación de una economía terciarizada. La especialización productiva de los años sesenta y setenta, basada en agricultura e industria, ha dado paso a un predominio abrumador del sector servicios. Y paralelamente durante el periodo expansivo 1995-2008, la construcción, las actividades inmobiliarias y el comercio concentraron la mitad del empleo creado. Tras la crisis, han ganado importancia sectores como las actividades sanitarias, la educación y las actividades profesionales científicas y técnicas, configurando una estructura ocupacional polarizada.

Esta polarización se manifiesta en el crecimiento simultáneo de empleos técnicos altamente cualificados y empleos manuales de baja cualificación en servicios, mientras declinan los empleos manuales cualificados tradicionales. La estructura ocupacional española presenta diferencias significativas con la media europea: menor peso de actividades técnicas y administrativas, y mayor peso de actividades manuales. El modelo productivo se caracteriza por tres rasgos estructurales: empresas poco competitivas internacionalmente, tamaño empresarial muy reducido (predominio de microempresas) y un «capitalismo especulativo de corto plazo», intensivo en trabajo y orientado hacia estrategias de precarización laboral para mantener márgenes de beneficio.

La precariedad laboral se ha convertido en un determinante de la salud mental, desarrollando una patología social que se ha normalizado en el sistema económico actual

La precariedad laboral se ha convertido en un determinante social de la salud mental, configurando una «patología normalizada» y «pandemia tóxica» que incrementa el riesgo de morir y enfermar prematuramente. España presenta uno de los consumos más altos del mundo de ansiolíticos e hipnótico-sedantes, con un 11% de personas en edad adulta que declara haber consumido tranquilizantes en las últimas dos semanas y un 4,5% antidepresivos. La prevalencia de diagnósticos

por depresión es el doble entre la población con menos ingresos respecto a la de mayor renta, y 2,5 veces superior entre la población trabajadora más precarizada.

La precariedad laboral explicaría aproximadamente el 17% de la prevalencia de problemas de salud mental entre la población asalariada, y el riesgo de depresión atribuible a la precariedad y el desempleo alcanza el 33,3%. Esto significa que, si la población precaria hubiese tenido empleo estable, se habrían evitado 167.000 diagnósticos de depresión de los 504.000 totales. Las mujeres migrantes presentan especial vulnerabilidad, mostrando altos porcentajes de precariedad en todas sus dimensiones: temporalidad (84%), bajos ingresos (73%) y falta de seguro médico (58%), y triplicando el riesgo de mala salud mental ante la pérdida del trabajo.

5. España ha desarrollado un modelo inmobiliario especulativo que privilegia la inversión sobre el uso social de la vivienda, alimentando booms constructivos y una artificialización⁽²⁾ intensiva del territorio mientras amplias capas sociales quedan excluidas, demostrando que el problema no es la falta sino la distribución y accesibilidad

España presenta una paradoja residencial, con 1,1 millones de viviendas vacías en núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes, de las que 400 mil se encuentran en núcleos de más de 250 mil habitantes. A pesar del número de viviendas construidas en las últimas tres décadas, el país mantiene un parque inmobiliario infrautilizado para el uso ordinario, situándose a la cabeza europea en viviendas vacías y secundarias, pero a la cola en viviendas principales destinadas a hogar

España presenta una paradoja residencial que evidencia que el problema de la vivienda no es de cantidad, sino de acceso. El país mantiene 3,8 millones de viviendas vacías (14,4% del total del parque), incluyendo 1,1 millones en núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes (de las que 400 mil se encuentran en núcleos de más de 250 mil habitantes), donde se concentra la mayor presión inmobiliaria. Esta situación coexiste con graves problemas de acceso a la vivienda para amplias capas de la población. En las últimas tres décadas, el número total de viviendas se ha incrementado un 54,7%, superando en casi dos veces y media el crecimiento poblacional, y aunque las viviendas principales destinadas a hogar crecieron un 57,9%, las vacías siguieron creciendo un 50,7% y las secundarias un 45,4%. De ahí que España ostente el récord europeo de viviendas desocupadas y secundarias pero se encuentre a la cola en viviendas principales por 1.000 habitantes.

⁽²⁾ La artificialización del territorio es la ocupación y transformación del suelo natural por actividades humanas como la urbanización y la agricultura, que ocasiona la pérdida de sus funciones ecológicas originales.

El esfuerzo económico para acceder a la vivienda es desproporcionado: los hogares del quintil más bajo de renta destinan el 43,1% de sus ingresos al alquiler, muy por encima del 31,9% de media en el mismo quintil de la UE, y del 27,2% de media nacional. Esta situación se agrava porque el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la UE.

El modelo inmobiliario español se basa en la hegemonía especulativa de la propiedad como inversión, en detrimento del uso de la vivienda como derecho

España ha desarrollado un modelo inmobiliario que prioriza sistemáticamente la adquisición en propiedad como producto de inversión frente al uso social de la vivienda. Este modelo se caracteriza por la hegemonía de la vivienda en propiedad (75,5% de los hogares según el censo de 2021), frente a países europeos que han desarrollado sólidos parques públicos de alquiler social. La vivienda de protección oficial apenas ha representado el 10% del total construido en las últimas décadas, y casi en su totalidad se ha destinado a la adquisición, con un porcentaje residual al alquiler. Esta orientación especulativa ha alimentado sucesivos *booms* inmobiliarios que han tenido consecuencias devastadoras tanto sociales como ambientales.

Durante la fase alcista de 2001 a 2007, España llegó a iniciar más de 900.000 viviendas anuales, superando a Alemania y Francia juntas y cuadruplicándolas en términos per cápita. El marco institucional legal, fiscal y financiero ha sido un agente que ha espoleado la sobrevaloración y el incremento de precios, haciendo de la burbuja española un ejemplo singular en Europa. Esta estrategia ha generado un divorcio social creciente entre propietarios de patrimonio inmobiliario (que se enriquecen por revalorización) y una mayoría social no propietaria con dificultades crecientes de acceso.

La especulación urbanística ha generado una depredación territorial importante, produciendo la artificialización acelerada del suelo y la destrucción sistemática del patrimonio natural y agrícola, sin que haya servido para resolver los problemas de acceso a la vivienda

El modelo inmobiliario español ha generado una depredación territorial sin precedentes, convirtiendo a España en uno de los países europeos más destructores de su propio patrimonio inmobiliario urbano. La expansión inmobiliaria se ha alimentado de la transformación intensiva de suelo rústico agrícola en suelo urbano, impulsada por expectativas especulativas de reclasificación. Entre 1987-2005, la superficie artificializada se incrementó un 54%, duplicándose el ritmo anual entre 2000-2005 hasta alcanzar 3 hectáreas/hora de nuevo suelo artificial. España conserva apenas un 20% de viviendas anteriores a 1940-1945, frente al 33% de Alemania, que sufrió dos guerras mundiales. El litoral español presenta niveles dramáticos de ocupación: Málaga, con 75% del dominio público marítimo-terrestre artificializado, seguida por Cádiz, Barcelona, Valencia y Alicante que superan el 60%. La media española alcanza el 32%. Durante el *boom* inmobiliario, España llegó a producir 60 millones de toneladas de cemento y 185 millones de hormigón armado en 2006, cantidad suficiente para pavimentar todo el territorio español. Esta estrategia destructiva no ha servido para resolver problemas de acceso a la vivienda, sino que ha alimentado la especulación, generando un territorio fragmentado y ecológicamente insostenible.

6. España mantiene un modelo de desarrollo ecológicamente insostenible que necesitaría 2,5 planetas para generalizarse globalmente, con el 90% de su déficit físico contraído con países empobrecidos, una huella ecológica que triplica su capacidad territorial y profundas desigualdades energéticas vinculadas a su modelo económico y social

España mantiene un déficit ecológico estructural, que necesitaría los recursos naturales y la energía de 2,5 planetas para generalizar su modelo insostenible de producción y consumo a escala global

En el momento álgido del último ciclo expansivo (2007), cada persona en España requería casi 6 hectáreas globales para abastecerse y absorber sus residuos, frente a una biocapacidad nacional de apenas 1,5 hectáreas, generando un enorme déficit ecológico por habitante. Aunque la crisis económica redujo considerablemente estas cifras, España sigue viviendo muy por encima de los límites ecológicos del planeta, manteniendo un déficit que evidencia la insostenibilidad estructural de su modelo de desarrollo.

Esta situación obliga al país a ocupar territorio y «espacio ambiental» en regiones situadas más allá de sus fronteras, configurando una relación de dependencia ecológica con características coloniales. El 61% de la huella de 2007 correspondía únicamente a la huella de carbono necesaria para absorber el CO₂ producido por el consumo de energía fósil, lo que por sí solo más que duplicaba toda la biocapacidad disponible de la economía española. Esta huella ecológica se está trasladando tanto a países del entorno europeo como a regiones del sur global que abastecen de combustibles fósiles, minerales, alimento para ganado y madera. El resultado es un modelo de desarrollo que externaliza sistemáticamente sus costes ambientales hacia otros territorios, manteniendo niveles de consumo que resultan estructuralmente insostenibles y éticamente cuestionables por su impacto sobre las poblaciones más vulnerables del planeta, además de contaminar a nuestra propia población en ciudades y territorios.

El metabolismo económico español es profundamente insostenible, ya que contrae el 90% de su déficit físico con países empobrecidos de África, Asia y América Latina

España ha desarrollado un metabolismo económico profundamente insostenible, caracterizado por un déficit físico masivo contraído principalmente con los países más empobrecidos del planeta. Entre el 70% y 80% de los flujos de energía y materiales que utiliza la economía española son recursos no renovables (combustibles fósiles y minerales), mientras que solo el 7% de todos los materiales se reciclan, acabando el 93% restante en sumideros naturales o vertederos. España ha modificado su posición histórica como abastecedora neta de productos para convertirse en receptora neta: en el momento álgido del último ciclo expansivo (2007) importaba 172 millones de toneladas más de las que exportaba. El 90% de este déficit físico se contrae con países desfavorecidos de África, Asia

y América Latina, y es África el principal acreedor físico con aproximadamente el 40% del déficit total. Sin embargo, el grueso del déficit monetario se salda con países ricos de la UE, evidenciando asimetrías físico-monetarias que encubren relaciones de intercambio ecológicamente desigual. Los combustibles fósiles representan casi el 80% del consumo energético final, dejando a las renovables apenas el 20% restante, a pesar del crecimiento de solar y eólica en generación eléctrica.

Los hogares presentan una desigualdad energética extrema entre familias con alto poder adquisitivo y consumo desproporcionado y familias en situación de vulnerabilidad energética estructural

Los hogares presentan profundas desigualdades energéticas que reflejan diferencias estructurales de clase social. Los hogares más ricos consumen entre 2 y 3 veces más energía para usos residenciales y entre 3 y 4 veces más en transporte privado que los hogares más pobres, traduciéndose en emisiones de gases de efecto invernadero igualmente asimétricas. Durante las crisis económicas, las reducciones del consumo energético fueron menores en los hogares más ricos, que pudieron mantener su nivel de vida energético cuando otros debían prescindir del vehículo privado o reducir drásticamente el consumo doméstico.

Esta desigualdad energética se ha intensificado por el encarecimiento generalizado de los servicios, con incrementos significativos en electricidad, gas y carburantes que han duplicado el peso del gasto energético en los presupuestos familiares. La situación genera una contradicción social donde conviven élites climáticas con consumos desproporcionados junto a 1,8 millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética que no pueden permitirse mantener sus viviendas en condiciones adecuadas de climatización. Esta polarización energética refleja y refuerza las desigualdades sociales existentes, configurando un modelo donde el impacto ambiental se concentra en los sectores más privilegiados mientras las consecuencias del deterioro ecológico afectan desproporcionadamente a los más vulnerables.

7. El teléfono móvil se ha convertido en el símbolo de la época, representando una nueva forma de hegemonía tecnológica y generando tanto oportunidades como riesgos de control social

El teléfono móvil se ha convertido en el tótem civilizatorio de la época, simbolizando las nuevas formas de control tecnológico sobre la sociedad contemporánea

El teléfono móvil se ha convertido en el símbolo indiscutible de nuestra época, alcanzando un valor identificativo que supera la suma de los dos siguientes artefactos más representativos (ordenador y coche). El 52% de las personas lo identifican como el objeto que mejor simboliza esta época, estableciéndose como el «tótem» de una encrucijada civilizatoria. España cuenta con 61 millones

de líneas móviles, con un crecimiento del 3% interanual, lo que evidencia una penetración que supera a la población total. Este artefacto ha «engullido al ser humano», modificando actitudes y conductas en prácticamente todos los órdenes de la vida: íntima, cotidiana, económica, cultural, política y laboral. El móvil representa la omnipresencia de la tecnología digital, y la proliferación masiva de estos dispositivos genera implicaciones sociales profundas, diluyendo las fronteras entre tecnologías de consumo y producción, y estableciendo nuevas formas de hegemonía cultural donde el futuro corre el riesgo de ser diseñado por lo que la tecnología puede hacer, en lugar de decidirlo mediante debate público informado sobre sus consecuencias y la distribución igualitaria de beneficios y perjuicios.

Se incrementa una tensión crítica entre la soberanía tecnológica corporativa y la necesidad de participación democrática en decisiones fundamentales

Se extiende una visión tecnocrática de la sociedad, que constituye una forma de falsa conciencia ideológica con consecuencias prácticas profundas, ya que menosprecia el desgarramiento social y la atomización de las personas vulnerables. Esta situación se agrava en un contexto donde la concentración de riqueza y poder se produce en algunas empresas, singularmente en las vinculadas al capital de la vigilancia (grandes tecnológicas dedicadas a recopilar datos personales a gran escala y a usarlos para incrementar su influencia e ingresos), configurando un giro antidemocrático que combina intereses económicos y políticos. La hegemonía tecnológica no solo es económica sino cultural, estableciendo nuevas formas de control social a través del consumo masivo de dispositivos que generan dependencia y modifican comportamientos colectivos sin participación democrática en las decisiones sobre su desarrollo y aplicación.

8. Los movimientos sociales han desarrollado una sucesión de ciclos de protesta, desde el activismo antiglobalización hasta el 15M y el posterior resurgimiento del feminismo como fuerza transformadora

Los movimientos sociales españoles han evolucionado a través de ciclos de protesta, desde el activismo antiglobalización de los 90, pasando por la crítica a la austeridad del 15M, hasta la diversificación actual con el auge del feminismo

Los movimientos sociales españoles han desarrollado una secuencia de ciclos de protesta que refleja la evolución de las tensiones sociales durante las últimas décadas. El ciclo antiglobalización (1994-2004) se caracterizó por la construcción de redes activistas contra la globalización neoliberal, con marcos de democracia radical, organizaciones horizontales y repertorio basado en desobediencia civil no violenta. Las campañas «50 años bastan» y «Plataforma 0,7%» en 1994 sirvieron como experiencias formativas para una generación que se politizaba. Tras el declive pos-11S, emergió un breve periodo de malestar (2005-2007) relacionado con la burbuja inmobiliaria y el Plan Bolonia. El ciclo

antiausteridad (2008-2015) alcanzó su clímax con el 15M en 2011, combinando crítica económica a las políticas de austeridad con crítica política al modelo de democracia representativa («no nos representan», «democracia real, ya»). Este movimiento tuvo repercusión internacional y reorganizó a actores sociales y consolidó reivindicaciones de derechos sociales básicos frente a intereses económicos dominantes. El periodo post-2016 ha estado marcado por la institucionalización de parte del 15M, la revitalización del movimiento feminista (huelgas generales del 8M de 2018-2019) y el auge paralelo de movilizaciones de ultraderecha.

El movimiento 15M fue la expresión de un profundo descontento en España, uniendo la crítica económica a las políticas de austeridad con la crítica política al modelo de democracia representativa

El movimiento 15M representó la cristalización de un descontento profundo que combinaba críticas económicas y políticas al modelo dominante. En el plano económico, cuestionó las políticas de austeridad y sus consecuencias en términos de desigualdad y pobreza, planteando reivindicaciones centradas en derechos sociales básicos: vivienda, empleo, sanidad, educación y participación política. En el ámbito político, desarrolló una crítica al modelo de democracia representativa de «baja intensidad», denunciando la falta de representatividad («no nos representan») y reivindicando una «democracia real, ya» más participativa. Esta doble dimensión respondía a un agudo descontento con el papel de las autoridades políticas durante la crisis y el incremento de la corrupción. El 15M innovó en las formas de acción, dando nueva dimensión a estrategias como acampadas y asambleas abiertas en centros urbanos, organizando manifestaciones sin símbolos partidarios y desarrollando acciones teatralizadas donde el humor desempeñaba un papel relevante. Su impacto se tradujo en la modificación del tablero político con nuevos actores herederos del movimiento, mayor apertura a procesos democráticos participativos y la repolitización de la economía política, revitalizando el debate sobre problemas como la vivienda, la desigualdad y la deuda como conflictos distributivos.

El movimiento feminista se ha consolidado como fuerza transformadora de primer orden, con las huelgas del 8M convertidas en referente mundial de movilización

El movimiento feminista se ha consolidado como una de las fuerzas transformadoras más potentes de la sociedad española contemporánea, alcanzando visibilidad internacional con las huelgas generales del 8 de marzo de 2018 y 2019 que se convirtieron en referentes mundiales. Estas movilizaciones evidenciaron reclamos que nunca habían sido tan fuertes, incidiendo en el reconocimiento de las mujeres como personas y sujetos de pleno derecho y contra la desigualdad estructural que las ha acompañado históricamente. El resurgimiento feminista ha coincidido con el periodo de latencia de otros movimientos tras la institucionalización parcial del 15M, emergiendo como respuesta a las persistentes desigualdades de género. La fuerza del movimiento feminista conecta con realidades estructurales profundas: la sobrecarga del «segundo turno» doméstico, las desigualdades en el mercado laboral, la feminización de los cuidados y las barreras estructurales para la maternidad. Las movilizaciones feministas han logrado situar en el debate público la necesidad de transformar el modelo de división sexual del trabajo y avanzar hacia un sistema de corresponsabilidad real entre

géneros. Su capacidad de convocatoria y resonancia social indica que ha conectado con malestares profundos de una sociedad que ha experimentado cambios importantes, pero aún mantiene estructuras patriarcales de fondo.

9. España configura una sociedad del desasosiego donde la bonanza económica aparente coexiste con malestares estructurales profundos en múltiples dimensiones, generando tensión entre vulnerabilidad ecológica, fragmentación social y desorientación cultural, pero manteniendo capacidades de resistencia y voluntad transformadora que rechazan la resignación

España vive en 2025 una tensión fundamental que define su carácter como «sociedad del desasosiego»: se desarrolla en un tiempo de bonanza económica según los indicadores convencionales, pero simultáneamente experimenta malestares íntimos y colectivos propicios para dolencias mentales y desesperaciones sociales. Esta contradicción se expresa en el contraste entre «el ruido estentóreo en el Congreso de los Diputados» y «el estremecedor silencio de la colectividad», un silencio que permanece incierto entre la expectativa y la anestesia, entre el temor y la resignación.

La sociedad española requiere un triple rótulo caracterizador: es ecológicamente vulnerable, anímicamente desasosegada y socialmente desgarrada, precarizada en la esfera material (trabajo y vivienda) y desorientada en la atmósfera cultural. Sin embargo, esta sociedad «insatisfecha y advertida» «se niega a caer en la indigencia moral y material», mostrando capacidades de resistencia a través de los movimientos sociales y manteniendo «voluntad de transformar» la realidad existente sin ensimismarse en ella. Esta tensión entre malestar estructural y capacidad de resistencia configura el carácter específico de una sociedad que, a pesar del desasosiego, «despunta y no se resigna», manteniendo un potencial transformador que se expresa tanto en las movilizaciones sociales como en la búsqueda de alternativas al modelo dominante de desarrollo.

Capítulo 2

Desigualdad y estructura social (*)

10. La precariedad laboral es la nueva normalidad, con alta temporalidad y rotación especialmente para colectivos vulnerables. El trabajo parcial involuntario actúa como trampa de pobreza mientras la digitalización emerge como nueva fuente de precariedad con condiciones laborales inciertas y falta de protección social

El mercado de trabajo español mantiene una temporalidad laboral superior a Europa pese a las reformas con desigualdades por género, nacionalidad y edad

A pesar de los avances logrados con la reforma laboral de 2022, que redujo la temporalidad desde tasas en torno al 26% entre 2016 y 2019 al 17,2% en 2023, España sigue presentando niveles muy superiores a la media europea (13,4% en 2023). En este fenómeno se observan tres ejes claros de desigualdad: las mujeres tienen tasas mayores que las de los hombres (19,6% frente a 15,1% en 2023), son más altas en quienes han nacido fuera de España, especialmente en el caso de países extracomunitarios (22,3%), y son sensiblemente superiores en los colectivos de menor edad, sobre todo en el caso de personas de entre 25 y 29 años (27,6%).

A pesar de la conversión de muchos contratos temporales en indefinidos, esto no ha supuesto una mayor estabilidad en el empleo. Difícilmente podrá cambiar la situación si no se modifica la estructura del mercado laboral, marcada por el peso de sectores con una demanda muy esta-

(*) Estas páginas recogen el resumen del segundo capítulo de: FLORES MARTOS, R. (coord.) (2025). *IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

RESUMEN IX

Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2025

cional y por una determinada cultura empresarial. La reducción de la temporalidad se ha dado sobre todo en el sector privado, mientras que el sector público sigue registrando tasas altas y en aumento.

La mitad del trabajo parcial es involuntario y atrapa a trabajadores en situaciones de subempleo y pobreza laboral

En poco más de tres décadas, el trabajo a tiempo parcial ha pasado de ser una figura marginal que empleaba a poco más del 4% de las personas ocupadas a tener más relevancia en el panorama laboral español (14%). Lo más preocupante es que la mitad de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen de forma involuntaria, por no haber logrado un empleo a tiempo completo. Esta modalidad de empleo conlleva una triple penalización. Primero, porque los salarios anuales del trabajo a tiempo parcial oscilan entre el 35% y el 45% de los salarios de jornadas laborales a tiempo completo. Esto hace que el riesgo de pobreza sea sensiblemente mayor en el caso de las personas asalariadas con trabajo a tiempo parcial. Segundo, por el menor salario por hora, que en 2022 fue un 29% inferior, una brecha salarial que se acentúa en las mujeres. Tercero, porque los trabajos a tiempo parcial están asociados a una mayor temporalidad.

La involuntariedad del tiempo parcial es especialmente grave porque atrapa a los trabajadores en una situación de subempleo que les impide alcanzar ingresos suficientes para una vida digna, perpetuando ciclos de pobreza laboral. Además, las jornadas de los trabajadores a tiempo parcial involuntario son aún más reducidas que las de quienes eligen voluntariamente esta modalidad, lo que aumenta su vulnerabilidad económica.

La digitalización emerge como una fuente potencial de nuevas desigualdades laborales

El desarrollo de las tecnologías digitales está teniendo implicaciones significativas en el mundo del trabajo que suponen nuevas desigualdades. Algo tan normalizado en el discurso como el teletrabajo está limitado en España a poco más de un tercio de las personas ocupadas con un índice de teletrabajo potencial del 74% en el quintil de ocupaciones con salarios mayores y menos del 3% en las del quintil con remuneraciones más bajas. Por otro lado, las situaciones de teletrabajo tienen un riesgo adicional, ya que, aunque pueden facilitar la conciliación, también pueden afectarla negativamente si están asociadas con jornadas más largas y menor compartimentación de los espacios de trabajo y no trabajo.

El trabajo en plataformas, donde la oferta y la demanda de servicios conectan a través de plataformas digitales, traslada la inseguridad del mercado al trabajador externo y, en la medida en que los sistemas de protección social se han construido para un mundo de empleo asalariado, quienes trabajan en plataformas quedan mayoritariamente excluidos de ellos. Según la encuesta AMPWork, los trabajadores en plataformas locales en España cobraban en 2021, en promedio, ingresos por debajo del salario mínimo (SMI).

11. La polarización del empleo impulsa simultáneamente ocupaciones de alta y baja cualificación, debilitando las clases medias y ampliando desigualdades. La inteligencia artificial ofrece oportunidades pero plantea retos urgentes de adaptación laboral y diseño de políticas de transición justas que eviten mayor fractura social

Tres décadas de cambios en la estructura ocupacional se traducen en un crecimiento del empleo a largo plazo concentrado en los extremos salariales, que desplazan a la clase media

A lo largo de las últimas tres décadas, el mercado laboral en España ha seguido un patrón de cambio ocupacional tendente a la polarización, al concentrarse el crecimiento del empleo en los extremos de la distribución salarial y las pérdidas, en especial durante las crisis, en las gamas medias. Este fenómeno responde a que la automatización reemplaza tareas rutinarias concentradas en el segmento medio, mientras favorece ocupaciones de baja cualificación que requieren interacción humana (servicios personales, limpieza) o bien ocupaciones de alta cualificación basadas en habilidades cognitivas avanzadas (ciencia, tecnología, dirección). Como resultado de la reducción significativa del empleo en las ocupaciones intermedias susceptibles de ser automatizadas, hay un desplazamiento de la clase media y se amplía la dispersión salarial.

La inteligencia artificial redefine el empleo y urgen estrategias de transición para una mejora equitativa y sostenible

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el panorama laboral más allá de la automatización de tareas rutinarias. A diferencia de olas tecnológicas anteriores, la IA puede realizar funciones que requieren análisis, creatividad y toma de decisiones complejas, afectando potencialmente a ocupaciones altamente cualificadas.

Su impacto puede ser profundamente desigual. Por un lado, puede generar un mejoramiento ocupacional si las nuevas oportunidades superan las pérdidas de empleo, impulsando la demanda de perfiles con habilidades complementarias a la tecnología. Por otro lado, si el acceso a estas oportunidades no es equitativo, aumentará la segmentación del mercado laboral. La velocidad de adaptación del capital humano será crucial: mientras algunos trabajadores podrán reconvertirse hacia empleos mejor remunerados, otros quedarán atrapados en ocupaciones de servicios de bajo valor añadido. Asimismo, será clave diseñar estrategias que faciliten la transición para asegurar que el impacto de la IA y otras innovaciones tecnológicas impulse una mejora real y sostenible de la calidad del empleo.

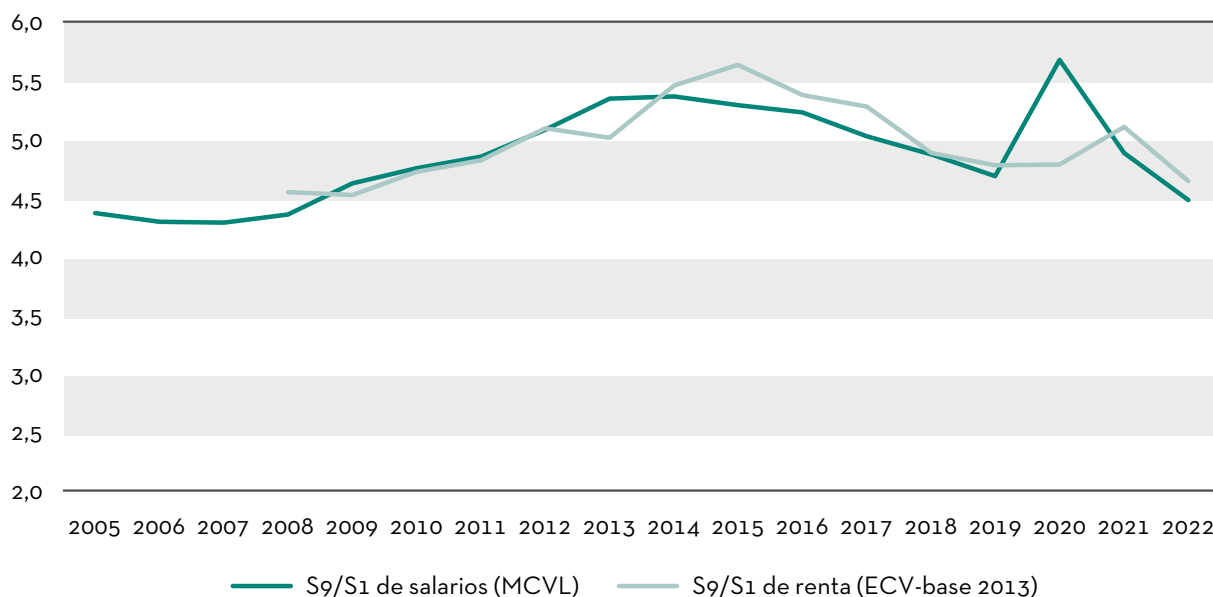
12. La desigualdad laboral persiste agravada porque los salarios más bajos caen fácilmente en periodos de crisis, aunque se recuperan algo más rápido en épocas de crecimiento. Esto cronifica brechas salariales que afectan especialmente a jóvenes, mujeres y personas extranjeras, siendo una realidad estructural que requiere soluciones de fondo

Aumenta la desigualdad salarial por las mayores dificultades de los empleos de bajos ingresos para recuperarse tras las crisis económicas

Durante las dos últimas décadas, la desigualdad salarial aumentó en España con un patrón contracíclico: tiende a aumentar durante las recesiones y a reducirse durante las expansiones. De acuerdo con el indicador S9/S1, antes de la crisis de 2008 el salario del 10% de personas con mayores remuneraciones superaba en 4,5 veces el del 10% de aquellas con salarios más bajos. Esa diferencia se amplió hasta 5,4 veces en 2013-2014, incrementando la desigualdad.

Esta volatilidad se debe a que los salarios en los empleos peor remunerados tienden a caer más durante las crisis, y aunque se recuperen más rápido en los periodos de crecimiento, no logran reducir

Evolución del indicador S9/S1 en salarios y renta (2005-2022)



Nota: S9/S1 se calcula como el cociente entre el umbral que separa el 10% de mayores salarios del resto y el umbral que separa el 10% de menores salarios del resto, mientras el salario-MCVL es diario.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) base 2013.

el diferencial a largo plazo. Además, estos trabajadores están más expuestos a perder su empleo. Aunque las recientes subidas del SMI han mejorado la situación de estos trabajadores, no han sido suficientes para protegerlos de los procesos inflacionarios. La estructura del mercado laboral español, con una alta concentración de empleo en sectores de baja productividad, perpetúa una vulnerabilidad estructural que convierte cada recesión en una crisis de desigualdad.

Las brechas salariales se enquistan y su ampliación en los jóvenes rompe el equilibrio intergeneracional

A pesar de ciertos avances, las brechas salariales por características sociodemográficas siguen siendo sustanciales y, en algunos casos, crecientes. Por un lado, se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres —estas cobraban un 18% menos que la media nacional en 2005 y un 11% menos en 2022—, debido a la combinación de dos factores: la disminución del salario bruto diario real en los hombres y su aumento en el caso de las mujeres.

Los españoles nacidos en España ganaron un 2-3% más que la media entre 2005 y 2022, mientras que los españoles nacidos en el extranjero empeoraron su situación, ganando un 14% menos que el promedio. En cambio, el diferencial salarial negativo de los extranjeros se ha reducido desde el 23% en 2005 al 14% en 2022.

La brecha más preocupante es la generacional. Entre 2005 y 2022, la desventaja salarial de los menores de 35 años frente al conjunto de la población ocupada se acentuó: mientras que en el grupo de 16 a 24 años, los ingresos fueron un 36% inferiores a la media en 2005, en 2022 fue un 38%; en el de 25 a 34 años, la brecha pasó del 11% al 14%.

Esta ampliación de las brechas refleja cambios estructurales profundos: la pérdida de valor de mercado de ciertas cualificaciones intermedias por la tecnología, la mayor concentración de jóvenes en empleos precarios y la ruptura del pacto implícito de mejora salarial intergeneracional.

El 20% de los trabajadores españoles permanece atrapado en empleos de bajos salarios, con escasa movilidad ascendente y mayor riesgo de pobreza

El empleo de bajos salarios afecta a más del 20% de las personas empleadas en España desde 2009, con picos del 24% en momentos de crisis (2014-2015), si bien en 2022 se situó por debajo de estas cifras (19%). Desde una mirada longitudinal, se observa una escasa movilidad ascendente, con transiciones hacia el desempleo el doble de frecuentes que desde empleos mejor pagados, mientras que los empleos de salarios medios y altos son mucho más estables.

La precariedad laboral de los empleos de bajos salarios, caracterizada por mayor temporalidad, tiempo parcial involuntario, peores condiciones laborales y menor formación, hace que estos trabajadores tengan un mayor riesgo de pobreza y sufran mayor prevalencia de ciertos problemas de salud.

El riesgo de tener un empleo con bajo salario es especialmente elevado entre las mujeres (entre el 25% y el 30%), los jóvenes —sobre todo los menores de 25 años—, donde supera el 40% y la brecha se ha acentuado con el tiempo, y las personas trabajadoras extranjeras, con tasas superiores al 25%. Se da en mayor medida en territorios como Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia, donde se registra una incidencia superior al 20% casi todos los años.

13. La juventud se incorpora al mercado laboral con salarios notablemente más bajos que las generaciones anteriores. Cuando lo hace en periodos de crisis, un efecto cicatriz consolida su precariedad y limita proyectos vitales, situación que se agrava en baja cualificación donde la pérdida salarial se convierte en condena persistente

Las generaciones más recientes acceden al empleo en condiciones salariales peores que las de sus predecesoras. Incorporarse al mercado laboral en un contexto de crisis económica se traduce en salarios más bajos y mayores probabilidades de trabajar en empleos temporales o con escasas oportunidades de formación y promoción, lo que deja cicatrices económicas a lo largo de toda la vida. La brecha salarial con las generaciones anteriores es generalizada en todos los niveles educativos, aunque es mayor en quienes poseen un menor nivel de cualificación.

En los trabajadores de alta cualificación, la penalización salarial a la entrada persiste durante la mayor parte de su carrera profesional, si bien las menos cualificadas son las que se han visto mayormente afectadas por las crisis económicas.

Haber entrado en el mercado de trabajo durante la Gran Recesión llega a suponer una pérdida salarial apreciable, en especial en el caso de los hombres. Los nacidos en 1990, que alcanzaron la mayoría de edad en 2008, entre los 20 y 32 años sufren una reducción salarial de un 28% sobre las ganancias totales que podrían haber obtenido si no hubiera habido crisis. Es distinto en el caso de las mujeres, quizá por sus mejores logros educativos, que contribuyen a la reducción de la brecha salarial de género. Las de esa misma generación, a los 25 años ya estarían percibiendo salarios superiores a los estimados para sus etapas iniciales en el mercado a partir de los niveles precrisis, superando así la posible cicatriz salarial de la crisis.

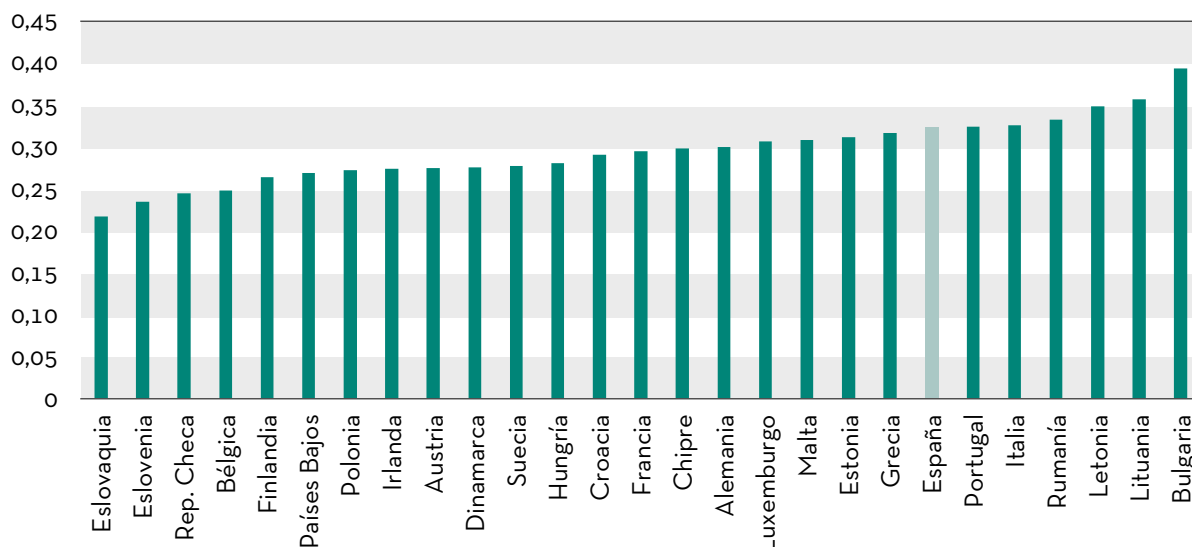
A igualdad de características sociodemográficas y de cualificación, unas personas podrían tener sistemáticamente salarios más bajos que otras por el mero hecho de haber entrado en el mercado de trabajo en una fase de crisis económica, causando dispersión salarial entre colectivos relativamente homogéneos, lo que supone un reto para la cohesión social intergeneracional.

14. España mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa pese al crecimiento económico. La vivienda se consolida como factor clave en la reconfiguración de las clases medias mientras la limitada capacidad redistributiva del Estado agrava la situación, demostrando que sin ampliar y reformar políticas sustancialmente, la equidad sigue pendiente

Sin políticas redistributivas el crecimiento económico no reduce las brechas sociales originadas en el modelo productivo

España es uno de los países de la Unión Europea donde más ha crecido el PIB per cápita en los últimos 50 años (se ha multiplicado por 16, frente al 10 de Francia o el 9 de Suecia), pero este crecimiento no se ha traducido en una reducción equivalente de la desigualdad. España mantiene sistemáticamente uno de los coeficientes de Gini más altos de Europa (0,32), solo superado por Bulgaria, Rumanía y los países bálticos.

Índice de Gini en la Unión Europea (media de 2018-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de EU-SILC (Eurostat).

El análisis de las series históricas muestra que, a muy largo plazo, el crecimiento económico en España ha beneficiado algo más a las rentas bajas, aunque con grandes diferencias según el periodo. En los años 80, el crecimiento ayudó a reducir desigualdades, en buena parte gracias a la expansión del Estado de Bienestar. Sin embargo, entre 1990 y 2007, aunque la economía creció, las desigualdades apenas

se redujeron. Durante la crisis de 2007 a 2015, las diferencias sociales y económicas aumentaron, afectando sobre todo a las personas con menos recursos. Hasta el periodo 2015-2023 no mejoró la situación, gracias a la creación de empleo y al aumento del gasto social. Esta evolución muestra que el crecimiento económico por sí solo no basta para mejorar la equidad: si no se aplican políticas que redistribuyan los beneficios del crecimiento económico, las desigualdades del modelo económico español tienden a mantenerse.

Los costes de acceso a la vivienda reconfiguran la estructura social

La gran dependencia de las pensiones provoca que España tenga una clase media en términos de renta más envejecida que la de otros países. Las crisis han impactado en la estructura de clases por niveles de renta de tal forma que el grupo de rentas medias-bajas perdió peso durante la Gran Recesión, mientras crecía el de rentas bajas, que llegó a ser el mayoritario, pero también el de rentas altas, lo que aumentó la polarización. Desde 2015 se observa una recuperación de cuatro puntos en el grupo de rentas medias-bajas y una reducción de los extremos, que sugiere una cierta recomposición de las clases medias en términos de renta.

Sin embargo, al considerar los costes de vivienda en la definición de renta disponible, el retrato presentado cambia notablemente y el grupo de renta baja llega a alcanzar al 40% de la población, convirtiéndose en el mayoritario. Esta realidad es especialmente dramática para la juventud, que destina un porcentaje elevado y creciente de sus ingresos a vivienda, lo que limita su capacidad de ahorro, consumo y movilidad social.

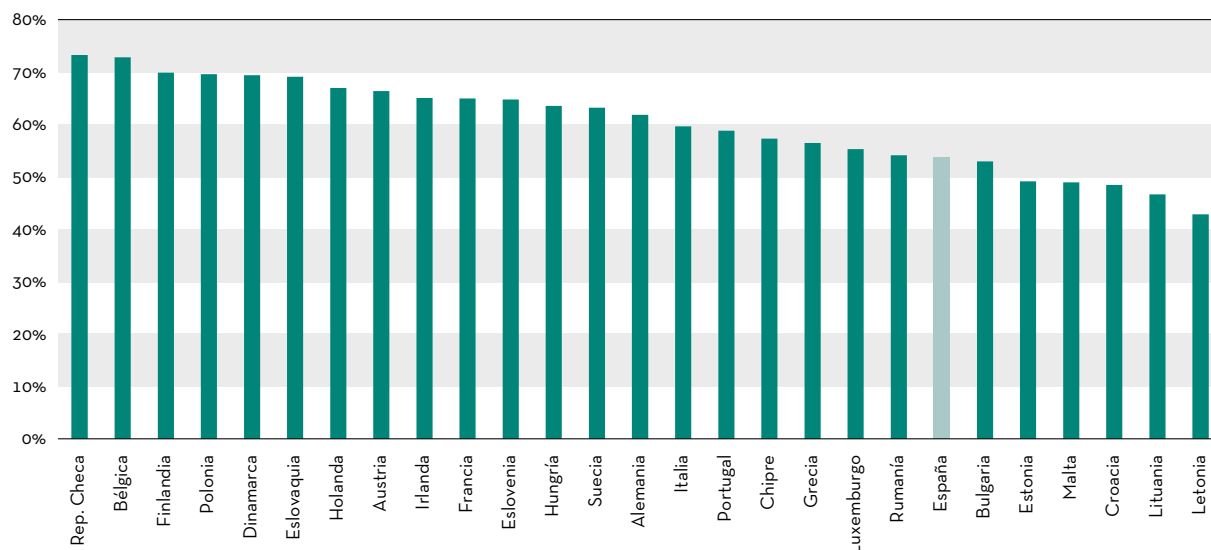
Ha aumentado el uso de la vivienda como inversión, especulación y reserva de valor, lo que ha tensionado los precios y reforzado las desigualdades patrimoniales entre generaciones y clases sociales. Dado que las estadísticas de pobreza y condiciones de vida más utilizadas se centran exclusivamente en los ingresos y no contemplan los gastos, ni siquiera los derivados de la vivienda, este impacto queda en gran medida oculto, contribuyendo a invisibilizar una parte sustancial de la precariedad económica real.

La capacidad redistributiva del sistema español es limitada por la insuficiencia de las prestaciones no contributivas y de las prestaciones familiares

Las prestaciones sociales en España son menos eficaces que en otros países para reducir la pobreza. Una de las razones es el escaso volumen, en términos comparados, de las no contributivas. Además, las prestaciones familiares, tanto las dirigidas a personas con menos ingresos como las que se dan a todas por igual, han presentado, tradicionalmente, niveles bajos de protección. Esto afecta especialmente a la infancia: en nuestro país, las ayudas solo logran reducir una quinta parte de la pobreza de los menores de edad, una de las cifras más bajas de toda la Unión Europea.

Adicionalmente, aunque el impuesto sobre la renta tiene un diseño progresivo parecido al de otros países europeos, en la práctica los tipos medios efectivos (el porcentaje real que se paga sobre los ingresos totales, tras deducciones y exenciones) están entre los más bajos de la eurozona. Esto reduce la capacidad del sistema para redistribuir de forma efectiva.

Efecto reductor de la pobreza de las prestaciones monetarias (2023)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Los problemas de solapamiento de prestaciones, cuantías reducidas y dificultades de acceso han hecho que su intensidad protectora sea limitada y notablemente inferior a la de los sistemas de los países de renta alta dentro de la Unión Europea.

15. La pobreza en España se ha vuelto más crónica y multidimensional, golpeando con fuerza a la infancia y alcanzando a sectores de las clases medias trabajadoras, lo que exige respuestas urgentes, integrales y sostenidas en el tiempo

La pobreza aumenta en la infancia y la juventud, y se cronifica en las familias vulnerables

En 2023, el riesgo de pobreza alcanzó en España al 20,2% de la población. Esto implica que una de cada cinco personas vive en hogares cuyos ingresos son inferiores al 60% del ingreso mediano (unos 915 euros mensuales para un hogar unipersonal). Este dato es superior en cuatro puntos al promedio de la UE-27 (16,2%) y está muy por encima del que registran las principales economías europeas.

Las cifras globales ocultan un cambio profundo en el perfil de quienes sufren la pobreza, pues se ha producido un trasvase generacional: las personas mayores han pasado de tener los niveles más altos de pobreza antes de la Gran Recesión a ser la franja de edad con menor riesgo, lo que refleja el efecto

de la estabilidad de las pensiones en un contexto de pérdida de ingresos; mientras, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en la juventud (18,8%) y la infancia (29%), que supera en 10 puntos la tasa de todos los demás grupos de edad.

A la vez, destaca el notable aumento del porcentaje de personas que sufren pobreza de forma crónica, especialmente desde 2008 (27%), hasta llegar en 2020 casi al 50% las personas que sufren alguna vez pobreza a lo largo de un periodo de cuatro años.

El crecimiento económico coexiste con una privación material creciente que se extiende a las clases medias trabajadoras, lo que evidencia que tener trabajo no es una garantía suficiente frente a las carencias materiales

Paradójicamente, en un contexto de crecimiento económico y del empleo, la privación material ha aumentado hasta afectar al 17,2% de la población, lo que sitúa a España solo por detrás de Grecia, Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea. La población en hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en la vivienda aumentó desde el 8% en 2019 hasta el 21% en 2023, valor máximo desde que hay datos disponibles. Además, muchas más familias han tenido que incurrir en algún retraso en los pagos relacionados con la vivienda (alquiler, hipoteca, recibos de luz, gas, etc.), pasando del 8% de 2019 al 14% en los años posteriores a la pandemia, los valores más altos de la serie histórica. Por último, la población que no puede alimentarse de manera adecuada creció hasta superar el 6% en 2023, unos tres millones de personas, de las cuales casi 600.000 son niños y niñas.

La privación también se está cronificando y se ha extendido a las clases medias trabajadoras: entre 2019 y 2023, los hogares con persona de referencia ocupada, parejas con 1 o 2 hijos, o propietarios con hipoteca, han visto crecer su privación a niveles históricos. El 15,1% de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo sufre privación, el dato más alto de la serie. Esto muestra que tener trabajo no es una garantía suficiente frente a la privación material y que los costes de bienes esenciales (energía, vivienda, alimentación) están desbordando la capacidad económica de amplias capas de población que nunca antes habían experimentado estas carencias.

Las crisis erosionan las redes de seguridad, intensificando el solapamiento entre baja renta y privación material creciente

La pobreza consistente —simultaneidad de baja renta y privación material— afecta al 8% de la población, constituyendo el núcleo duro de la exclusión social. El solapamiento entre ambas dimensiones se ha intensificado con las crisis: durante la Gran Recesión, la pobreza consistente casi se duplicó, pasando del 5,7% en 2004 al 9,7% en 2014, y aunque desde entonces se mantiene una tendencia decreciente, seguía en el 8% en 2023 (último dato disponible).

El análisis del solapamiento revela dinámicas preocupantes. Antes de 2008, muchas personas con baja renta no sufrían privación material, podían recurrir a ahorros o a redes de apoyo informal. Las sucesivas crisis han erosionado estas redes de seguridad. Ahora, quien tiene baja renta tiene muchas más probabilidades de sufrir también privación.

16. Aumenta la concentración de riqueza con la vivienda como motor de desigualdad donde el 10% más rico concentra más de la mitad del patrimonio. Paralelamente la pobreza en activos emerge como nueva vulnerabilidad, dejando a casi la mitad de la población sin red financiera ni posibilidad de acumular capital, amenazando con perpetuar desposeídos frente a acumulación

La vivienda es hoy uno de los principales motores de la desigualdad, al aumentar la polarización de la riqueza entre los hogares de rentas altas, que acumulan más inmuebles, y los de rentas bajas, más expuestos a situaciones de exclusión habitacional. Esta creciente polarización está transformando la estructura social de manera aún más profunda que las diferencias de ingresos

La vivienda se ha convertido en el factor determinante de la estratificación patrimonial en España. En 2011, el 82% de los hogares eran propietarios de su residencia habitual, pero la cifra descendió al 73% en 2020. La caída ha sido especialmente acusada entre los hogares de rentas bajas, que han dejado de ser, en gran medida, propietarios de su vivienda habitual. Como consecuencia, el peso de la vivienda en su patrimonio total se ha reducido drásticamente, al pasar de representar el 79% en 2002 al 59% en 2020. Esta tendencia refleja las crecientes dificultades de acceso, que afectan de forma particularmente intensa a los hogares jóvenes.

Simultáneamente, se produce una acumulación sin precedentes de propiedades adicionales. El 45% de los hogares posee al menos una segunda propiedad, frente al 30% que lo hacía en 2002, con una distribución extremadamente desigual: el 94% de los hogares más ricos tiene más de una propiedad, frente al 62% en las rentas medias-altas y apenas el 23% entre los hogares con menos ingresos. Casi la mitad de los hogares más ricos tienen tres o más propiedades. Estamos ante una sociedad dual: mientras crecen los hogares que no pueden acceder a una primera vivienda y dependen de alquileres cada vez más caros, otros acumulan múltiples propiedades como inversión. Esta polarización inmobiliaria está reconfigurando la estructura social de forma más profunda que las diferencias de ingresos.

El abismo en la distribución de la riqueza se amplía, con un 10% de población que acumula el 54% y la mitad de la población que posee el 7%

El 10% más rico de los hogares españoles concentra ya más de la mitad de la riqueza total del país (54%, frente al 41% en 2002), mientras que la mitad de los hogares con menos recursos apenas acumula el 7% del patrimonio total, una caída notable respecto al 12% de 2002. Esta evolución refleja un claro aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza.

La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, aumentó del 0,58 en 2002 a 0,70 en 2020, con una concentración significativamente mayor que la de la desigualdad de los ingresos. Esta evolución se aceleró durante la crisis inmobiliaria: entre 2008 y 2014 la proporción de riqueza del 10% superior aumentó 9 puntos porcentuales.

La transmisión de patrimonio entre generaciones, principalmente a través de herencias, desempeña un papel crucial en la perpetuación de la desigualdad social. Cuando el capital —ya sea financiero, inmobiliario o de otro tipo— pasa de padres a hijos, los ya privilegiados obtienen una ventaja inicial que amplifica las brechas económicas existentes. Los individuos que heredan un patrimonio sustancial pueden invertir, emprender negocios o comprar viviendas con mayor facilidad, mientras que aquellos sin herencia se ven obligados a comenzar de cero, enfrentándose a mayores obstáculos para acumular riqueza. Este mecanismo de transmisión no solo mantiene el *statu quo* socioeconómico, sino que también dificulta la movilidad social, ya que el éxito de una persona queda en gran medida predeterminado por la posición económica de su familia de origen y no únicamente por sus propios méritos o esfuerzos.

En el ámbito de la vivienda, las crisis económicas han acentuado la brecha patrimonial. Los hogares con ingresos bajos y medios, para los que la vivienda era su activo más importante, vieron cómo la caída de los precios redujo significativamente su riqueza. Muchos llegaron incluso a perder sus propiedades al no poder hacer frente a las hipotecas.

Mientras tanto, los individuos con mayor patrimonio han aprovechado los precios bajos para adquirir más activos, lo que les permitió aumentar su riqueza cuando el mercado se recuperó. Esto provocó una mayor concentración de la propiedad en pocas manos e hizo más difícil que las generaciones jóvenes o de menores ingresos pudieran acceder a una vivienda en propiedad.

17. Pese al crecimiento, la inestabilidad de ingresos impide la proyección vital de millones de hogares, agravada por prestaciones sociales insuficientes que revelan un sistema de protección débil. España emerge como caso extremo de fragilidad económica en Europa con vulnerabilidad desproporcionada ante las crisis, exigiendo reformas estructurales urgentes

La inestabilidad de ingresos refleja una desigualdad social persistente e imposibilita el desarrollo de proyectos vitales

España ha mostrado históricamente una baja capacidad para mejorar los ingresos de las personas a lo largo del tiempo, especialmente si se compara con otros países europeos. Esta posibilidad de mejora depende en gran medida de los ciclos económicos.

Esta inestabilidad no se distribuye aleatoriamente. Ese mismo año una de cada cinco personas de clase baja tuvo grandes pérdidas de renta, frente al 7% de las de clase media-baja, el 4% de la clase media-alta y el 1,3% de la clase alta. En los hogares formados en su totalidad por miembros menores de 40 años, familias monoparentales y menores de edad es mayor la frecuencia de grandes pérdidas de renta.

Para muchas familias, el desequilibrio económico supone que periodos de relativa estabilidad se ven interrumpidos por caídas abruptas de ingresos que merman o acaban con los ahorros, obligan al endeudamiento y truncan proyectos vitales. Esto es especialmente preocupante en la infancia, dado que la incertidumbre económica en esta etapa suele asociarse a situaciones de mayor riesgo de pobreza persistente, menor acumulación de capital humano y peores perspectivas laborales en la edad adulta, lo que puede perpetuar la transmisión de las condiciones de pobreza entre generaciones.

Las debilidades estructurales hacen que España sea un ejemplo de vulnerabilidad a las crisis

En perspectiva comparada, España destaca por su gran vulnerabilidad a los *shocks* económicos. Durante la primera década del siglo XXI, la incidencia de las grandes pérdidas de ingresos afectó al 18-20% de la población, un porcentaje mayor que en el resto de países mediterráneos. El rasgo más destacado es la gran sensibilidad a las crisis: España fue el país donde más aumentó la frecuencia de grandes caídas de renta tanto en 2008 como en 2020.

Esta vulnerabilidad diferencial refleja debilidades estructurales profundas: un mercado laboral dual que expulsa masivamente a trabajadores durante las recesiones, una estructura productiva concentrada en sectores inestables, un sistema de protección social infradimensionado y una cultura empresarial cortoplacista. Mientras países como Francia mantienen la incidencia de grandes pérdidas relativamente estable incluso en periodos de crisis, en España aumenta drásticamente.

El sistema de protección social tiene una capacidad limitada para estabilizar rentas y proteger a los más vulnerables

Las prestaciones sociales deberían actuar como un amortiguador de las pérdidas de ingresos, pero su efecto estabilizador es insuficiente y sesgado hacia determinados grupos. Durante las crisis, compensan parcialmente las caídas de rentas del trabajo, pero paradójicamente benefician más a las rentas altas que a las bajas. Esto es consecuencia del papel dominante de las prestaciones contributivas (asociadas al empleo), que hace que quienes han tenido mejores salarios reciban mejores prestaciones.

El sistema tiene una capacidad de respuesta muy limitada en comparación con la de otros países europeos. España presenta una mayor incidencia de grandes pérdidas de ingresos que Francia, Italia o Portugal, lo que revela la debilidad de sus estabilizadores automáticos. Durante la Gran Recesión, las prestaciones sociales lograron compensar en parte las pérdidas iniciales, pero su efecto fue limitado y se diluyó a medida que la crisis se prolongaba. Durante la pandemia, medidas excepcionales como los ERTE

permitieron una respuesta más eficaz, aunque todavía lejos de los niveles de protección habituales en Europa. Para los hogares con rentas bajas, que carecen de ahorros o redes de apoyo, estas ayudas son fundamentales, pero las prestaciones no contributivas apenas logran amortiguar los vaivenes económicos, dejando a estas familias especialmente expuestas.

18. El origen familiar sigue siendo decisivo en las oportunidades de vida desmintiendo la idea del mérito personal. Quienes provienen de familias con bajo nivel educativo o migrantes tienen más probabilidades de pobreza y empleos precarios mientras la ocupación parental y redes familiares influyen directamente, dificultando la movilidad ascendente y protegiendo a familias acomodadas

El origen familiar condiciona las oportunidades vitales con una intensidad que desmiente la idea de que el éxito depende mayoritariamente del talento y el esfuerzo individual. Los datos son contundentes: los hijos de personas de bajo nivel educativo tienen un riesgo de pobreza que duplica el de los de personas altamente educadas (20% frente al 11% en 2023). Esta brecha, lejos de reducirse con la expansión educativa, se mantiene estable en el tiempo.

No obstante, destaca la reducción de esa brecha de pobreza en personas adultas (25-59 años) según la situación económica de sus hogares durante su adolescencia, que pasa del 10,5 en 2011 al 6,4 en 2023 debido a la reducción del riesgo de quienes proceden de entornos económicamente adversos (del 26% en 2011 al 23% en 2023) y al aumento de la tasa de quienes vivieron situaciones más favorables (15% al 16%).

Otra variable relevante es el lugar de nacimiento. Por un lado, el país de nacimiento es un componente esencial del riesgo de dificultades económicas en la vida adulta. Por otro, el riesgo de pobreza se multiplica por 2,4 cuando al menos un progenitor ha nacido fuera de la Unión Europea respecto a que ambos hayan nacido en España.

El nivel educativo es una de las variables más determinantes para explicar las situaciones de pobreza, por lo que resulta clave analizar los factores que generan desigualdad en el acceso y el logro educativo. Mientras que la situación económica y el nivel de estudios de los padres han perdido algo de peso, el país de origen gana relevancia como factor de desigualdad. La ocupación de los padres sigue siendo decisiva: los hijos de trabajadores no cualificados o del sector primario tienen el doble de probabilidades de no terminar la educación obligatoria (20% frente al 10,8% general), mientras que el 64,5% de los hijos de directivos y técnicos superiores acceden a estudios universitarios, frente a solo el 11,6% entre los hijos de trabajadores no cualificados. Esta brecha de 53 puntos es una de las mayores de Europa.

Con la misma formación, un universitario hijo de trabajador manual tiene peores perspectivas laborales que un universitario hijo de profesional debido a las diferencias en redes de apoyo, re-

ferencias, contactos y recursos culturales que influyen en el acceso a mejores oportunidades. La ocupación parental transmite no solo recursos económicos para la educación, sino *habitus*, expectativas, redes profesionales y conocimiento tácito sobre cómo desarrollarse en sistemas educativos y laborales. En un mercado laboral en el que los contactos importan tanto como los títulos, los hijos de clases bajas compiten con desventaja incluso cuando tienen una formación similar. El esfuerzo personal no basta para alcanzar el éxito y no quiebra la reproducción social, sino que la refuerza, al presentar como logros individuales lo que en muchos casos son ventajas heredadas, invisibilizando así las desigualdades de origen.

Además de la transmisión directa de capital económico y cultural, hay otros mecanismos más sutiles, pero igual de poderosos, en la perpetuación de las desigualdades. La participación en actividades extraescolares actúa como factor decisivo: quienes no participaron por motivos económicos tienen tasas mucho mayores de abandono escolar temprano. Para quienes crecieron con dificultades económicas, estas actividades marcan la diferencia entre quedarse en estudios básicos o alcanzar una formación superior. A pesar de lo positivo de estas, el acceso a este tipo de actividades sigue condicionado por los recursos familiares.

Otro elemento clave es el capital social, entendido como el conjunto de relaciones personales y redes de apoyo con capacidad real para ofrecer ayuda —ya sea material, emocional o en forma de oportunidades—. Disponer de estas redes de apoyo más allá del núcleo familiar reduce la pobreza severa del 12,5% al 9,6%. La participación regular en centros juveniles o de ocio durante la adolescencia reduce la pobreza adulta del 12,3% al 6,9%. Haber convivido con ambos progenitores marca una diferencia de 14 puntos en las tasas de pobreza adulta. Estos factores «blandos» (redes, estabilidad familiar, acceso a espacios de socialización) son tan determinantes como los «duros» (educación, ingresos), pero están desigualmente distribuidos según la clase social, amplificando las ventajas de origen. Los hijos de familias acomodadas no solo heredan más capital económico y cultural, sino ecosistemas completos de apoyo y oportunidades que los blindan frente a la movilidad descendente.

19. Los persistentes patrones territoriales de desigualdad muestran un mapa de renta y pobreza prácticamente estable destacando la brecha entre norte y sur del país. Las prestaciones sociales ejercen un peso decisivo aunque desigual en el mantenimiento de las rentas en las distintas regiones

La desigualdad se refleja en las brechas internas y territoriales en la renta y la pobreza

La desigualdad en España es el resultado de dos componentes: la desigualdad dentro de cada comunidad y las diferencias de renta entre comunidades. La desigualdad del conjunto nacional se explica casi por completo por el componente intrarregional, es decir, por las desigualdades dentro de cada territorio.

No obstante, ha aumentado la contribución a la desigualdad total de algunas de las comunidades más ricas, como la Comunidad de Madrid o Cataluña.

El mapa de la desigualdad entre territorios apenas ha variado desde comienzos de siglo, con País Vasco y Navarra sistemáticamente por encima del resto y Madrid en tercera posición, pero a más de mil euros de renta media por hogar del País Vasco. En el otro extremo, Extremadura se mantiene en la última posición y presenta, junto a Andalucía y Murcia, un menor nivel de renta media del hogar. Castilla-La Mancha y Canarias todavía no han saltado al grupo intermedio, pero han ido mejorando sus posiciones. Esta inercia en las diferencias territoriales en el nivel de renta se refleja también en las dificultades para reducir las distancias entre las comunidades con mayor y menor renta.

En 2023, los patrones de pobreza muestran fuertes contrastes entre territorios. Andalucía registra una tasa 10 puntos por encima de la media nacional (20%), seguida de Extremadura (7 puntos más) y Castilla-La Mancha y Canarias (5 puntos más). En el otro extremo, Navarra (13,8%), Madrid (12,8%) y el País Vasco (10%) se sitúan entre las comunidades con menores niveles de pobreza. La desigualdad interna de cada región también varía enormemente: Madrid y Andalucía presentan las mayores desigualdades internas, combinando bolsas de riqueza extrema con amplias zonas de pobreza.

Las prestaciones resultan cruciales para sostener las rentas, si bien presentan diferencias significativas de cobertura entre territorios

En muchas comunidades, las tasas de pobreza serían mucho más altas sin las prestaciones sociales, lo que demuestra que estas ayudas desempeñan un papel clave en el sostenimiento de los ingresos, aunque su impacto varía por territorios. En el caso de la pobreza, las prestaciones monetarias resultan eficaces para reducir el número de personas por debajo del umbral, pero su baja cuantía limita su capacidad para mejorar de forma significativa los indicadores de desigualdad.

Las diferencias entre regiones en el impacto redistributivo del sistema de prestaciones son notables. Las prestaciones diferentes de las pensiones tienen mayor efecto en comunidades de renta baja, actuando implícitamente como transferencias entre territorios. La descentralización de los servicios de bienestar social ha creado importantes diferencias en la protección efectiva según la comunidad autónoma: las regiones con mayor capacidad fiscal solo complementan las prestaciones estatales cuando existe una clara voluntad política de destinar esos recursos a la lucha contra la pobreza, mientras las más pobres ofrecen coberturas mínimas. Esta desigualdad en la protección social amplifica las diferencias territoriales de origen.

20. La transición energética, pese a su necesidad, está agravando las desigualdades al penalizar de forma desproporcionada a los hogares más vulnerables, lo que exige desplegar con urgencia estrategias que garanticen una transición justa y mitiguen sus efectos regresivos

La transición energética, pese a su necesidad innegable, está generando nuevas formas de desigualdad con impactos negativos para los más vulnerables. Los hogares pertenecientes al 10% con menores ingresos destinan, en promedio, un 10,7% de su renta a suministros energéticos en el hogar, mientras que los de mayores rentas dedican únicamente un 2,4%. Cabría esperar, por tanto, que la carga de los impuestos energéticos-ambientales incida de manera desproporcionada sobre los colectivos con menor renta.

A nivel territorial, las poblaciones más pequeñas dependen en mayor medida de fuentes de energía contaminantes y del uso de vehículos privados, debido al escaso acceso al transporte público. Además, es más frecuente que vivan en viviendas antiguas y aisladas, lo que las expone más a condiciones climáticas adversas y encarece sus necesidades energéticas. Esta última característica es compartida con los hogares de baja renta, independientemente de dónde se ubiquen, pues, en general, se ven obligadas a residir en viviendas con baja eficiencia energética y, en caso de disponer de vehículo propio, se trata de coches más antiguos y contaminantes.

Ciertas regiones dependientes de industrias intensivas en carbono se enfrentan a riesgos de desindustrialización y pérdida de empleo. Sin mecanismos compensatorios, la transición energética amenaza con crear una nueva geografía de ganadores y perdedores, donde los costes recaen sobre quienes menos capacidad tienen de adaptarse mientras los beneficios se concentran en élites urbanas con capital para invertir en tecnologías limpias.

Para evitar que la transición energética aumente las desigualdades, es imprescindible articular mecanismos compensatorios que protejan a los colectivos más vulnerables. Entre las medidas clave podrían encontrarse: ayudas directas a los hogares de menor renta para contrarrestar los efectos regresivos de la fiscalidad energético-ambiental, concesión automática de los bonos sociales eléctrico y térmico para eliminar barreras burocráticas, reindustrialización en sectores y tecnologías limpias que sostengan la actividad y el empleo en regiones afectadas, inversión en formación y políticas activas de empleo que faciliten la transición laboral, y ayudas a la adquisición de vehículos eficientes, dirigidas prioritariamente a los hogares con menos ingresos y ligadas a la retirada de los más contaminantes.

21. La infancia y la juventud son las grandes perdedoras de un modelo que recorta futuro y oportunidades. Generaciones sacrificadas por la inestabilidad, la falta de apoyos y unas condiciones que impiden construir proyectos de vida

Un patrón consistente atraviesa todos los análisis: la infancia y la juventud son las grandes perdedoras del modelo socioeconómico español. La tasa de pobreza infantil (29%) es la más alta de todos los grupos etarios y de las mayores de Europa. Los jóvenes sufren tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española. Las nuevas generaciones acceden al mercado laboral con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a sus predecesoras, arrastrando «cicatrices» permanentes. Ante este panorama, no pueden acceder a una vivienda ni ahorrar y se ven en la obligación de retrasar proyectos vitales o de renunciar a ellos.

La transformación de la vivienda en un espacio de inversión ha roto el pacto social no escrito que permitía a cada generación acceder a una vivienda en propiedad con un esfuerzo asumible. Actualmente, con precios que crecen mucho más rápido que los salarios, el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave en la definición de la posición social. La concentración de inmuebles en manos de propietarios que los adquieren como inversión reduce la oferta disponible y empuja al alza tanto los precios de compra como los de alquiler. En este contexto, una persona joven que debe destinar el 60% de sus ingresos al alquiler —porque no tiene otra forma de acceder a una vivienda— ve bloqueadas sus posibilidades de ahorrar, formarse, emprender, tener hijos o construir un proyecto de vida en condiciones dignas.

Esta realidad es el resultado de decisiones políticas que no han priorizado el apoyo a las familias ni a las generaciones más jóvenes. La falta de acción pública ha dejado a los jóvenes expuestos a un mercado laboral profundamente desigual, en el que la precariedad —con contratos temporales y empleos a tiempo parcial— los convierte en los primeros expulsados en cada crisis. Al mismo tiempo, los ingresos de quienes sostienen esos hogares no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, lo que agrava la inestabilidad. El sistema educativo no logra corregir las desventajas de origen y el acceso a la vivienda se ha transformado en un privilegio reservado para unos pocos, impidiendo a muchos jóvenes iniciar un proyecto de vida autónomo y digno.

Estamos, pues, ante una quiebra del contrato intergeneracional, en la que los jóvenes financian con precariedad el bienestar de generaciones anteriores sin perspectiva de reciprocidad futura. Sin un giro radical que ponga a la infancia y la juventud en el centro de las políticas públicas —garantía de ingresos infantil, empleo digno para jóvenes, reconocimiento real del derecho a la vivienda, educación verdaderamente compensatoria—, España hipoteca su futuro al convertir a buena parte de sus jóvenes en una generación perdida.

Capítulo 3

La dinámica de la exclusión social en España tras dos décadas de erosión: crisis reiteradas y recuperación insuficiente (*)

22. La exclusión social es un fenómeno multidimensional, dinámico y estructural que no puede medirse con una única cifra ni superarse con respuestas sectoriales. FOESSA aporta dos décadas de evidencia rigurosa y abre nuevas líneas cualitativas para comprender los procesos y orientar políticas activas de inclusión que transformen, a la vez, personas y contextos

La mirada a la exclusión social pone luz sobre las vulneraciones de derechos de los hogares más vulnerables

El concepto de exclusión social, nacido en la Francia de los años ochenta y pronto adoptado por la Comisión Europea, amplía la mirada clásica centrada solo en la pobreza monetaria. Alude a la acumulación dinámica de dificultades que impiden a ciertos grupos de personas y hogares disfrutar de sus derechos y participar plenamente en la vida económica, política, cultural y relacional. Para las políticas de inclusión y para los servicios sociales —públicos y del tercer sector—, esta perspectiva es tan imprescindible como la del ingreso mínimo lo es para la lucha contra la pobreza.

Las seis oleadas de la EINSFOESSA muestran la evolución de la exclusión tanto en las épocas de crisis como en las fases de recuperación

Desde 2007, FOESSA asumió esa visión multidimensional y procesual a través de la realización de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA) con 37 indicadores que abarcan

(*) Estas páginas recogen el resumen del tercer capítulo de: FLORES MARTOS, R. (coord.) (2025). *IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

empleo, consumo, vivienda, salud, educación, relación familiar, participación social y redes de apoyo. El objetivo que se persigue es la generación de un índice de la exclusión social que permita sintetizar las diferentes situaciones de exclusión de los hogares en diversas dimensiones y clasificar los hogares y personas según diferentes intensidades de exclusión social: integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa.

Las seis ediciones acumuladas constituyen hoy una serie casi única en Europa, capaz de mostrar cómo evoluciona la exclusión tanto en crisis (financiera, pandemia, inflación) como en fases de recuperación. Cada ola afina la definición y medición de los indicadores sin perder comparabilidad, y la tabla del presente resumen recoge su evolución detallada.

Este esfuerzo contrasta con la medición oficial europea. La tasa AROPE —referencia de la Estrategia Europa 2020— prometía capturar «pobreza y exclusión», pero se limita a tres indicadores económicos (renta, privación material, baja intensidad laboral), mezcla años de referencia y no tiene en cuenta la acumulación simultánea de dificultades. Tampoco refleja dimensiones clave como la vivienda, la salud o la participación. La reciente lista de 18 indicadores acordados por la Comisión de Protección Social corrige parcialmente esa laguna, pero sigue sin proponer un índice que integre los resultados y deja la exclusión como un mosaico de medidas inconexas.

La exclusión es estructural y encuentra sus raíces en nuestro modelo social y económico

La exclusión es estructural en cuanto hunde sus raíces en el propio modelo socioeconómico. Por eso, las intervenciones no pueden limitarse a «ajustar» a las personas vulnerables, sino que deben combinarse con estrategias comunitarias y reformas institucionales que modifiquen las dinámicas que generan desigualdad.

Al mismo tiempo, el concepto reconoce la capacidad de acción y decisión de quienes la padecen, el derecho a la protección social, el derecho a ingresos mínimos y a unos servicios sociales con recursos humanos y capacidad para atender esas situaciones, así como al acompañamiento de trabajadores y voluntarios que apoyen procesos de cambio personal y colectivo.

En la práctica, la respuesta integral avanza más rápido en el terreno de las entidades sociales y en algunos municipios que en las Administraciones centrales y autonómicas, atrapadas en la inercia burocrática que parcela las intervenciones, lo que disminuye su efectividad e introduce incluso contradicciones notables en su orientación. La coordinación intersectorial sigue siendo la gran asignatura pendiente si se pretende frenar una exclusión que tiende a crecer a medio plazo.

Las relaciones sociales como epicentro de inclusión exigen estrategias públicas centradas en fortalecer redes comunitarias, integrando prevención social con garantías universales diferenciadas

Para profundizar en las transiciones entre inclusión y exclusión, el IX Informe FOESSA añade una investigación cualitativa específica. Analiza historias de ascenso y caída, e identifica hitos que pueden llevar a la exclusión —pérdida de empleo, ruptura familiar, desahucio, enfermedad— y factores que facilitan el proceso de inclusión social, como las redes de apoyo, la formación o el acceso temprano a prestacio-

nes. Este enfoque dinámico complementa la imagen estática que ofrece cualquier encuesta y permite diseñar intervenciones más ajustadas a las trayectorias reales de las personas. Ayuda a entender cómo las relaciones personales pueden actuar, a la vez, como apoyo y barrera en los procesos de exclusión e inclusión social. Además, las relaciones son clave para conectar y dar sentido al resto de factores que influyen en estas dinámicas. En este sentido son necesarias políticas públicas y una intervención social que incida más en este factor, desarrollando actuaciones preventivas que activen la cohesión comunitaria, la familiar y las redes en general. De forma paralela hay que seguir avanzando en el enfoque de derechos que, defendiendo la universalidad, garantice vías de acceso diferenciadas en función de los colectivos y sus circunstancias.

23. Cada crisis ensancha la fractura social, y las recuperaciones ya no logran cerrarla. La integración social se erosiona progresivamente, arrastrando al conjunto de la sociedad hacia mayores niveles de precariedad. En 2024, la exclusión severa continuaba siendo un 52% superior a la de 2007, a pesar de la mejora tras la pandemia

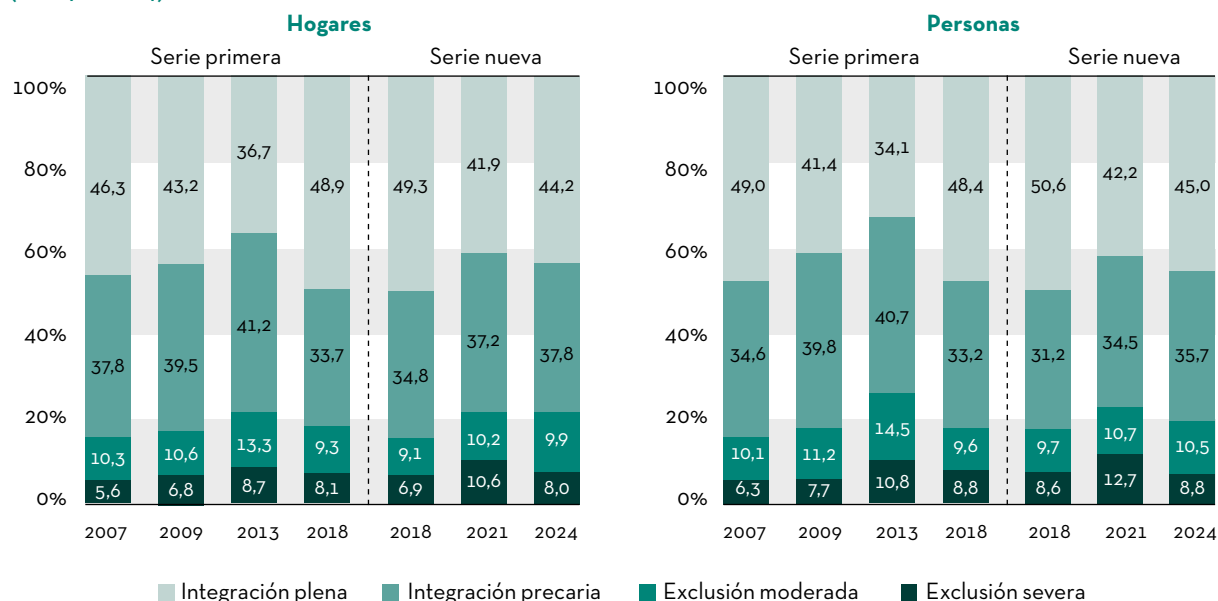
Tras el duro impacto de la pandemia, España ha experimentado una mejoría en términos de integración social, pero aún lejos de las condiciones de vida de 2018

La edición 2024 de la encuesta EINSFOESSA confirma que el golpe social de la COVID-19 empieza a remitir: la proporción de hogares en exclusión cae casi tres puntos y la de personas más de cuatro respecto a 2021. El descenso se concentra en la franja más dura: la exclusión severa, que retrocede cuatro puntos, mientras la moderada apenas varía. Paralelamente, la integración plena—hogares sin ninguno de los 37 indicadores afectados— remonta 3,2 puntos, y la integración precaria lo hace en 1,2. La fotografía inmediata es, por tanto, de alivio.

Actualmente, 9,4 millones de personas en España se ven afectadas por distintos procesos de exclusión social. Desde 2007 ha disminuido la integración plena, mientras que han aumentado tanto la integración precaria como la exclusión severa

Sin embargo, una mirada larga dibuja otra curva. Ni en 2018, tras cuatro años de bonanza poscrisis financiera, se había recuperado el terreno perdido en 2009-2014, ni ahora se compensan del todo los golpes concatenados de la Gran Recesión y la pandemia. Respecto a 2007, la exclusión total continua 2,9 puntos arriba y, dentro de ella, la severa 2,5 puntos. A la inversa, la integración plena se ha erosionado 4 puntos y se queda lejos de abarcar a la mitad de la población de 2007. La dinámica revela un patrón estructural: las crisis expanden la exclusión con rapidez, mientras las recuperaciones solo la reducen parcialmente. Sin reformas de calado, cada ciclo deja un poso más grueso de vulnerabilidad.

Evolución de los niveles de integración social en los hogares y la población de España (2007-2024)



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.

En 2024, 9,4 millones de personas se ven afectadas por diferentes procesos de exclusión social (2 millones más que en 2007). De estos, 4,3 millones se encuentran en exclusión severa. Aunque entre 2021 y 2024 el número de excluidos cayó en 1,7 millones, los recursos públicos destinados a la inclusión deberían crecer en consonancia con un 52% más de población severamente excluida que al inicio de la serie (1,4 millones más desde 2007).

La dimensión de la vivienda es el factor que incide con más fuerza en los procesos de exclusión social

Entre las ocho dimensiones, la que más mejora es la laboral. Los hogares afectados por exclusión del empleo bajan del 24,7% al 14%, el mejor dato desde 2007. En 2013 eran el 41,5%. El reverso lo pone la vivienda: tras un respiro en 2018, la exclusión residencial sube hasta afectar a una de cada cuatro personas y al 88% de las personas en exclusión severa. El sobreesfuerzo que supone el pago del alquiler, la tenencia precaria de la vivienda y el hacinamiento, son ya los ejes de una emergencia residencial que eclipsa los avances en empleo.

También empeora la dimensión política. La población sin derecho a voto —personas extranjeras de origen inmigrante— crece, y la abstención activa o la no participación en entidades ciudadanas se disparan, alimentando la «desafección democrática».

Mientras tanto, los indicadores de aislamiento social aumentan por la mayor presencia de personas que han pasado por instituciones cerradas (centros de menores, prisión, psiquiátricos). Ese tránsito estigmatiza y rompe redes, aunque el apoyo vecinal y familiar resiste e incluso mejora desde 2018. Hay menos

Población afectada por cada una de las dimensiones de la exclusión social para el total de la población, para la población excluida y para la exclusión social severa (%)

Dimensiones de la exclusión	Población total			Población excluida			Población en exclusión severa		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024	2018	2021	2024
Exclusión del empleo	16,1	24,7	14,0	58,5	68,4	49,4	72,1	78,7	63,2
Exclusión del consumo	14,5	17,6	13,8	62,7	60,3	53,3	86,5	78,4	74,2
Exclusión de la participación política	12,8	14,5	19,4	35,2	36,2	45,8	45,0	43,1	50,2
Exclusión de la educación	13,0	13,2	13,7	24,3	23,5	26,5	28,9	27,2	29,5
Exclusión de la vivienda	20,0	23,2	24,2	69,4	68,7	76,8	83,9	81,5	88,4
Exclusión de la salud	14,1	17,0	14,8	48,3	50,8	49,0	67,4	69,8	67,3
Conflicto social	5,1	9,7	5,7	14,2	21,9	16,6	17,6	24,6	20,9
Aislamiento social	3,0	4,4	5,4	3,3	7,7	13,3	3,2	7,9	16,6

Fuente: EINSFOESSA 2018, 2021 y 2024.

conflictos y violencia doméstica, pero más adicciones, confirmando que la exclusión genera fundamentalmente sufrimiento a quien la vive y que esto no necesariamente afecta a la convivencia segura.

En salud, el sistema ha recuperado parte del pulso previo al coronavirus, pero persisten grietas: suben 1,5 puntos los casos de enfermedades graves sin atención en el último año y casi dos millones de personas siguen sin poder costear medicamentos o dietas. Estos déficits se ceban entre la población en exclusión severa, donde la precariedad residencial y la brecha de ingresos exacerban la morbilidad.

La respuesta a los procesos de exclusión social debe ser integral y estructural, superando medidas coyunturales para construir un Estado social que transforme recuperaciones en progreso duradero

La reducción de la exclusión en 2024 demuestra la eficacia combinada de la reactivación económica, los ERTE, el ingreso mínimo y los refuerzos del Estado de Bienestar. Pero la erosión acumulada desde 2007 y la huella profunda en vivienda, participación y aislamiento evidencian límites sistémicos. Sin políticas estructurales –incremento de vivienda pública social en alquiler y de vivienda de emergencia social, reforma del mercado de alquiler, refuerzo de servicios públicos, coordinación estatal-autonómica-local y estrategias comunitarias–, la próxima crisis volverá a ampliar y profundizar la brecha. En definitiva, el diagnóstico subraya una doble lección: la inclusión es posible, pero exige un Estado social ambicioso y estable que convierta cada recuperación en progreso duradero y no en simple pausa entre retrocesos.

24. El empleo ya no protege ni incluye, está polarizado entre empleos cualificados y trabajos precarios. La inestabilidad, el desempleo crónico y la parcialidad impiden construir vidas sostenibles. La transformación tecnológica y la infravaloración de sectores esenciales, como cuidados u hostelería, cierran el acceso al empleo digno a los vulnerables. Sin una reforma profunda, trabajar ya no garantiza escapar de la exclusión

El empleo ha dejado de ser un escudo contra la exclusión: uno de cada diez trabajadores ocupados en España vive en situación de exclusión social

La recuperación pospandemia ha reanimado el mercado laboral español, pero la integración social resultante sigue siendo frágil y desigual. En 2024, la exclusión vinculada al empleo se redujo al 14% de los hogares, su registro más bajo desde 2007, en línea con una tasa de paro media del 11,3% (2,8 millones de personas). Sin embargo, la mejora convive con la expansión de trabajos precarios y con una vulnerabilidad persistente entre quienes permanecen fuera del mercado de trabajo.

La dualización del mercado laboral se intensifica mientras la mejora de la tasa de desempleo convive con la proliferación de trabajos precarios que perpetúan la exclusión mediante salarios insuficientes y desprotección social

Los datos de EINSFOESSA confirman esa dualidad. Por un lado, retroceden las modalidades extremas: los hogares cuyo sustentador lleva al menos un año en paro bajan del 4,3% al 2,2%, los que concentran todos los activos desempleados descienden del 10,3% al 6% y la inestabilidad laboral grave se reduce a la mitad. Y por otro, en paralelo, crecen los trabajos pocos integradores: los «empleos de exclusión» —venta ambulante marginal, jornaleros, empleadas de hogar sin cualificar, recogida de residuos— alcanzan el 2,7% de los hogares y los empleos sin contrato ni cotización el 2,2%. Estas ocupaciones combinan bajos salarios, desprotección y estigma social. Sin embargo, el desempleo de larga duración sigue una tendencia singular, superando todavía los niveles previos a la Gran Recesión; en 2024, una de cada cuatro personas paradas llevaba más de dos años buscando trabajo.

La inestabilidad y la parcialidad laboral, especialmente en los sectores más vulnerables, impide romper el ciclo de pobreza y privación material y dificulta cualquier proyecto de vida sostenible

Disponer de un empleo protege, pero no inmuniza: uno de cada diez ocupados vive en exclusión social y más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja. El golpe es mucho mayor para las personas en situación de desempleo: casi seis de cada diez sufren exclusión —uno de cada tres en su forma severa—, triplicando la incidencia de 2007. En los hogares donde el sustentador está desempleado, más del 80% padece exclusión y más de la mitad exclusión severa. El paro se revela así como el principal acelerador de la vulnerabilidad.

Persisten brechas salariales y una fuerte infravaloración en sectores clave para la economía, como los cuidados, la hostelería o los servicios

Las trayectorias dentro de la inactividad también divergen. Quienes se dedican a las labores del hogar y los estudiantes registran ahora riesgos de exclusión mayores que antes de la pandemia, mientras los pensionistas han reducido a la mitad su vulnerabilidad y se sitúan como el colectivo menos expuesto, un cambio histórico que refleja el efecto estabilizador del sistema de pensiones y la mejora de las prestaciones mínimas.

El saldo final muestra una mejora del empleo acompañada de más precariedad y de mayor fragilidad para quienes continúan sin trabajo. Las políticas de inclusión deben concentrarse en los desempleados y en quienes ocupan puestos de baja calidad. Las medidas activas —orientación, formación, incentivos a la contratación, empleo protegido— han de articularse con apoyos sociales, de salud mental y de cuidados familiares. Sin una dotación de recursos humanos y económicos suficientes, además de una coordinación estable entre servicios sociales y oficinas de empleo, la vulnerabilidad corre el riesgo de cronificarse pese al avance macroeconómico.

25. No fallan las personas, falla el sistema. La mayoría de quienes están en exclusión se esfuerzan, pero se enfrentan a servicios fragmentados, poco personalizados y mal dimensionados. Sin inversión en orientación, formación y coordinación, su activación se convierte más en un circuito interminable que en una puerta de salida efectiva

Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa practican una resistencia activa ante la exclusión, movilizando estrategias de inclusión y demostrando capacidad de respuesta

Los datos de la EINSFOESSA 2024 confirman que la mayoría de los hogares en exclusión participa en alguna actividad orientada a la inclusión (empleo, formación, estudios o programas de servicios sociales). Entre 2021 y 2024, ya superadas las restricciones sanitarias, la tasa de hogares en exclusión que participaron en actividades para su inclusión social saltó del 67,6% al 77,3%. Más de la mitad (52,8%) mantuvo algún empleo a lo largo del año, casi uno de cada cuatro accedió a formación y cerca de tres de cada diez recibió apoyo específico de los servicios sociales para la inclusión. Es decir, quienes sufren la exclusión más intensa movilizan más estrategias que el total de los hogares para salir de ellas.

La transformación de los servicios sociales tras la pandemia evidencia el tránsito desde la atención asistencial hacia intervenciones personalizadas centradas en itinerarios de inclusión social.

Durante 2021, el enorme aumento de ayudas de emergencia (alimentos, prestaciones económicas) sobrecargó a los servicios sociales. Con la extensión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la retirada paula-

Realización de distintas actividades orientadas a la inclusión en los hogares y en los hogares afectados por la exclusión social (% de hogares de cada grupo)

	Exclusión moderada			Exclusión severa			Total hogares		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024	2018	2021	2024
Alguien trabaja en el hogar en el año	72,0	69,9	67,6	57,0	49,5	52,8	69,5	66,1	69,3
Alguien estudia en el hogar en el curso	23,2	20,8	20,2	22,6	18,4	17,2	18,9	18,7	16,7
Alguien formándose en el hogar en el último año	16,0	20,4	23,6	10,1	17,0	23,8	15,6	20,9	23,6
El hogar recibe apoyo a la inclusión de los servicios sociales	11,1*	11,1	13,5	26,9*	21,9	28,4	4,4*	4,5	5,8
Total de hogares en que alguien realiza actividades de inclusión	81,0*	79,0	81,3	71,1*	67,6	77,3	76,8*	71,8	75,8

**Nota:* La estimación del impacto de las actividades de inclusión de los servicios sociales para 2018, para el que no hay datos comparables, se realiza a partir de la población que acude a estos servicios y de la proporción media de los que participan en actividades de inclusión.

Fuente: Elaboración propia a partir de EINSFOESSA 2024.

tina de las restricciones, la presión asistencial se redujo: la proporción de hogares severamente excluidos que recibían ayuda básica cayó del 52% al 28%, mientras que la atención orientada a itinerarios de inclusión subió del 22% al 28%. El alivio burocrático generado por el IMV permitió a los profesionales dedicar más tiempo a acciones personalizadas.

Los grupos más vulnerables desmienten el mito de la pasividad al duplicar su participación en programas de inclusión y mantener altas tasas de búsqueda activa de empleo

La evidencia confirma que los grupos poblacionales más vulnerables no se «desligan», sino que encuentran obstáculos sistémicos para convertir su esfuerzo en integración real. Ampliando el foco a personas de 18 a 64 años que llevan al menos seis meses en desempleo, la participación en actividades de inclusión se duplicó respecto a 2021 (del 25,8% al 51,1%) y la búsqueda activa de empleo creció 10 puntos (hasta el 83%).

Un análisis de regresión logística muestra que:

- La exclusión severa eleva significativamente la probabilidad de participar en programas de inclusión, desmontando el estereotipo de inactividad.
- Quienes reciben el IMV o rentas mínimas son el grupo con mayor participación (85%), 30 puntos por encima de la media, aunque su búsqueda de empleo no difiere del resto.
- Las personas con discapacidad o enfermedad mental participan más en programas de inclusión, pero buscan empleo con menos intensidad.

- La población nacida en el extranjero se implica más en formación y servicios sociales, aunque registra menor búsqueda de empleo inmediata, en ocasiones limitada por las barreras para inscribirse como demandantes de empleo.

La brecha entre la alta motivación individual y la escasa capacidad institucional evidencia un sistema de empleo con recursos insuficientes y orientación inadecuada

España destina un 0,76% del PIB a políticas activas de empleo (PAE), cifra elevada en términos absolutos, pero baja si se pondera por la tasa de paro: apenas 0,06 puntos porcentuales del PIB por cada punto de desempleo, frente al 0,34 de Dinamarca. Con solo 5 personas orientadoras por cada 1.000 desempleadas (la media europea es de 17), el sistema carece de personal para el acompañamiento individualizado que la evidencia internacional considera clave para colectivos de alta vulnerabilidad.

Además, el presupuesto está desequilibrado: el 40% se dedica a incentivos a la contratación—con impacto limitado y escasa llegada a personas excluidas— y solo el 14% a formación, de la cual los programas mixtos de empleo/formación (como las Escuelas Taller) representan apenas el 6% de los participantes. La Red Europea de Servicios Públicos de Empleo clasifica a España en «baja madurez organizacional», señalando déficit de coordinación entre servicios de empleo y servicios sociales y poca adaptación a jóvenes sin cualificación, inmigrantes o mujeres víctimas de violencia, señalados, sin embargo, como colectivo de atención prioritaria por la Ley de Empleo.

Los proyectos piloto financiados por el Plan de Recuperación muestran que la tutorización intensiva, los itinerarios multidimensionales y las ratios bajas de profesionales mejoran la inserción laboral y el bienestar psicosocial. Sin embargo, su impacto sigue siendo marginal porque no se han escalado a toda la población objetivo.

26. La vivienda es un nuevo vector de desigualdad y un factor clave en la exclusión social. Una vivienda adecuada es un derecho inaccesible para muchas familias, quienes sufren inseguridad e inadecuación. Esto impacta en los recursos económicos, la salud y los proyectos vitales de los jóvenes

El mercado del alquiler se ha consolidado como una de las principales vías hacia la exclusión residencial, debido a la creciente inaccesibilidad económica y a la escasez de vivienda pública social en alquiler

En los últimos seis años, la vivienda ha pasado de ser un factor de integración a convertirse en la gran emergencia social para los hogares más vulnerables. En 2024, uno de cada cuatro hogares sufre al menos un problema residencial —de acceso, habitabilidad, seguridad o entorno—, 4 puntos porcentuales más que en 2018. Casi todos los indicadores de exclusión de la vivienda de la EINSFOESSA muestran un deterioro: el hacinamiento grave alcanza al 7% de la población; las humedades, plagas

y malos olores ya afectan al 6%; la tenencia en precario (cesiones, subarriendos, ocupaciones o avisos de desahucio) llega al 6,3%; y los gastos desorbitados de vivienda comprometen la economía del 14,1% de los hogares, a pesar de la leve mejora tras la pandemia.

Indicadores de exclusión residencial en España. Proporción de personas que viven en hogares afectados por cada indicador en 2018-2024 (%)

	2018	2021	2024
Hogar en infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar	0,3	0,1	0,3
Hogar con deficiencias graves en la construcción de la vivienda	2,0	1,9	2,5
Hogar con situaciones de insalubridad: humedades, suciedad, olores y plagas	3,4	4,9	6,0
Hogar en hacinamiento grave (<15 m² por persona)	5,1	6,4	7,0
Hogar con tenencia de la vivienda en precario	3,9	4,8	6,3
Hogar con entorno muy degradado	0,8	2,1	1,5
Hogar con personas de movilidad reducida y con barreras arquitectónicas	2,0	2,5	3,3
Hogar con gastos excesivos de la vivienda	12,4	17,1	14,1
Hogar que no cuenta con algún equipamiento doméstico básico	1,5	2,6	3,3

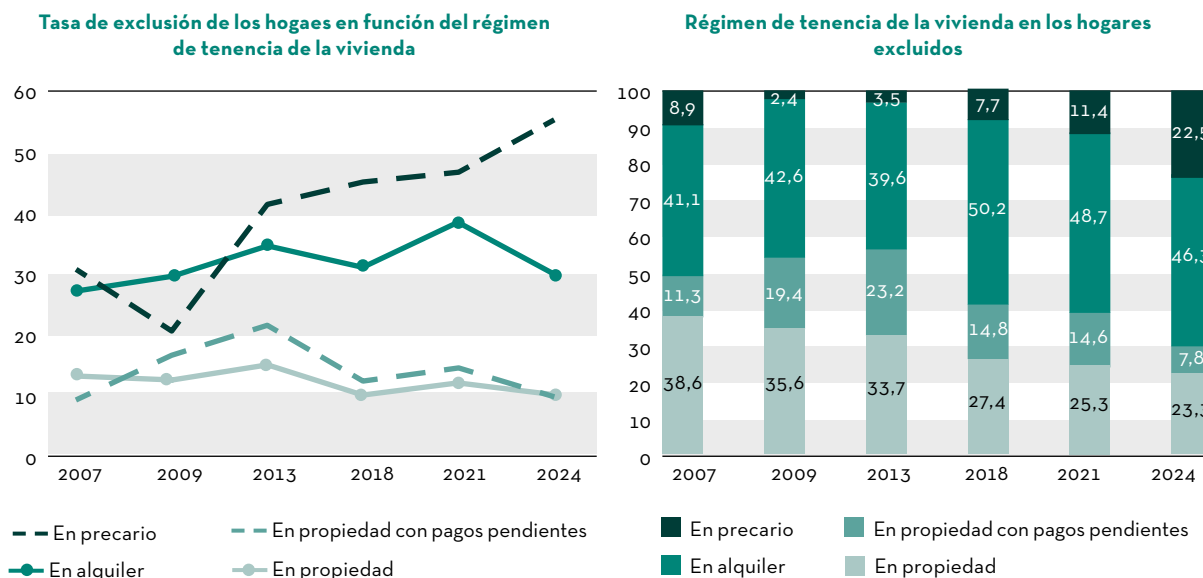
Fuente: EINSFOESSA 2018, 2021 y 2024.

La raíz del problema es la falta de asequibilidad: los precios de compra y sobre todo de alquiler suben muy por encima de los ingresos de los hogares modestos. Si del presupuesto familiar se descuentan los gastos de vivienda, el 14,1% de la población cae bajo el umbral de pobreza severa. El efecto es especialmente cruel para quienes ya estaban en situación límite: los hogares situados por debajo del 40% de la mediana de ingresos destinan más del 70% de lo que ganan al alquiler, frente a menos del 20% en los estratos acomodados. El pago de la hipoteca también exige sacrificios: en los hogares más pobres consume el 40% de los ingresos, proporción tres veces superior a la de las clases altas. Este sobreesfuerzo concentra la exclusión en los sectores con menos recursos y agrava su privación material.

La propiedad sigue siendo un factor de protección, mientras que la pérdida de patrimonio y la descapitalización empujan a los sectores excluidos a formas de tenencia más inestables

A la tensión de precios se suma un cambio drástico en el régimen de tenencia. En 2013, el 57% de los hogares excluidos poseía su vivienda (con pagos pendientes); en 2024, esa tasa se ha reducido al 31%. La propiedad ya pagada, que antes protegía al 34% de hogares vulnerables, hoy solo ampara al 23%. El alquiler avanza, pero sobre todo proliferan los arreglos inestables: cesiones de familiares o subarriendos sin garantías. Como la causalidad va en ambos sentidos, la falta de acceso estable a la vivienda refuerza la exclusión y esta a su vez obstaculiza el acceso a la vivienda adecuada, alimentando un círculo vicioso.

Relación entre el modo de tenencia de la vivienda y la incidencia de la exclusión social (%)



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.

Ante el encarecimiento de la vivienda, muchas personas adoptan estrategias de resistencia que revelan nuevas formas de exclusión

La precariedad habitacional se refleja también en la calidad física de las viviendas. El hacinamiento ha crecido un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en «nanopisos». Las deficiencias graves de construcción afectan ya al 2,5% de las viviendas y la insalubridad a un 6%, mientras que un 3,3% carece de equipamiento doméstico básico. Los hogares con miembros con movilidad reducida soportan más barreras arquitectónicas (3,3%), lo que limita su autonomía y deteriora su salud. Estas carencias son invisibles para la opinión pública porque suceden «de puertas adentro», de modo que suscitan menos presión social que el sinhogarismo o los asentamientos chabolistas.

El mapa de la exclusión residencial varía según el tamaño del municipio. Las grandes ciudades, las urbes globales y buena parte de la costa concentran los peores problemas de accesibilidad: el esfuerzo para pagar vivienda supera el 40% de los ingresos en Barcelona, Palma o Málaga, y las demoras en los pagos de hipoteca o alquiler duplican las de los pueblos pequeños. A ello se añaden dificultades para sufragar suministros básicos: uno de cada seis hogares urbanos tiene problemas para pagar la luz o la calefacción, frente a uno de cada dieciséis en las zonas rurales. En cambio, los núcleos menores de 10.000 habitantes sufren la escasez de servicios esenciales (transporte público, atención primaria, escuela obligatoria), lo que frena su capacidad para acoger población urbana expulsada por los precios.

Se necesita una visión más holística que contemple habitabilidad, entorno y seguridad, así como políticas de Estado que aborden el desequilibrio territorial entre la «España vaciada» y la «España abarrotada»

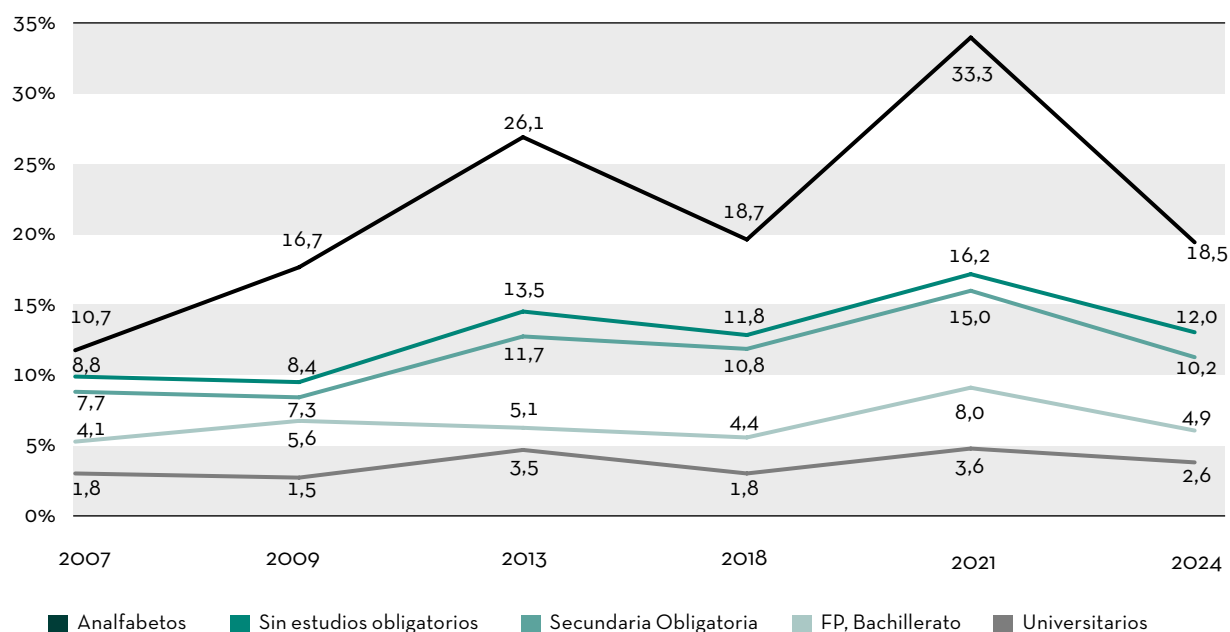
Ante una emergencia de esta magnitud, son necesarias políticas públicas diversas, profundas y coherentes: ampliar con rapidez el parque de vivienda social en alquiler, pero también facilitar el acceso a la propiedad para los hogares con menos recursos —vía cooperativas, fórmulas de cesión de uso o alquiler con opción de compra— y regular el mercado para contener subidas abusivas de precios. Es necesario reequilibrar el territorio incentivando la descentralización empresarial, el teletrabajo y los traslados a ciudades intermedias o zonas rurales mediante bonificaciones fiscales, ayudas al retorno y mejora de las infraestructuras de transporte, salud y educación. Además de un ambicioso plan de rehabilitación energética y de adaptación de viviendas para personas con movilidad reducida, financiado con fondos europeos, y la movilización de parte de los casi cuatro millones de viviendas vacías censadas por el INE.

27. La ESO ya no protege: en la España digital, el «cortafuegos» contra la pobreza se ha desplazado al Bachillerato y a la FP, por lo que el título postobligatorio se convierte en la nueva llave de la integración; sin él, el futuro laboral se achica y la exclusión se hereda. Reforzar la educación inicial, evitar el abandono y multiplicar las segundas oportunidades ya no es solo un objetivo de equidad: es el dique que impide convertir la brecha educativa en desigualdad crónica

La educación postobligatoria se consolida como nueva frontera de protección, donde no completar estudios superiores a la ESO multiplica por 2,7 el riesgo de exclusión severa

Durante gran parte de las últimas décadas, el ascenso educativo funcionó como el cortafuegos más eficaz frente a la exclusión social; hoy su efecto sigue siendo determinante, pero se ha debilitado y ha cambiado de umbral. Los datos de la serie EINSFOESSA 2007-2024 muestran que no completar la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) multiplica por 2,7 la probabilidad de caer en exclusión severa, mientras que finalizar estudios postobligatorios (Bachillerato, FP de grado medio o superior) reduce ese riesgo a la mitad. En un mercado laboral cada vez más digital y automatizado, el «hambre de cualificación» penaliza más que nunca a los perfiles con baja formación: la ESO, que hace veinte años bastaba para obtener empleos razonablemente estables, ya no protege frente a trabajos precarios ni frente a la vulnerabilidad económica.

Incidencia de la exclusión social severa según el nivel de estudios de la población en España (2007-2024)



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.

El sistema educativo debe transformarse en instrumento preventivo de primera necesidad para convertirse en herramienta esencial contra la exclusión

El desplazamiento del listón educativo sitúa al sistema de enseñanza ante un nuevo reto estructural. El nivel de estudios se convierte en la puerta de entrada –o de salida– a la integración social, de modo que la política educativa debe pasar de ser un criterio de equidad deseable a un instrumento preventivo de primera necesidad. Esto implica, en primer lugar, reducir drásticamente el abandono escolar temprano, todavía cercano al 13%. Frenar las fugas antes de la titulación básica requiere reforzar la orientación, mejorar la educación infantil de 0-3 años –clave para igualar oportunidades desde el inicio– y combatir la segregación por origen social o migratorio que concentra dificultades en determinados centros.

Para quienes abandonan, los programas de «segunda oportunidad» deben reunir tres ingredientes: formación flexible, acompañamiento psicosocial y pasarelas directas al empleo. Los itinerarios combinados de alfabetización digital, las competencias transversales y las prácticas remuneradas son los que mejor reenganchan a jóvenes desvinculados. Entre la población adulta ya en situación de exclusión o atrapada en empleos precarios, la solución exige una combinación de formación modular, orientación laboral y apoyo social coordinado con servicios de empleo y entidades comunitarias; sin ese andamiaje integral, la capacitación aislada rara vez se traduce en inserción estable.

La combinación entre bajo nivel educativo de los progenitores y edad de entrada temprana al trabajo es un predictor sólido de pobreza infantil y de transmisión de la exclusión

La desigualdad educativa muestra una clara transmisión entre generaciones. La combinación de bajo nivel formativo paterno y entrada temprana en el mercado de trabajo predice con fuerza la pobreza infantil y perpetúa la exclusión: hijos e hijas de progenitores sin postobligatoria que empiezan a trabajar antes de los 18 años tienen el doble de riesgo de repetir ese patrón. Romper esa cadena implica políticas familiares que apoyen la prolongación de estudios —becas, refuerzo escolar, campus de verano— y un mercado laboral que no «aspire» mano de obra juvenil sin cualificación.

Las actividades extraescolares conforman otro eje de reproducción de la desigualdad

El 63% de los hogares con menores de 16 años usa al menos una actividad extraescolar. Las diferencias por integración social son notables: el deporte es la opción mayoritaria en todos los estratos, pero practicarlo fuera del colegio (más caro) va del 44% (hogares integrados) al 16% (exclusión severa). En idiomas, música o danza, las brechas se amplían: clases de idiomas externas las utiliza el 15% de los hogares integrados y solo el 3% de los severamente excluidos. Este acceso segmentado refuerza las ventajas culturales de los menores de clases medias y altas.

28. La brecha digital actúa como un muro invisible. En una España hiperconectada, la brecha digital ya no es solo un problema técnico, sino que representa la llave que abre o cierra el acceso a empleo, educación y ciudadanía. Blindar la conectividad y las competencias de los hogares vulnerables se ha convertido en una nueva política social imprescindible en nuestro tiempo

El apagón digital se consolida como multiplicador de desigualdades, reforzando la exclusión económica, educativa y relacional

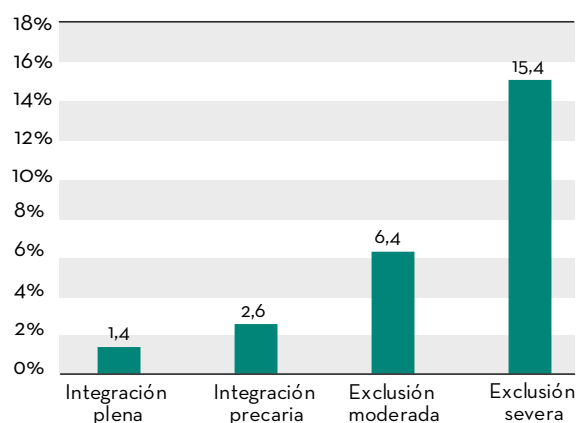
En la actual España hiperconectada, la brecha digital se ha convertido en un potente acelerador de todas las demás desigualdades. Los datos de la EINSFOESSA 2024 revelan que un tercio de los hogares vulnerables vive en «apagón digital»: carece de conexión ilimitada, de dispositivos adecuados y/o de las competencias necesarias para manejarse en línea. Esa carencia restringe la búsqueda de empleo, la formación a distancia, los trámites con la Administración y la participación social, creando un círculo vicioso que refuerza la exclusión económica, educativa y relacional. El fenómeno se manifiesta en tres grados. En la cúspide se sitúa la conectividad plena, reservada a quienes combinan red estable, ordenador o tableta y habilidades suficientes. El siguiente escalón es la conexión precaria: hay internet y destrezas, pero solo se dispone de un teléfono móvil, insuficiente para teletrabajo o estudios avanzados. La base, y la más problemática, es el auténtico apagón digital: falta al menos uno de esos tres pilares, lo que imposibilita realizar tareas básicas como enviar un currículum, descargar un certificado o ayudar a los hijos con tareas escolares *online*.

La brecha no es meramente tecnológica, es también económica y territorial. En el medio rural, el 30% de los hogares sigue sin internet ilimitado, frente al 21% estatal, y casi el 6% carece de cualquier dispositivo, reflejo tanto de menor renta como de peores infraestructuras. El nivel de estudios y la edad agrandan la distancia: cuando la persona sustentadora principal supera los 65 años y no tiene estudios reglados, la probabilidad de carecer de red ilimitada escala al 57%; siete de cada diez no poseen habilidades digitales mínimas. Los hogares en pobreza severa combinan el 35% sin conexión estable con el 34% sin destrezas, duplicando las carencias de los estratos acomodados.

Uno de cada tres hogares en exclusión sufre cortes de conexión, lo que limita gravemente el acceso a la información, la formación y las oportunidades laborales

La consecuencia práctica es que uno de cada tres hogares en exclusión sufre cortes o limitaciones de servicio y, con ello, pierde oportunidades decisivas. Un 9% declara haber quedado fuera de trámites con la Administración; un 1,2% no pudo optar a un empleo por no poder enviar a tiempo una solicitud o entrevistarse en línea. La cifra puede parecer baja, pero probablemente subestima la brecha real: quien vive desconectado ignora muchas de las oportunidades que nunca llega a ver. La Administración electrónica, que ya utilizan cuatro de cada cinco ciudadanos para pedir citas o prestaciones, corre el riesgo de transformar el derecho de relacionarse o no con la Administración a opción del ciudadano en un privilegio reservado a quienes tienen buena fibra óptica, ordenador y competencias. Combatir el apagón digital no consiste solo en instalar wifi; es blindar la igualdad de oportunidades en una sociedad que ya mezcla, de forma inseparable, lo físico y lo virtual.

Proporción de hogares que manifiestan haber perdido oportunidades debido al apagón digital, según su nivel de integración/exclusión



Fuente: EINSFOESSA 2024.

La desconexión erosiona la autoestima y el sentido de pertenencia: el niño ignorado en clase puede quedar igualmente al margen de los chats escolares; la trabajadora a la que nunca copian en correos internos ve reforzada su sensación de invisibilidad. A la inversa, la universalización de la mensajería y las redes puede amplificar la discriminación desde el espacio físico al digital. Por eso, la estrategia de

inclusión exige cinco frentes: desplegar banda ancha universal en zonas rurales y barrios de baja renta; crear bancos públicos de ordenadores y subvenciones para familias pobres; ofrecer formación competencial escalonada, enlazada a servicios sociales y de empleo; mantener canales presenciales alternativos en salud, educación y trámites oficiales para evitar que la desconexión se traduzca en pérdida de derechos; y añadir apoyo psicosocial que enseñe un uso crítico, seguro y emocionalmente saludable de la red e introduzca a todos en la inteligencia artificial emergente.

29. La salud se ha convertido en un espejo de la desigualdad: mientras los diagnósticos de depresión y ansiedad entre la población en exclusión severa duplican la media, las listas de espera y la privatización minan el acceso a la atención sanitaria. Desde 2021 ha crecido el número de hogares que necesitó tratamiento por enfermedad grave o crónica y no lo recibió, el doble en los hogares más vulnerables

La erosión del sistema sanitario público convierte la salud en nuevo eje de desigualdad social

En 2024, la salud se confirma como un eje decisivo de la desigualdad social en España. Las listas de espera crecientes han erosionado la capacidad protectora del sistema público justo cuando más se requería. Ese deterioro se vuelve evidente en el 1,5% de incremento, respecto a 2021, de hogares que declararon haber necesitado atención por una enfermedad grave o crónica y no haberla recibido a lo largo del año; el problema afecta con especial intensidad a las familias en exclusión severa (el 6,1%), donde la tasa se duplica frente a la media nacional. Cuando la demora quirúrgica o los copagos farmacéuticos se convierten en barreras, la enfermedad no tratada merma la empleabilidad y agrava la precariedad económica, abriendo un círculo vicioso difícil de romper.

La muy escasa atención a la salud mental profundiza la exclusión social cuando los diagnósticos de depresión y ansiedad alcanzan tasas críticas entre los colectivos más vulnerables

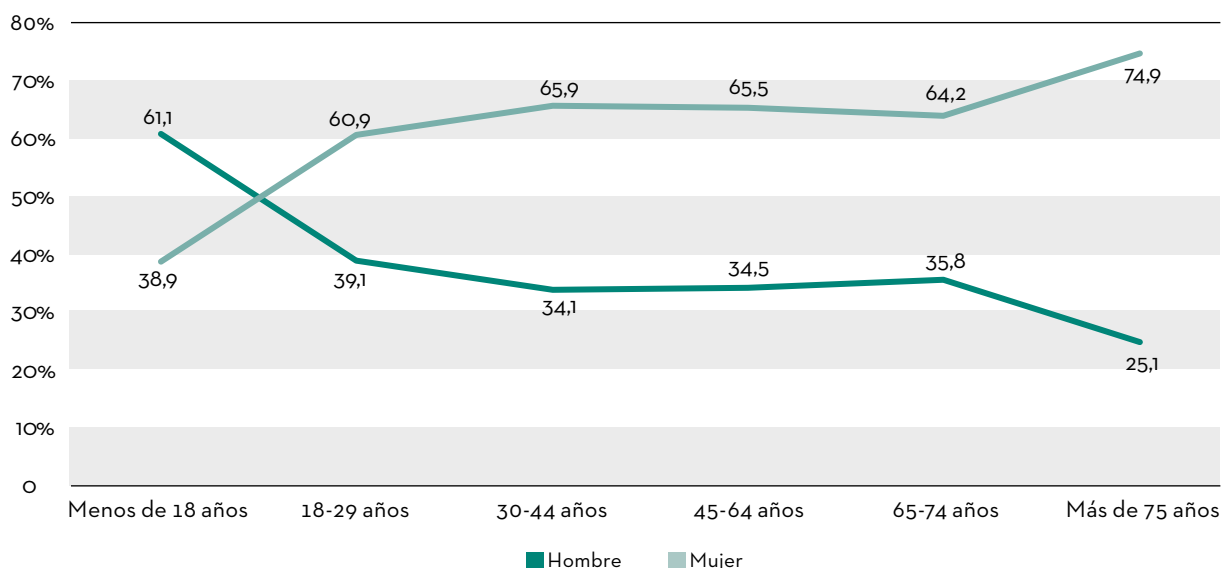
La brecha sanitaria se ensancha todavía más en el terreno de la salud mental. Aunque los indicadores han mejorado levemente desde el pico de la crisis sanitaria de 2021, los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan ya a una de cada cinco personas y superan el 35% entre quienes viven en exclusión grave.

Mujeres, jóvenes y mayores concentran el mayor impacto en salud mental, evidenciando cómo la falta de apoyo multiplica los riesgos mientras la participación comunitaria actúa como protección

Las mujeres presentan prevalencias un 60% superiores a las de los hombres; los jóvenes de 16 a 29 años concentran cuadros relacionados con la incertidumbre laboral y vital; y los mayores de 65 sufren una

combinación de deterioro físico y soledad no deseada. Además, la ausencia de redes de apoyo multiplica por 2,5 el riesgo de trastorno mental, mientras que la pertenencia a asociaciones, grupos deportivos o iniciativas vecinales actúa como amortiguador, reduciendo la probabilidad de problemas psicológicos en torno a un 30%.

Distribución por edad y sexo de las personas con diagnósticos de salud mental en 2024



Fuente: EINSFOESSA 2024.

Aislamiento y conflicto social catalizan el malestar psicológico mientras factores sanitarios se entrelazan con condiciones habitacionales y relacionales

Quien reside en barrios degradados o sufre violencia intrafamiliar está más expuesto a estrés crónico y dispone de menos recursos para afrontarlo. Así, los factores clínicos se entrelazan con condiciones habitacionales, laborales y relacionales, subrayando la necesidad de respuestas integrales. Reforzar la atención primaria y los servicios de salud mental públicos, establecer tiempos máximos de espera transparentes, coordinar itinerarios entre sanidad, servicios sociales y empleo, y fomentar redes comunitarias capaces de combatir la soledad son pasos imprescindibles. Sin ellos, la salud —física y mental— seguirá reflejando y amplificando la brecha que separa a los grupos más vulnerables del resto de la sociedad.

30. Las relaciones son un eje central en la exclusión-inclusión, actuando como factor protector y de riesgo. Fortalecer estos vínculos es clave, como lo es desarrollar políticas basadas en derechos que reconozcan las necesidades de los colectivos en exclusión y garanticen su acceso efectivo a la inclusión

El debilitamiento de las redes de apoyo convierte la exclusión en aislamiento total, quintuplicando la soledad absoluta entre los sectores más vulnerables de España

En la sociedad española, la soledad absoluta –hogares sin nadie a quien acudir en caso de enfermedad o dificultad– es hoy minoritaria: ha bajado del 6,2% de los hogares en 2007 al 4,7% en 2024, y afecta a menos del 2% de las personas. Sin embargo, esta mejora global oculta una fractura creciente entre la población integrada y la excluida. Entre quienes sufren exclusión severa, la proporción de personas atrapadas en aislamiento se ha quintuplicado: del 3,2% en 2018 al 16% en 2024.

Los datos longitudinales de la EINSFOESSA muestran que la capacidad de «tirar de red» –pedir ayuda a familiares, vecinos o amigos– se reforzó tras la Gran Recesión, cuando los recortes y la precariedad empujaron a la solidaridad informal. Con la pandemia, esa red se tensó y, lejos de recomponerse, continúa encogiéndose. Hoy un número creciente de hogares excluidos declara no poder contar con nadie: solo un tercio mantiene relaciones de ayuda mutua (frente al 63% en 2018), un tercio depende exclusivamente de ayudas externas (32,5%) y otro tercio ya «ni da ni recibe» soporte alguno (30,5%).

Modelo de relaciones de ayuda de los hogares en exclusión severa según si ayudan a otros hogares o si tienen personas a las que pedir ayuda cuando lo necesitan (% de los hogares)

	2007	2009	2013	2018	2021	2024
Ayuda mutua	51,5	47,1	53,8	63,3	36,5	33,2
Solo da ayuda	6,7	9,2	12,8	5,4	7,1	3,8
Solo recibe ayuda	12,9	18,9	20,7	18,4	36,1	32,5
Ni da ni recibe	28,9	24,8	12,8	12,9	20,4	30,5

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.

La ruptura de redes familiares y vecinales limita la resiliencia, dificulta el acceso a información sobre ayudas y reduce las posibilidades de insertarse en el mercado laboral

El antiguo equilibrio español –empleos precarios y Estado de Bienestar insuficiente compensados por fuertes lazos familiares– se ha transformado. La reforma laboral ha reducido parte de la precariedad y el «escudo social» ha ampliado prestaciones, pero la fortaleza de los vínculos comunitarios se ha deteriorado precisamente entre quienes más los necesitan. Al perder capital relacional, los sectores excluidos quedan más expuestos a la pobreza de apoyos y dependen en mayor medida de unos ser-

vicios públicos y unas ONG que, a su vez, deben atender a redes cada vez más frágiles y homogéneamente vulnerables. Si la tendencia persiste, la inclusión social descansará menos sobre la ayuda mutua y más sobre la capacidad —y la calidad— de las políticas públicas para tejer nuevas protecciones donde antes llegaba la comunidad.

Las políticas públicas ignoran la dimensión relacional pese a ser el factor estratégico que determina si eventos críticos derivan en exclusión crónica o en recuperación social

El IX Informe FOESSA incorpora, como innovación analítica, una lectura dinámica de la exclusión social que complementa la imagen ofrecida por la EINSFOESSA. El objetivo es pasar de la «fotografía» estática de la prevalencia a la «película» de las trayectorias: cómo transitan los hogares entre inclusión y exclusión, qué factores activan giros hacia la dependencia o la autonomía y cómo interactúan estructuras, recursos institucionales y las propias iniciativas familiares. La exclusión se entiende aquí como proceso temporal, multidimensional y heterogéneo, coherente con marcos clásicos que la sitúan a lo largo de gradientes de integración/exclusión. La novedad reside en vincular ese enfoque procesual con una matriz empírica fina de factores e hitos biográficos.

El hallazgo transversal es inequívoco: las redes sociofamiliares constituyen el factor estratégico que articula el resto del sistema de inclusión/exclusión. El mismo evento —pérdida de trabajo, enfermedad, deuda— deriva en itinerarios divergentes según la densidad, reciprocidad y calidad de los vínculos disponibles. Las redes formales pueden sustituir (parcialmente) déficits familiares; las redes familiares pueden compensar demoras institucionales. Sin incorporar indicadores relacionales no es posible interpretar el sentido de los demás factores ni anticipar su efecto.

El camino hacia la inclusión depende del capital relacional disponible, lo que exige actuaciones preventivas que tejan vínculos comunitarios y familiares

La exclusión social no se explica solo por déficits de ingresos o empleo; emerge de la interacción cambiante entre estructuras, recursos institucionales, relaciones y la propia capacidad de acción de las familias. Entender —y transformar— las trayectorias exige políticas que trabajen simultáneamente tanto sobre las condiciones materiales como sobre las redes de relaciones personales. Allí donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible; donde se rompen, la dependencia se acelera. Un enfoque científico de la inclusión en España debe, por tanto, medir y reforzar las relaciones tanto como los recursos.

31. La desconexión política de sectores vulnerables se intensifica paralelamente al debilitamiento comunitario, lo que exige políticas de inclusión que reconstruyan lazos sociales y promuevan espacios de participación en el entorno cotidiano

El deterioro de la salud democrática en el sistema político español, ampliamente debatido en las más altas instancias institucionales, parece tener su reflejo en un proceso paralelo de exclusión

política de una parte creciente de la población. Cada vez más sectores sociales quedan al margen del proceso colectivo de toma de decisiones, lo que no solo refuerza su situación de exclusión, sino que también limita su capacidad de influir en reformas estructurales que respondan a sus intereses y necesidades.

Este distanciamiento político se acompaña de un debilitamiento de los vínculos sociales a nivel comunitario. Allí donde antes las redes de solidaridad primaria —familiares, vecinales o informales— actuaban como sostén frente a las carencias del mercado laboral o las limitaciones del Estado de Bienestar, comienzan a aparecer signos preocupantes de aislamiento e individualización. Esta fragmentación reduce notablemente la capacidad de resistencia y reacción colectiva de los sectores más vulnerables.

En este contexto, resulta crucial reforzar las políticas de inclusión desde una perspectiva comunitaria, orientada a reconstruir los lazos sociales y promover espacios de participación y pertenencia en el entorno cotidiano. Solo así se podrá frenar la desconexión política y social de quienes más lo necesitan.

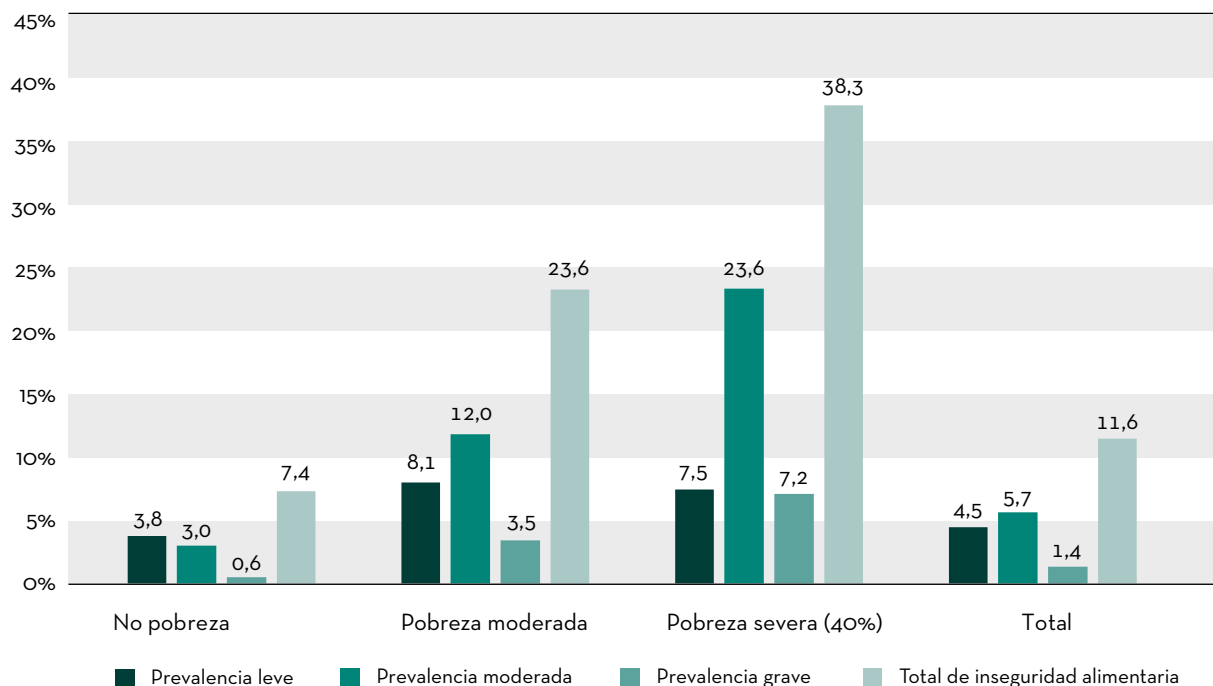
32. La inseguridad alimentaria afecta al 11,6% de los hogares, especialmente a mujeres, menores y hogares pobres. El derecho a una alimentación adecuada no está garantizado. Los programas asistenciales solo alivian lo urgente y la falta de una estrategia pública basada en derechos convierte el acceso a alimentos seguros y nutritivos en un privilegio

La EINSFOESSA 2024 mide por primera vez la inseguridad alimentaria en España mediante la escala FIES, revelando que el 11,6% de los hogares la padece. De acuerdo con la FAO, la FIES es una escala que, a partir de las respuestas de las personas sobre su acceso a comida adecuada, clasifica la inseguridad alimentaria en tres niveles crecientes: leve, moderada y grave. Pues bien, un 4,5% sufre inseguridad leve (baja calidad alimentaria), un 5,7% moderada (reducción de cantidad, saltarse comidas) y un 1,4% grave (días sin comer por falta de recursos).

Además, el riesgo de inseguridad alimentaria se intensifica en hogares encabezados por mujeres, sustentadores jóvenes o desempleados, familias numerosas, monoparentales y con menores de edad. También afecta a hogares con empleo o pensiones precarias, lo que muestra la fragilidad de ciertos ingresos. La prevalencia es especialmente alta entre los hogares pobres (23,6% moderada, 7,2% grave) y en aquellos donde los gastos de vivienda dejan al hogar por debajo del umbral de pobreza severa.

Pese a su carácter estructural, la inseguridad alimentaria sigue fuera de la agenda política. Las ayudas existentes son fragmentadas y de corto alcance. Es fundamental una respuesta integral basada en derechos, que articule políticas públicas coordinadas, evaluación continua y una Ley Orgánica que garantice el derecho efectivo a una alimentación adecuada en España.

Prevalencia de inseguridad alimentaria según niveles de pobreza



Fuente: EINSFOESSA 2024.

33. La infancia y la juventud están atrapadas en una precariedad estructural: 2,5 millones de jóvenes en exclusión y una infancia que representa un tercio de la exclusión severa. Se consolida una cronificación alarmante que duplica las tasas de 2007

La enorme brecha generacional que se ha ido abriendo en estas dos décadas sigue poniendo de relieve la delicada situación social de la infancia. Es necesario seguir reforzando las políticas orientadas a reducir la pobreza y la exclusión social en este grupo como estrategia clave para romper el ciclo de reproducción generacional de estos fenómenos.

Desde 2007, la exclusión social entre niños, niñas y jóvenes no ha dejado de crecer. Hoy, 2,5 millones de jóvenes están atrapados en condiciones de precariedad estructural

La infancia emerge como el grupo más castigado: los menores representan ya un tercio de la exclusión severa y están presentes en el 44% de estos hogares, mientras que los mayores de 65 años casi han desaparecido (3,5%), reflejo tanto de mejores pensiones como del acceso a la vivienda en propiedad.

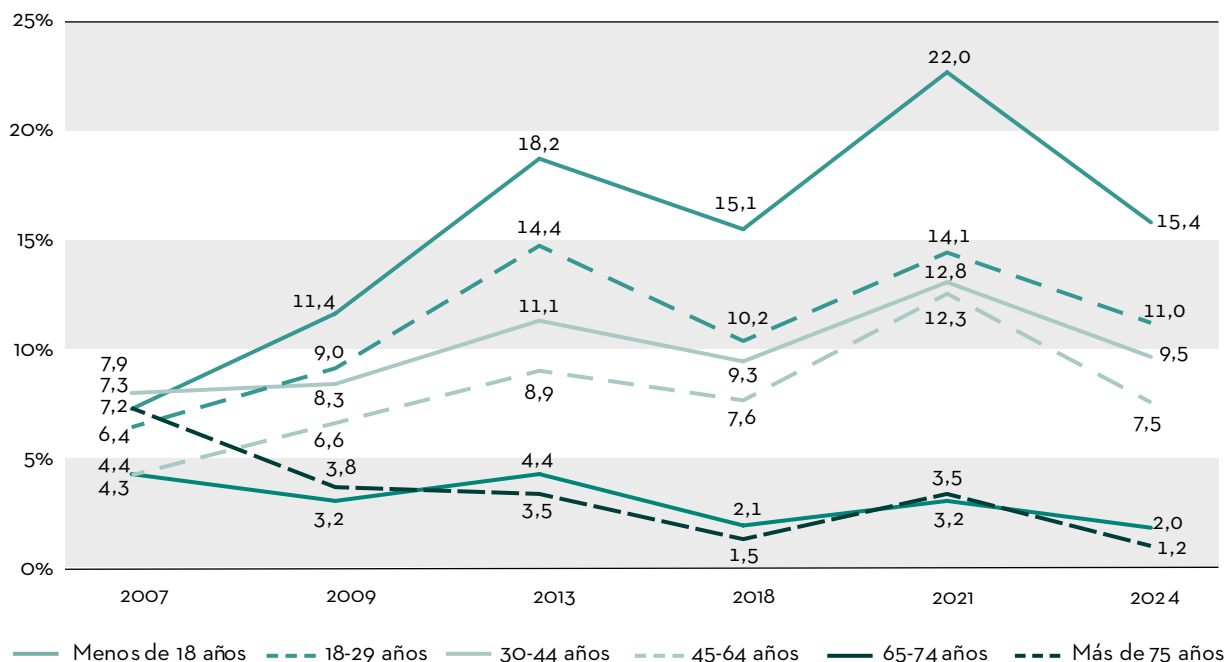
En las dos últimas décadas, la exclusión severa afecta mucho más a los jóvenes que a las personas mayores. Entre los mayores de 65 años, la exclusión severa es residual (apenas un 2%). En cambio, empeora

RESUMEN IX

Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2025

significativamente para la infancia: el 15,4% de los menores vive en exclusión severa, el doble que en 2007. Se consolida una cronificación alarmante. Por su parte, entre la juventud (18-29 años), el 11% de la población está en exclusión severa, lo que representa un aumento del 83% desde 2007. Es una generación marcada por la sucesión de crisis económicas y sociales.

Incidencia de la exclusión social severa en la población de España, según grupos de edad (2007-2024)



34. La perspectiva de género muestra la complejidad de la exclusión social. Las desigualdades no son claras en datos agregados, ya que el hogar compensa la distribución por sexo. No obstante, emergen al examinar quién sostiene la economía familiar y el tipo de familia

Los hogares monoparentales y/o los encabezados por mujeres concentran mayor exclusión social, evidenciando dinámicas interseccionales que exigen políticas integradas de inclusión, igualdad de género, conciliación y corresponsabilidad en cuidados

La incidencia destacada de la exclusión social en determinados tipos de hogar, especialmente los hogares monoparentales y/o los que están encabezados por una mujer, nos recuerdan la importancia de mantener una perspectiva de género en el análisis de la exclusión social. Las desigualdades de género en la responsabilidad para la crianza de los hijos e hijas incrementan los procesos de exclusión con una

dinámica interseccional. Es preciso por ello reforzar la interrelación entre las políticas de inclusión y las políticas de igualdad, de conciliación y de corresponsabilidad.

En los datos de la serie EINSFOESSA 2007-2024 se aprecia una transformación estructural del espacio social de la exclusión en España. Primero, el perfil demográfico cambia: la exclusión severa es hoy ligeramente más masculina (51%), pero al desagregar por la persona sustentadora principal, la brecha se agranda y muestra una tendencia ascendente. En 2024, los hogares encabezados por mujeres soportaban mayor exclusión que los liderados por varones, una situación que se ha mantenido (con altibajos) desde 2007 y que incluso se amplió tras la crisis de la COVID-19, pues el confinamiento golpeó al comercio y los servicios, sectores altamente feminizados. Casi la mitad de los hogares excluidos graves están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).

El aumento de los hogares sustentados por mujeres coincide con peores indicadores de exclusión, vivienda y acceso a tratamientos para estas familias

La proporción de hogares donde la principal fuente de ingresos la aporta una mujer pasó del 21,9% en 2007 al 35,9% en 2024. Lejos de traducirse en mayor bienestar, este aumento convive con peores indicadores económicos y de vivienda:

- El 26,7% de exclusión en hogares con sustentadora mujer, frente al 21,3% con sustentador hombre.
- El 16% de pobreza severa tras pagar vivienda (10,3% en hogares sustentados por hombres).
- El 13,5% declara no poder costear tratamientos o dietas prescritas (8,8% con sustentador varón).

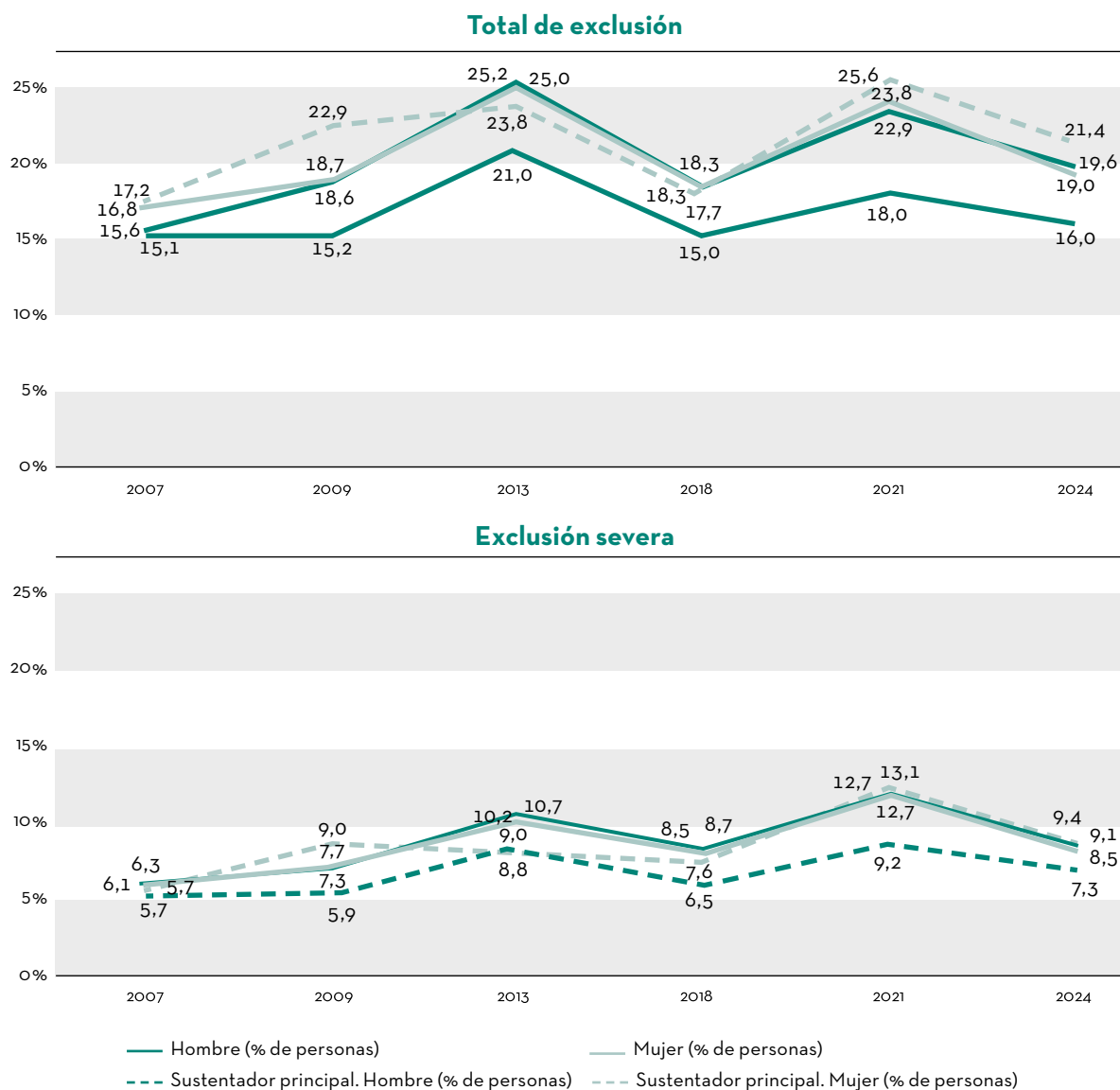
La falta de corresponsabilidad paterna, condicionada por el estatus económico, educativo y la integración social, amplía las desigualdades en el cuidado infantil

España mantiene un modelo «familista» donde el grueso de las tareas de cuidado recae sobre la familia debido a una red pública de educación infantil insuficiente y la práctica inexistencia de transferencias monetarias universales. Esto promueve estrategias privadas —ajustes laborales de las madres, ayuda de abuelos/as o contratación de servicios— que reproducen desigualdades.

Así, en la mitad de los hogares, la madre asume en solitario la responsabilidad principal del cuidado de menores de 6 años. Por otro lado, si se observa la corresponsabilidad en general dentro del hogar, esta presenta notables diferencias según diversas variables socioeconómicas. En los hogares plenamente integrados, la corresponsabilidad alcanza el 39%, mientras que cae al 20% en situaciones de exclusión moderada. También influye el nivel de ingresos: en los hogares con rentas altas, la corresponsabilidad se sitúa en el 42%, frente al 20% en los de menores recursos. Por último, la educación materna marca igualmente una diferencia importante: cuando la madre tiene estudios universitarios, la corresponsabilidad asciende al 47%, pero desciende al 16% cuando carece de formación académica.

RESUMEN IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2025

Incidencia de la exclusión social y de la exclusión social severa por sexo, para toda la población y para las personas sustentadoras principales (2007-2024)



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.

La baja aceptación social de las políticas universales de crianza refleja un modelo «familista» que refuerza desigualdades de género y socioeconómicas al dejar el cuidado infantil en manos de recursos familiares desiguales

El modelo «familista» se refleja en la opinión pública: solo el 35% apoya servicios y prestaciones universales a la crianza, similar al respaldo que reciben la dependencia o los ingresos mínimos, y muy inferior a la prioridad que se confiere al empleo (67%) o la vivienda (44%). Incluso entre los hogares con menores de 16 años, el apoyo a la universalidad apenas sube al 40%. La falta de presión social

favorece la inacción estatal y perpetúa la inequidad: la infancia queda expuesta a los recursos de cada familia y, por extensión, a la desigualdad de género (sobrecarga femenina) y clase.

35. La integración de la población inmigrante mejora, pero de forma insuficiente. Es crucial agilizar la regularización, garantizar el acceso a empleo digno y vivienda, combatir la discriminación y reforzar la inclusión desde el inicio. Esto reducirá la distancia que separa a muchos extranjeros de la plena ciudadanía y permitirá aprovechar su potencial demográfico, económico y cultural

La inmigración se ha convertido en un rasgo estructural de la España contemporánea. En 2024, el 13,4% de la población posee nacionalidad extranjera y el 18,2% nació fuera del país (unos 8,8 millones de personas, cuatro veces más que en 2000). Uno de cada tres niños o niñas nace ya de madre extranjera, de modo que el aporte demográfico resulta decisivo para mantener la natalidad y el tamaño de la fuerza laboral.

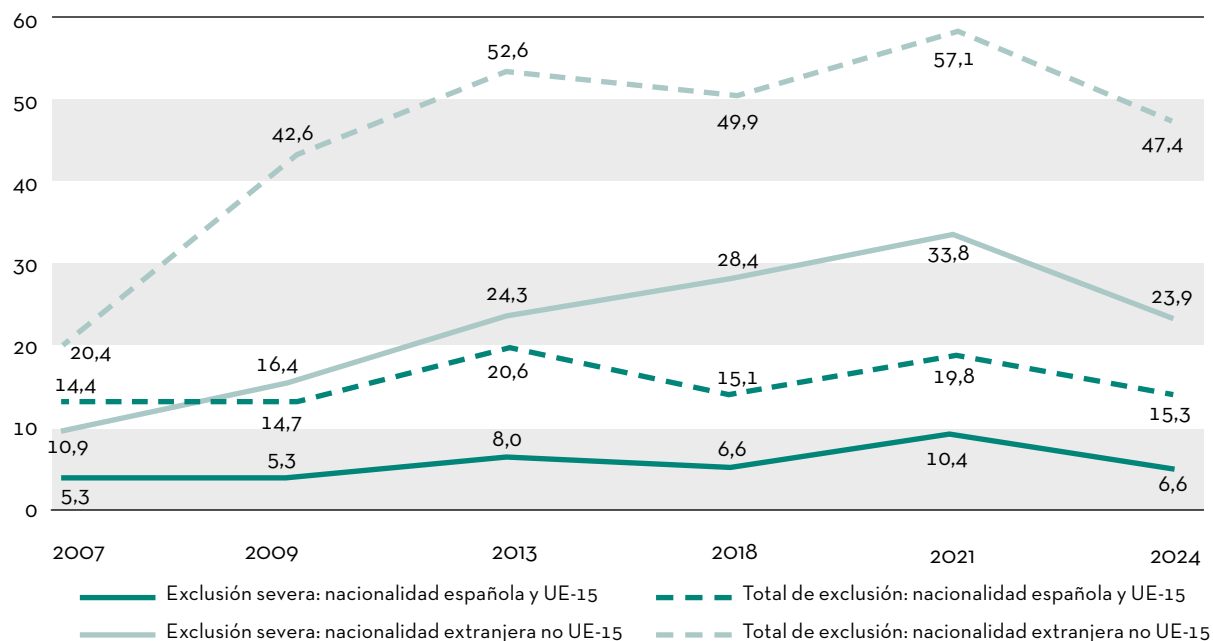
En lo económico, la población migrante ha sido un motor imprescindible tanto del crecimiento del PIB reciente como del funcionamiento cotidiano de un mercado de trabajo muy segmentado y proclive a la precariedad. Sectores como la agricultura, el servicio doméstico, los cuidados y el turismo dependen de mano de obra foránea. A diferencia de otros países europeos, los flujos migratorios en España se ajustan con relativa rapidez al ciclo económico: caen con las crisis y rebrotan en fases expansivas, lo que ha aminorado tensiones sociales y políticas... Hasta ahora. Tras el parón de la COVID-19, las entradas vuelven a niveles anteriores a la Gran Recesión, impulsadas sobre todo por América Latina.

Sin embargo, la integración social avanza con demasiada lentitud. La Gran Recesión destrozó la frágil trayectoria de inclusión que se había logrado durante el *boom* inmobiliario: el empleo precario fue la primera tabla que se hundió y, con ella, la sensación de progresar. Posteriormente, la pandemia y la crisis de precios agravaron la precariedad. Entre 2007 y 2024, la población extranjera concentró el peor impacto de la crisis en términos de empleo y renta.

Los datos de EINSFOESSA indican que, aun con la ligera recuperación de 2021-2024, la brecha persiste: las personas extranjeras sufren casi cuatro veces más exclusión severa y tres veces más exclusión total que quienes poseen nacionalidad española. La incidencia es especialmente alta entre las personas africanas (seis de cada diez viven alguna forma de exclusión), y sensiblemente menor, aunque aún elevada, entre latinoamericanas y europeas extracomunitarias. Parte de esta variación responde a la propia dinámica de los flujos: las personas recién llegadas se sitúan en los tramos bajos de los indicadores sociales, mientras que las salidas de población durante la crisis del ladrillo redujeron aparatosamente las tasas de exclusión latinoamericana al marcharse quienes peor estaban. Conviene subrayar que la exclusión no es «importada»: siete de cada diez personas en exclusión social tienen nacionalidad española o de la UE-14. No obstante, determinados colectivos migrantes —sobre todo africanos— concentran las situaciones más extremas y requieren estrategias de apoyo específicas dentro de un enfoque universal.

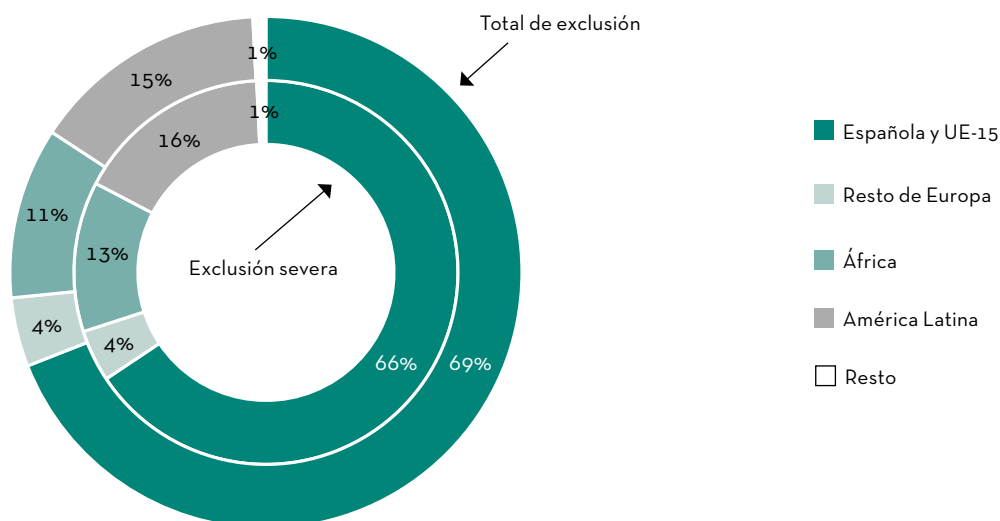
RESUMEN IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2025

Incidencia de la exclusión social y la exclusión social severa según la nacionalidad



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.

Distribución de la población excluida según su nacionalidad (2024)



Fuente: EINSFOESSA 2024.

El estatus administrativo se revela como vara de medir de la integración: en 2024, el 67,5% de los extracomunitarios en situación irregular padece exclusión, frente al 43,7% de quienes poseen permiso de residencia y trabajo. La irregularidad, que se redujo durante la crisis al frenarse las llegadas, vuelve a repuntar con la recuperación del flujo y la gestión de la regularización (el 62% de las personas sin papeles afirma estar gestionando su regularización). Cáritas documenta medio millón de casos en 2022 (550 mil en 2024), un 43% más que antes de la pandemia.

36. Con un peso demográfico similar al de Aragón, la comunidad gitana soporta los mayores niveles de exclusión. Es vital una estrategia integral que combine empleo digno, vivienda asequible, éxito escolar temprano y lucha eficaz contra la discriminación sistémica. Sin esto, la histórica brecha continuará reproduciéndose generacionalmente

Una población estimada muy superior a los datos oficiales revela que hay entre 1 y 1,3 millones de personas gitanas en España, con una tasa de exclusión social del 50,5%

La EINSFOESSA 2024 introduce un mecanismo de autoidentificación que, junto a la heteroidentificación tradicional (identificación por parte de un tercero), permite estimar entre 1 y 1,3 millones las personas gitanas en España, un peso demográfico equivalente al de regiones como Aragón. Esta cifra cuestiona los cálculos oficiales vigentes y subraya la paradoja: un grupo tan numeroso sigue soportando niveles de exclusión que serían socialmente inasumibles en otros colectivos. Parte de la integración alcanzada no se ve reflejada porque muchas personas, al mejorar sus condiciones de vida, han sentido la necesidad de ocultar su identidad gitana para evitar prejuicios o discriminación.

La exclusión severa es la nota dominante. En 2024 afecta al 50,5% de las personas y al 44,2% de los hogares gitanos, tasas sin parangón en ningún otro grupo de similar tamaño. Aunque entre 2021 y 2024 se registra un descenso de unos 10 puntos, la serie histórica muestra que la Gran Recesión duplicó las tasas de exclusión y la recuperación general apenas les ha rozado. Se estiman entre 520 mil y 669 mil personas de etnia gitana en exclusión severa y entre 361 mil y 465 mil en pobreza severa; entre 716 mil y 920 mil padecen combinaciones de ambas.

La elevada concentración de menores de edad en situación de exclusión severa refleja un fenómeno estructural e intergeneracional marcado por la precariedad laboral y la emergencia residencial

La dimensión generacional agrava el panorama: siete de cada diez menores de 18 años de etnia gitana viven en exclusión severa y la incidencia en juventud (48,9%) es un 86,6% superior a la de 2007. En contraste, solo el 17,1% de los mayores de 65 años sufre exclusión severa gracias a pensiones y vivienda en propiedad, evidenciando una brecha intergeneracional crítica. La comunidad gitana autóctona muestra

una exclusión total 16 puntos superior a la de inmigrantes recientes, lo que desmiente cualquier relación lineal entre arraigo y bienestar.

Los modestos avances pospandemia no alcanzan a revertir los déficits estructurales. El desempleo gitano se sitúa en el 50,6%, todavía más del triple que en la población general; la tasa apenas ha variado en dos décadas. En vivienda, los hogares gitanos quintuplican la tenencia en precario (30,6%), sextuplican el hacinamiento grave (18,4%) y soportan un sobreesfuerzo de gasto superior al de los no gitanos (47,7% vs. 37,6%).

37. La discriminación étnica se duplicó desde 2018, siendo un motor de exclusión social. Afecta especialmente a la población gitana y africana, agravando la pobreza al limitar el acceso a empleo y vivienda, y se retroalimenta con el auge de discursos de odio. Para romper este círculo, se requieren políticas antirracistas integrales que combinen protección legal, sanción del discurso de odio y medidas de inclusión con enfoque interseccional

La EINSFOESSA 2024 confirma que la discriminación étnica se ha convertido en engranaje decisivo de la exclusión social en España. Entre 2018 y 2024, la proporción de hogares donde alguien declara trato desigual por nacionalidad, origen o etnia creció del 3,5% al 7,6%, aunque el promedio oculta fuertes contrastes.

La población gitana soporta la carga más pesada: el 54% de sus hogares denuncia discriminación, porcentaje que llega al 73% entre hogares en exclusión severa. Tras siglos de presencia, la mayoría percibe el rechazo como parte de la vida diaria. La población con nacionalidad y/u origen africano aparece en segundo lugar: el 37% de hogares están afectados y casi la mitad cuando media la exclusión social. Entre las personas provenientes de América Latina, la incidencia sube del 19,5% en 2018 al 27,5% en 2024, impulsada por flujos migratorios recientes y mayor visibilidad social.

Las cifras dibujan un círculo vicioso: la discriminación restringe el acceso al empleo, la vivienda y los servicios que permitirían salir de la pobreza; la precariedad, a su vez, multiplica la exposición a actitudes xenófobas. Tres de cada cuatro hogares gitanos y uno de cada dos africanos en exclusión severa relatan experiencias de racismo. Además, los investigadores advierten infrarregistro: muchas víctimas normalizan el agravio para protegerse y dejan de nombrarlo, de modo que la magnitud real es probablemente mayor.

Para romper la espiral se precisan políticas antirracistas integrales: reforzar la protección legal, sancionar el discurso de odio, promover la educación intercultural y blindar los servicios públicos frente a sesgos étnicos. Incluir la variable origen en programas de empleo decente y vivienda asequible, con enfoque interseccional de género y clase, resulta imprescindible para desactivar la transmisión intergeneracional de la exclusión.

Discriminación percibida: hogares en los que alguna persona ha percibido discriminación por nacionalidad, origen étnico o racial (%)

	2018			2021			2024		
	Exclu- sión severa	Total de ex- clusión	Total	Exclu- sión severa	Total de ex- clusión	Total	Exclu- sión severa	Total de ex- clusión	Total
Espanoles no gitanos	1,1	0,7	0,5	2,8	2,6	1,6	3,2	2,8	1,6
Espanoles gitanos	66,0	65,0	59,6	36,2	34,5	29,1	73,1	68,4	54,0
Europeos	23,8	12,7	8,7	34,8	17,1	14,1	45,3	40,3	23,0
Africanos	53,2	50,2	44,6	25,0	26,8	25,9	49,6	45,4	37,2
De América Latina	40,0	25,7	19,5	26,7	26,7	28,4	33,0	30,8	27,5
Otros	28,6	23,1	7,3	14,3	13,3	32,3	50,0	33,3	23,3
Total	21,4	12,8	3,5	15,3	12,6	5,9	26,3	20,7	7,6

Fuente: EINSFOESSA 2018, 2021 y 2024.

38. La exclusión social muestra una brecha territorial persistente. Se concentra y cronifica en barrios urbanos desfavorecidos. Los entornos intermedios sufren deterioro por migración urbana. El espacio rural resiste económicamente, pero con carencias sanitarias y educativas por el envejecimiento y la falta de servicios. Una gran diversidad de modelos socioeconómicos condiciona los niveles de integración

Las diferencias entre comunidades autónomas, así como entre lo rural y lo urbano, requieren políticas flexibles y adaptadas. En las ciudades, la exclusión social alcanza sus niveles más críticos y se cronifica en determinados barrios que concentran múltiples desventajas, convirtiéndose en la expresión más extrema de esta realidad.

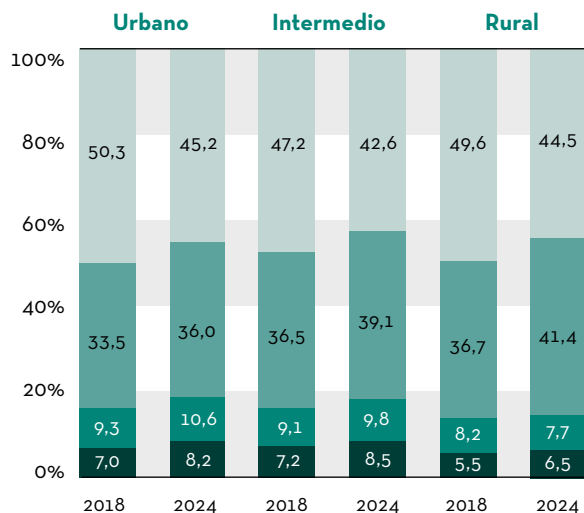
Los entornos intermedios muestran la evolución más negativa en los últimos años, impulsada por el traslado de población desde las ciudades debido al encarecimiento de la vivienda. El empleo precario y el debilitamiento de los lazos sociales acentúan la exclusión.

El ámbito rural, aunque resiste mejor en lo económico, presenta un crecimiento preocupante de la exclusión en salud y educación, debido al envejecimiento poblacional y a la falta de servicios. No obstante, mantiene bajos niveles de aislamiento gracias a un fuerte sentido comunitario.

RESUMEN IX

Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2025

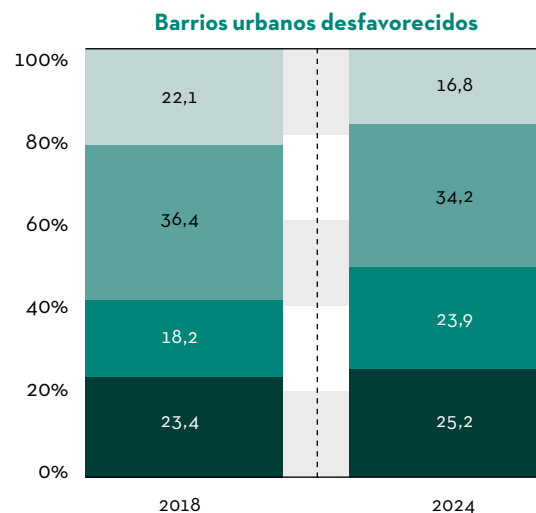
Porcentaje de hogares en situación de integración-exclusión por grado de urbanización



Integración plena Integración precaria Exclusión moderada Exclusión severa

Fuente: EINSFOESSA 2018 y 2024.

Porcentaje de hogares en situación de integración-exclusión en barrios desfavorecidos

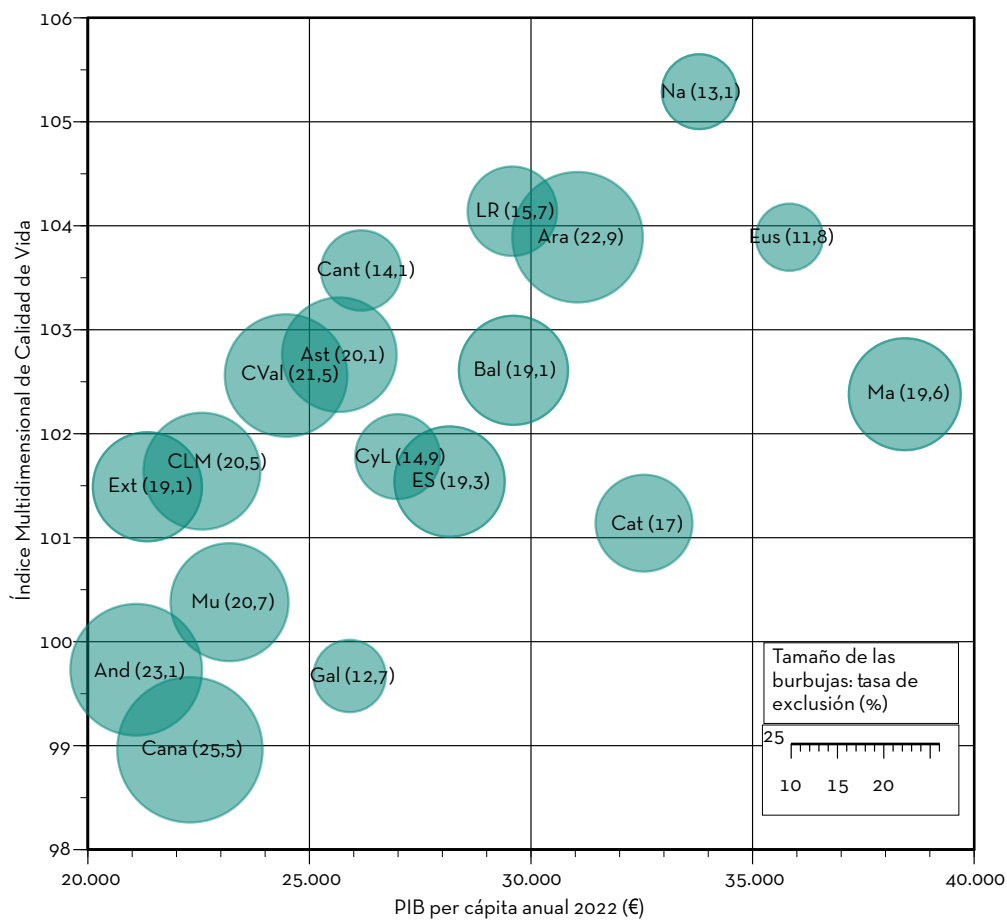


Fuente: EINSFOESSA 2018 y 2024.

El contraste entre las dinámicas del modelo social y los niveles de exclusión social en los distintos contextos territoriales de las comunidades autónomas invita a una reflexión sobre la capacidad de acción colectiva para mejorar los resultados finales en términos de cohesión social.

- En Ceuta y Melilla, que aparecen por primera vez en nuestros informes con datos propios, destacan niveles especialmente altos de exclusión.
- Prosperidad inclusiva: regiones como el País Vasco y Navarra combinan desarrollo económico con fuertes políticas de cohesión social.
- Escasez restrictiva: Andalucía, Canarias y Murcia disponen de recursos limitados y no logran garantizar la inclusión.
- Escasez inclusiva: territorios, como Cantabria o Castilla y León, tienen menos recursos pero mayor capacidad de cohesión social.
- Riqueza ineficaz: Madrid, a pesar de su elevado desarrollo económico, presenta altos niveles de exclusión por la falta de redistribución y de acceso igualitario a oportunidades.

Asociación entre el nivel de desarrollo económico (PIB per cápita en 2022), la calidad de vida del conjunto de la población (IMCV de 2023) y la tasa de exclusión social (2024)



Fuente: Contabilidad Regional de 2022 (INE) para el PIB; Índice Multidimensional de Calidad de Vida de 2023 (INE), España 2008=100; y la tasa de exclusión social de la EINSFOESSA 2024.

RESUMEN IX

Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2025

Incidencia en los hogares de los indicadores de exclusión social de 2007 a 2024 (% sobre los casos válidos)

Dimensión	Indicadores	Serie inicial				Serie nueva		
		2007	2009	2013	2018*	2018*	2021	2024
Empleo	Hogar cuya persona sustentadora principal está en paro desde hace 1 año o más	1,0	4,6	7,5	2,9	2,8	4,3	2,2
	Hogar cuya persona sustentadora principal tiene un empleo de exclusión (venta a domicilio, venta ambulante de apoyo, venta ambulante marginal, empleadas del hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales temporeros, recogedores de cartón y otros residuos, reparto de propaganda, mendicidad)	2,8	2,3	3,2	1,1	1,1	1,1	2,7
	Hogar cuya persona sustentadora principal tiene un empleo irregular: sin contrato y sin cobertura en la Seguridad Social	3,9	1,9	2,9	1,3	1,3	1,0	2,2
	Hogar con al menos una persona desempleada de larga duración, sin título profesional y sin haber recibido formación ocupacional o haber realizado estudios en el último año	7,0	20,8	27,6	15,3	5,8	7,4	2,8
	Hogar con todas las personas activas desempleadas	2,9	10,7	10,9	6,6	5,9	10,3	6,0
	Hogar cuya persona sustentadora principal está en activo, en inestabilidad laboral grave (≥3 contratos o ≥3 empresas ó ≥3 meses en desempleo)	—	—	—	—	4,8	10,3	5,9
Consumo	Hogares sin personas ocupadas, ni pensionistas, ni con prestaciones periódicas (del SEPE o rentas mínimas)	4,9	—	7,8	7,2	6,1	8,1	6,3
	Hogar en pobreza severa: ingresos inferiores al 40% de la renta familiar mediana equivalente anclada en 2018 (actualización del IPC para 2021) (30% de la serie inicial)	2,4	2,3	5,5	4,7	8,1	11,3	9,5
	Hogar que no cuenta con algún equipamiento doméstico considerado básico por más del 95% de la sociedad en 2018 (agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora, frigorífico)	—	—	1,7	1,6	1,7	2,7	3,5
	Hogar con acumulación de deudas: con retrasos en los pagos de suministros, vivienda, pagos a la Administración o préstamos, que no podrán ponerse al día fácilmente	—	—	—	—	3,7	4,7	2,6
Participación política	Hogar con personas sin derecho a elegir a sus representantes políticos y a ser elegidas: hogares con alguna persona de 18 años y más de nacionalidad extracomunitaria (sin convenio de reciprocidad)	9,2	9,8	5,0	5,6	5,6	6,9	8,8
	Hogar con alguna persona sin capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas: no participan en las elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciudadana	4,6	11,3	8,4	5,9	5,9	6,4	8,2
Educación	Hogar con personas de 3 a 15 años no escolarizadas	1,3	0,9	0,9	0,5	0,5	1,2	1,4
	Hogar en el que todas las personas de 16 a 68 años en 2024 (edad equivalente en cada año) tienen menos de Graduado Escolar o equivalente	4,9	5,2	2,9	4,0	5,8	6,9	7,1
	Hogar con alguna persona de más de 68 años en 2024 (edad equivalente en cada año) con menos de 5 años de escolarización	6,1	5,7	4,7	1,7	7,9	6,7	6,8
Vivienda	Hogar en infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar	1,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,1	0,3
	Hogar con deficiencias graves en la construcción de la vivienda	1,2	1,3	1,6	1,9	1,9	1,8	2,4
	Hogar con situaciones de insalubridad: humedades, suciedad, olores (y plagas en 2024)	7,1	7,8	9,6	6,8	3,2	4,0	5,9
	Hogar en hacinamiento grave (<15 m ² por persona)	4,6	3,4	3,3	3,5	2,5	3,3	3,5
	Hogar con tenencia de la vivienda en precario: facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio	3,7	1,0	1,5	3,7	3,7	4,3	6,6
	Hogar con entorno muy degradado	0,6	0,6	2,4	1,4	0,8	1,8	1,4
	Hogar con personas de movilidad reducida y con barreras arquitectónicas	2,6	3,1	5,7	3,8	2,2	2,2	3,4
	Hogar con gastos excesivos de la vivienda (ingresos - gastos de vivienda < bajo el umbral de pobreza severa del 40%) (30% de la serie inicial)	3,8	5,7	9,5	9,9	11,1	14,2	12,4

* Nota: Los cambios en el dato para 2018 entre las dos series se deben al ajuste realizado en la revisión de la sintaxis para la serie nueva. Los cambios realizados pueden consultarse en el apartado metodológico de los informes de 2021 y 2024.

Fuente: EINSFOESSA, 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.

Incidencia en los hogares de los indicadores de exclusión social de 2007 a 2024 (% sobre los casos válidos) (continuación)

Dimensión	Indicadores	Serie inicial				Serie nueva		
		2007	2009	2013	2018*	2018*	2021	2024
Salud	Hogar con alguna persona sin cobertura sanitaria	0,7	0,0	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7
	Hogar en el que alguien ha pasado hambre en los últimos 10 años con frecuencia o la están pasando ahora	2,6	1,7	3,9	2,2	2,2	2,6	3,4
	Hogar en el que todos los adultos sufren discapacidad, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para las actividades de la vida diaria	2,4	3,3	2,6	4,6	4,6	4,3	3,6
	Hogar con alguna persona dependiente que necesita ayuda o cuidados de otra persona (para realizar las actividades de la vida diaria) y que no la recibe	1,1	1,1	1,2	1,0	1,0	1,2	0,6
	Hogar con alguien enfermo grave o crónico que no ha recibido asistencia médica para esa enfermedad en 1 año	0,7	0,1	0,9	1,6	2,1	2,2	3,1
	Hogar que ha dejado de comprar medicinas o prótesis, seguir tratamientos o dietas, por problemas económicos (bajo el umbral de pobreza moderada del 60%)	5,5	5,7	13,3	8,3	7,5	13,1	10,5
Conflicto social	Hogar en el que alguien ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años	—	2,1	2,5	2,4	2,4	3,5	2,3
	Hogar con relaciones muy malas, malas o más bien malas entre sus miembros	1,4	0,7	0,7	0,5	0,5	1,5	0,4
	Hogar con personas que tienen o han tenido problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego en los últimos 10 años	—	3,9	2,4	2,2	2,2	2,2	3,7
	Hogar en el que alguien ha sido o está a punto de ser madre o padre adolescente en los últimos 10 años	2,0	0,8	0,6	0,6	0,6	1,6	0,8
	Hogar con personas que tienen o han tenido problemas con la justicia (antecedentes penales) en los últimos 10 años	2,6	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,5
Aislamiento social	Hogar con personas sin relaciones y que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad	6,2	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	4,7
	Hogar con relaciones malas o muy malas con los vecinos del barrio	1,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,2
	Hogar con personas que han estado en instituciones durante el último año: hospitales y pisos psiquiátricos, centros de drogodependencias, de menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres	0,2	—	0,2	0,3	0,7	1,7	3,8

* Nota: Los cambios en el dato para 2018 entre las dos series se deben al ajuste realizado en la revisión de la sintaxis para la serie nueva. Los cambios realizados pueden consultarse en el apartado metodológico de los informes de 2021 y 2024.

Fuente: EINSFOESSA, 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.

Capítulo 4

Las políticas sociales en España: actores, políticas y retos en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales (*)

39. El Estado de Bienestar español tiene un fuerte respaldo ciudadano. A su vez, se ve amenazado por las tensiones geopolíticas, las políticas privatizadoras, la apuesta por el rearme europeo, los discursos individualistas y la debilidad del sistema fiscal

El impulso al rearme amenaza el Pilar Social Europeo y el Estado de Bienestar español

En los últimos años, la evolución del Estado de Bienestar en España se ha visto influida por una serie de factores interrelacionados que combinan dinámicas internas y externas. La política nacional, los cambios en la estructura social y los sucesos globales, como la pandemia, las guerras o las tensiones comerciales, han puesto a prueba tanto su viabilidad financiera como su legitimidad social. El impulso generado por el Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) y los fondos del programa Next Generation EU supusieron un respiro tras una década de austeridad, marcando un cambio hacia un modelo más social y redistributivo. No obstante, la coyuntura actual amenaza con revertir esos avances.

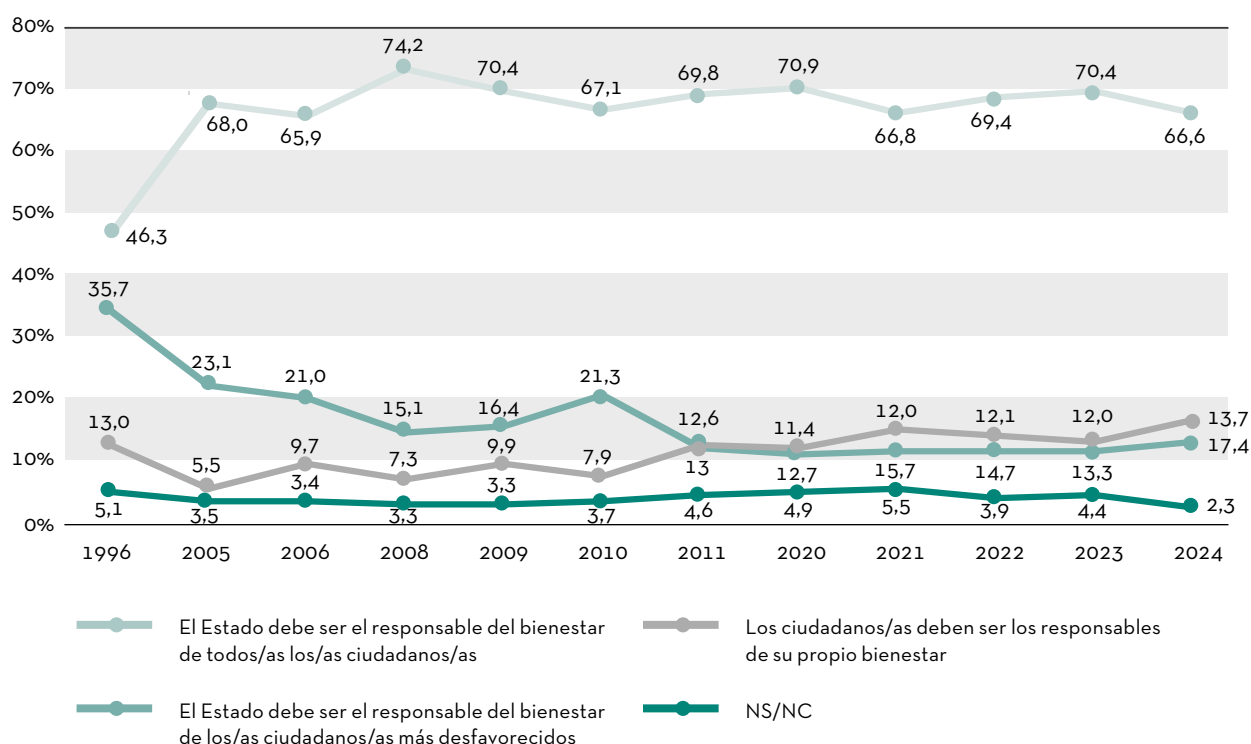
La guerra en Ucrania, el rearme militar y el deterioro del orden multilateral, entre otras cosas, han provocado una reconfiguración de las prioridades presupuestarias en Europa, con el riesgo de que el «keynesianismo de emergencia» que reactivó la inversión social tras la COVID-19 dé paso a un mayor gasto en la demanda militar. Este giro no es solo económico, sino también cultural y político, y afecta directamente a la sostenibilidad de las políticas sociales. En este escenario, España se enfrenta a la posibilidad de que los avances en derechos sociales logrados con financiación europea queden subordinados a una nueva lógica de seguridad y defensa.

(*) Estas páginas recogen el resumen del cuarto capítulo de: FLORES MARTOS, R. (coord.) (2025). *IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

Un fuerte respaldo ciudadano al Estado de Bienestar convive con discursos que cuestionan la viabilidad

A pesar de este contexto adverso, la ciudadanía sigue mostrando un respaldo mayoritario al Estado de Bienestar. Las encuestas reflejan un fuerte apoyo a la sanidad pública, la educación universal, las pensiones y otras prestaciones sociales. Sin embargo, este consenso ciudadano convive con discursos y propuestas políticas contrarias promovidas por medios de comunicación y grupos de interés que cuestionan la viabilidad del Estado de Bienestar. Estos discursos tienden a enfatizar su supuesta ineficiencia, fomentan la privatización de servicios y amplifican narrativas de deslegitimación institucional.

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos en el bienestar (1996-2024)



Fuente: Elaborado con datos del CIS. Serie A.3.07.05.009 actualizada con datos de la encuesta 3480.

En este contexto, el Estado de Bienestar español se encuentra en un punto de inflexión. Entre un apoyo social que sigue siendo fuerte y una serie de amenazas –geopolíticas, políticas y discursivas– que condicionan su futuro, el reto es mantener la inversión y la legitimidad social en un entorno cada vez más inestable. La pregunta que se abre no es solo cómo blindar los derechos sociales frente a la crisis, sino también cómo reequilibrar el proyecto europeo entre la seguridad y el bienestar de su ciudadanía.

El Estado de Bienestar español sobrevive en modo defensivo tras crisis consecutivas en los últimos 15 años

Durante los últimos 15 años, el Estado de Bienestar español ha afrontado un ciclo de crisis consecutivas que han puesto a prueba su solidez. Desde los recortes drásticos durante la intervención de la Troika (2010-2014), pasando por un estancamiento sin recuperación real (2015-2018), hasta llegar a un periodo reciente de reformas condicionadas por crisis múltiples –pandemia, inflación, tensiones geoeconómicas–, el modelo ha demostrado una notable resiliencia institucional. Sin embargo, esta resistencia ha sido defensiva, más orientada a evitar retrocesos que a impulsar transformaciones de fondo.

Este carácter defensivo se refleja en una inversión social persistentemente insuficiente. A pesar de ciertos avances –como el Ingreso Mínimo Vital, la mejora de las pensiones o el refuerzo en cuidados–, España sigue situándose por debajo de la media europea en gasto social per cápita, alcanzando solo el 78% del nivel comunitario. Las carencias son especialmente visibles en los sistemas de salud, educación y servicios sociales, donde la inversión no ha logrado ponerse al día con las necesidades crecientes de la población. Esta brecha pone en cuestión la capacidad del Estado de Bienestar para garantizar derechos en condiciones de igualdad y suficiencia.

Los obstáculos ideológicos y fiscales del Estado de Bienestar frenan su pleno desarrollo

A ello se suman obstáculos ideológicos que dificultan el fortalecimiento del modelo. Aunque existe un amplio consenso social a favor del EB, este se ve erosionado por la persistencia de narrativas individualistas que promueven soluciones privadas y responsabilizan al individuo de su situación socioeconómica. Estas ideologías fragmentan la base social del bienestar común y dificultan la construcción de mayorías políticas que impulsen un nuevo pacto redistributivo. La debilidad de la base fiscal –limitada progresividad, altas tasas de evasión, especialmente del impuesto de sociedades, y la baja presión fiscal comparada con la UE– agrava esta situación, dejando poco margen para expandir derechos o reforzar servicios públicos.

Así, el Estado de Bienestar español se mantiene en pie gracias a su legitimidad social, pero atrapado en una «permanencia defensiva» que lo sostiene operando a baja intensidad. El dilema actual no es su supervivencia inmediata, sino si logrará romper esta inercia y construir un horizonte de mayor ambición, o si quedará anclado en una cobertura amplia pero limitada en su capacidad transformadora.

40. Las 28.000 organizaciones del tercer sector representan el trabajo silencioso del bienestar social, de gran alcance, pero invisible en el debate público sobre la cohesión social española

El Tercer Sector de Acción Social (TSAS) constituye una infraestructura social de gran envergadura pero sorprendentemente, invisible en el debate público sobre políticas sociales. Con 28.000 organizaciones activas, este sector realiza anualmente 47,4 millones de intervenciones directas a personas en situación de vulnerabilidad, moviliza a 1,47 millones de personas voluntarias y emplea a 609.761 personas.

Estas cifras revelan una capacidad de intervención que complementa y a menudo suple las limitaciones del Estado de Bienestar, especialmente en los espacios de mayor vulnerabilidad y exclusión social. El TSAS opera bajo una lógica estratégica dual: coopera con las instituciones públicas en el desarrollo de programas sociales, pero mantiene su propio espacio de acción para cubrir fallos del Estado y del mercado que afectan negativamente a los derechos de las personas vulnerables. Sin embargo, esta fortaleza convive con debilidades estructurales preocupantes: el 48,7% de las entidades tienen ingresos anuales inferiores a 30.000 euros, el 47% no cuenta con personal remunerado y existe una marcada dualización entre un pequeño núcleo de grandes organizaciones y una mayoría de microentidades. La sostenibilidad futura del TSAS dependerá de su capacidad para superar el «minifundismo organizativo», profesionalizar sus estructuras, diversificar sus fuentes de financiación y aumentar su visibilidad social como actor imprescindible en la construcción de una sociedad más cohesionada y justa.

41. La provisión mercantil de pensiones y sanidad, que hasta ahora actúa como complemento y no como sustituto del sistema público, refuerza desigualdades mientras crece su papel ante la debilidad de lo público

El sector mercantil en el bienestar español ha evolucionado hacia un modelo complementario que, lejos de sustituir la provisión pública, la complementa reforzando las desigualdades sociales existentes. No obstante, en lugar de actuar como un apoyo equitativo, esta lógica de complementariedad ha reforzado las desigualdades preexistentes. Tanto en la sanidad como en las pensiones, los servicios privados han crecido de forma selectiva, beneficiando sobre todo a quienes tienen mayores niveles educativos, empleos de alta cualificación y capacidad de ahorro. Esta «estratificación mercantil» puede convertir el acceso a ciertos derechos sociales en un privilegio vinculado a la posición socioeconómica.

En el ámbito sanitario y de las pensiones, las estadísticas señalan que los seguros privados han aumentado principalmente entre quienes cuentan con estudios superiores o empleos bien remunerados, mientras que la mayoría de la población, especialmente mujeres y trabajadores poco cualificados, dependen exclusivamente del sistema público. Esta segmentación del bienestar refuerza la estructura de desigualdad, al ofrecer distintos niveles de protección según la capacidad económica de cada cual.

Aunque la ciudadanía sigue mostrando una clara preferencia por la provisión pública —el gasto social público representa el 24,6% del PIB frente al 1,3% del privado—, la creciente mercantilización selectiva está dando forma a un modelo dual: uno, básico y público, para las clases populares y medias-bajas; otro, complementado por el mercado, para las capas medias-altas y altas. Este desequilibrio erosiona el principio de universalidad del Estado de Bienestar y socava la cohesión social sobre la que se asienta.

Además, esta tendencia puede agravarse por las crecientes dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Las incertidumbres en torno al futuro del modelo, alimentadas por discursos alarmistas o intereses económicos, están debilitando la confianza ciudadana y empujando a quienes pueden

a buscar soluciones privadas. Así, la mercantilización, que debía ser una opción adicional y no sustitutiva, corre el riesgo de consolidarse como un mecanismo estructural que amplifica las desigualdades y fragmenta la lógica solidaria del bienestar.

42. La polarización ideológica amenaza la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Algunos sectores políticos muestran una desconfianza profunda hacia el sistema fiscal, promoviendo agendas partidistas que dificultan alcanzar el consenso social necesario para garantizar su financiación

A pesar del respaldo ciudadano, la desconfianza fiscal y la resistencia tributaria obstaculizan la consolidación del Estado de Bienestar

Aunque el respaldo ciudadano al Estado de Bienestar se ha mantenido estable en España —con niveles de apoyo entre el 66% y el 74% durante las últimas dos décadas—, la disposición a financiarlo mediante impuestos ha seguido una trayectoria mucho más volátil y fragmentada. Esta paradoja es hoy uno de los principales obstáculos para consolidar un modelo de bienestar sólido. El rechazo a una mayor carga fiscal está atravesado por líneas ideológicas: mientras parte de la izquierda vincula los impuestos con justicia redistributiva, sectores de la derecha tienden a percibirlos como una carga ineficiente e injusta. El resultado es una sociedad dividida en tres bloques casi equivalentes: los que apoyarían aumentar prestaciones e impuestos, los que se oponen frontalmente y los que adoptan posiciones intermedias.

A esta resistencia fiscal se suma una profunda desconfianza hacia el propio sistema impositivo y las instituciones encargadas de gestionarlo. España presenta uno de los niveles más bajos de confianza fiscal de Europa, debido tanto a percepciones de ineficiencia y corrupción como a una narrativa persistente sobre el despilfarro público. La ciudadanía reclama más y mejores servicios sociales, pero al mismo tiempo duda de la capacidad del Estado para gestionarlos adecuadamente. Esta contradicción alimenta una espiral perversa: sin confianza, no hay voluntad de contribuir; sin contribución suficiente, el sistema opera por debajo de su potencial.

La polarización ideológica y las agendas partidistas dificultan el pacto fiscal transversal

La polarización ideológica ha contribuido a enconar aún más el debate de la fiscalidad. Mientras los partidos tradicionales intentan reflejar el equilibrio inestable de la opinión pública, algunos han adoptado posiciones extremas, dificultando la construcción de un pacto fiscal transversal. Además, en algunos sectores sociales se percibe que el Estado de Bienestar se asocia de forma creciente con determinadas agendas políticas —como el feminismo, el ecologismo— que, aunque legítimas y necesarias, pueden generar rechazo en parte del electorado. Este vínculo temático puede debilitar el necesario apoyo más amplio y transversal que históricamente ha sostenido el proyecto de bienestar.

En este contexto, el reto no es solo técnico o económico, sino profundamente cultural y político: sin una narrativa compartida que vincule de forma clara y creíble los derechos sociales con la responsabilidad fiscal y la cohesión institucional, el Estado de Bienestar seguirá atrapado en una dinámica defensiva. Superar esta tensión requiere reconstruir la legitimidad del sistema fiscal, desvincular el bienestar de las agendas partidistas y fomentar un sentido común renovado en torno a lo público como garantía colectiva.

43. El sistema sanitario español se debilita entre fracturas estructurales acumuladas y dinámicas privatizadoras crecientes, mientras la enfermedad sigue teniendo causas sociales complejas que la política sanitaria, por sí sola, no puede resolver

El deterioro estructural y las desigualdades persistentes generan una doble fragmentación del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud (SNS) se encuentra en una paradoja crítica. Por un lado, conserva una alta legitimidad social y destaca por sus buenos resultados en términos de coste-efectividad. Por otro, enfrenta fracturas estructurales que comprometen tanto su sostenibilidad como su vocación universalista. La pandemia de la COVID-19 actuó como un potente revelador de estas debilidades acumuladas: desbordamiento asistencial, deterioro de la base profesional y material, pérdida de centralidad de la atención primaria y listas de espera cada vez más extensas y desiguales entre comunidades autónomas y en el seno de cada comunidad. Estos déficits han acelerado un proceso de mercantilización selectiva y silenciosa, visible en el aumento del aseguramiento privado, el crecimiento del gasto directo de los hogares (que pasó del 19% en 2009 al 23% en 2014) y la privatización progresiva de servicios rentables. Este proceso abre la puerta a un riesgo estratégico: la consolidación de un sistema dual donde la sanidad pública asume las patologías más complejas y la atención a la población con menos recursos económicos, mientras los servicios privados capturan la demanda solvente y los tratamientos más rentables.

A este riesgo estructural se le suma una realidad persistente y profundamente injusta: la universalidad en el acceso no ha sido suficiente para corregir las desigualdades en salud. Cuatro décadas después de la creación del SNS, variables como el código postal, la clase social, el género o el origen étnico siguen siendo determinantes del estado de salud. Las personas con ocupaciones manuales no cualificadas, por ejemplo, presentan mayores prevalencias de enfermedades crónicas que quienes tienen empleos no manuales con estudios universitarios. Desde una perspectiva interseccional, la brecha se amplía aún más: las mujeres gitanas tienen menor esperanza de vida que otras mujeres y los barrios pobres concentran más mortalidad y morbilidad que los barrios acomodados. Estas desigualdades no son aleatorias: responden a la distribución territorial y social de los determinantes de la salud (trabajo, vivienda, educación, ingresos, entorno físico), que el sistema sanitario, por sí solo, no puede revertir.

La combinación de estos dos fenómenos —deterioro estructural y desigualdades persistentes— produce un efecto de doble fragmentación. Por un lado, se refuerzan las diferencias entre quienes pueden complementar la sanidad pública con servicios privados y quienes dependen exclusivamente del sistema

público. Por otro, se amplifican las brechas sanitarias entre territorios, grupos sociales y perfiles de población, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Esta espiral amenaza con romper el principio de equidad sobre el que se fundó el modelo.

Más allá de la reforma sanitaria, la atención a los determinantes sociales, es clave para la transformación del sistema

Superar la crisis del sistema sanitario exige mucho más que inversiones puntuales o reformas internas: requiere asumir que la salud de la población está determinada, en gran medida, por factores sociales que van más allá del ámbito asistencial. No bastará con el necesario refuerzo de la atención primaria o la regularización de la colaboración público-privada si no se actúa, de forma decidida, sobre las condiciones de vida que generan enfermedad: la precariedad laboral, la inseguridad residencial, la pobreza energética, la educación desigual o la contaminación ambiental. La respuesta debe construirse desde un enfoque de «salud en todas las políticas», que coloque la equidad en salud como objetivo transversal de la acción pública, articulando respuestas desde la vivienda, el empleo, la educación, los ingresos o el entorno de residencia. Solo abordando las causas sociales de la enfermedad será posible revertir la fragmentación, frenar la deriva hacia un sistema dual y reconstruir una sanidad verdaderamente universal, justa y sostenible.

44. El modelo español de cuidados afronta el reto histórico de pasar del ámbito privado del hogar a la responsabilidad comunitaria en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado y cambio social profundo

El envejecimiento acelerado y la transformación familiar generan la crisis de los cuidados de larga duración

La combinación del envejecimiento acelerado de la población y la transformación estructural de las familias ha generado un desajuste creciente entre la demanda de cuidados de larga duración y la capacidad de los hogares para ofrecerlos. Las redes familiares, tradicionalmente el pilar informal del sistema de cuidados, son hoy más frágiles, más pequeñas y menos disponibles. Esta brecha entre necesidad y capacidad se ha convertido en uno de los principales desafíos del Estado de Bienestar, especialmente tras el *shock* que supuso la pandemia para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La crisis sanitaria de 2020 evidenció con crudeza las limitaciones del modelo institucional tradicional, especialmente en residencias de personas mayores, donde se produjo una mortalidad masiva. Desde entonces, el SAAD ha iniciado una transición hacia el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (MAICP) y hacia una estrategia de desinstitutionalización. Sin embargo, esta transformación sigue enfrentando múltiples obstáculos: la financiación es claramente insuficiente (0,8% del PIB, frente al 1,7% de media en la UE), las desigualdades territoriales son pronunciadas y persiste un fuerte sesgo hacia las prestaciones económicas para cuidados familiares, que perpetúan la feminización del cuidado y su precariedad.

Los cuidados representan una frontera crítica de la justicia social contemporánea que implica el transitar del asunto privado al bien común

Abordar este reto exige pensar los cuidados como un bien común, y no como una carga privada. El horizonte de un modelo comunitario de cuidados implica invertir decididamente en servicios de proximidad accesibles, flexibles y adaptados a contextos diversos; dignificar las condiciones laborales del sector, profesionalizando y remunerando adecuadamente a quienes cuidan; desfeminizar la responsabilidad del cuidado, promoviendo su redistribución entre géneros y generaciones; y tejer alianzas público-comunitarias que fortalezcan las redes de apoyo mutuo sin descargar todo el peso sobre las familias.

Además, el envejecimiento acelerado exige anticipación: en 2050, el 15% de la población española tendrá más de 80 años, y la ratio entre mayores dependientes y potenciales cuidadores caerá en picado. Si no se actúa con visión estratégica, el sistema entrará en colapso. Es imprescindible aumentar la financiación hasta el 1,5% del PIB para 2030, desplegar servicios integrados con la atención sanitaria y fomentar entornos que permitan a las personas mayores en situación de dependencia vivir en su casa o en su barrio con la mayor autonomía posible.

El cuidado no puede seguir entendiéndose como un asunto privado ni como un último eslabón del sistema de bienestar. Es, hoy, una de las fronteras más críticas de la justicia social. Reforzar el SAAD desde una lógica comunitaria, equitativa y digna es clave no solo para atender mejor, sino para sostener un modelo de convivencia inclusiva en una sociedad que envejece.

45. La vivienda se ha convertido en un eje crítico de la exclusión social contemporánea que exige una respuesta pública decidida, estructural y coordinada para priorizar definitivamente la vivienda como derecho frente a su consideración como bien de inversión y objeto de mercantilización

La crisis habitacional se convierte en el epicentro de la exclusión social y erosiona la estabilidad de 4,6 millones de hogares

En la actualidad, el acceso a una vivienda adecuada y estable constituye uno de los principales factores de reproducción de la pobreza y la exclusión social en España. La crisis de la vivienda ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en el epicentro de una nueva cuestión social que afecta ya a 4,6 millones de hogares. Los datos son contundentes: más del 14% de los hogares destina una parte desproporcionada de sus ingresos al pago de la vivienda, mientras que las situaciones de retraso en pagos, insalubridad o tenencia precaria continúan aumentando. A ello se suma un fenómeno aún más inquietante, la proliferación de estrategias de supervivencia extremas: casi una de cada cinco familias ha tenido que reducir el consumo básico de electricidad, agua o calefacción; un 2,1% se han visto obligadas a compartir vivienda con personas sin parentesco; y un 3,2% no pueden abandonar el hogar

familiar para independizarse. Esta situación revela hasta qué punto la exclusión residencial no solo refleja la desigualdad, sino que la multiplica, condicionando la salud, el acceso a derechos básicos y la cohesión social.

El problema residencial va más allá de la falta de oferta o del encarecimiento: refleja una deriva estructural en la que la vivienda ha dejado de ser garantía de estabilidad para convertirse en objeto de especulación. Esta tensión entre valor de uso y valor de cambio está en el centro de esta crisis. El mercado, sin una intervención pública fuerte, tiende a expulsar a las personas con menos recursos de las zonas con mayor oferta y oportunidades, alimentando dinámicas de segregación y precariedad. La magnitud de los desahucios registrados en la última década —1,7 millones de personas expulsadas de sus hogares, la mayoría por impago de alquiler— es una muestra extrema pero significativa de este fenómeno.

Es necesario pasar de la lógica del mercado a una estrategia estructural mediante vivienda social como prioridad del bienestar

La respuesta no puede limitarse a medidas paliativas ni a la lógica exclusiva del mercado. Es imprescindible impulsar una estrategia estructural centrada en la ampliación del parque de vivienda social en alquiler como forma de garantizar el acceso seguro, asequible y estable a un hogar. Para ello, resultan claves las alianzas público-privadas bien reguladas, orientadas al interés general, así como políticas que reduzcan el peso del alquiler turístico y movilicen la vivienda vacía. Además, deben establecerse ayudas directas a los hogares vulnerables y servicios de acompañamiento que refuercen su autonomía y eviten la cronificación de la exclusión residencial.

En definitiva, el desafío residencial no puede abordarse solo como una cuestión inmobiliaria o de mercado: es una prioridad social que requiere respuestas desde el Estado de Bienestar. La vivienda, en cuanto que derecho, debe situarse en el centro de las políticas públicas si se quiere frenar el círculo vicioso entre precariedad residencial, pobreza y exclusión social.

46. Sostener las pensiones en una sociedad que envejece aceleradamente exige mucho más que ajustes financieros, requiere construir un pacto intergeneracional sólido, duradero y equitativo basado en recursos suficientes y legitimidad social renovada para garantizar la solidaridad entre generaciones

El sistema público de pensiones en España ha logrado mantenerse estable frente a las presiones del envejecimiento gracias a las reformas aplicadas entre 2021 y 2023. Estas medidas han reforzado su arquitectura financiera mediante la revalorización con el IPC, la separación de fuentes de financiación, un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que incrementa las cotizaciones hasta 2050 y una cuota adicional sobre los salarios más altos. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha confirmado que, con estas reformas, España cumple la regla europea de gasto: el desembolso neto se

mantendrá en el 13,2% del PIB, dentro del límite establecido. Pero esta estabilidad es, como ha advertido el propio organismo, precaria y condicionada a múltiples factores.

Las proyecciones demográficas dibujan un escenario muy exigente para las próximas décadas: una caída de la población activa del 60,5% al 51,3%, un crecimiento de la población mayor de 65 años hasta representar un tercio de la población total y una caída sostenida de la natalidad. Este cambio estructural pone en jaque el modelo actual, ya que reduce la base contributiva y tensiona el equilibrio entre generaciones.

La mejora de la ratio activos/pasivos hasta 2,32 en 2024 es positiva, pero insuficiente para asegurar por sí sola la viabilidad futura del sistema

Por ello, la sostenibilidad de las pensiones no puede limitarse al cumplimiento contable. Requiere una legitimidad renovada que asegure el compromiso de las generaciones activas con quienes se retiran, y garantice que las prestaciones futuras mantendrán su suficiencia. Replantear el contrato social entre generaciones no significa cargar el peso del sistema sobre la población más joven, sino distribuir con justicia los esfuerzos, asegurando financiación estable, empleo de calidad y políticas que vinculen el bienestar en la vejez con la cohesión social. En este sentido, el debate sobre pensiones debe trascender los cálculos financieros y abordar el sentido político de un sistema que es, en última instancia, expresión concreta de solidaridad social e intergeneracional.

47. El Ingreso Mínimo Vital mejora sustancialmente la protección social duplicando cobertura previa, pero su alcance transformador sigue lastrado por múltiples problemas de acceso, permanencia, desigualdades territoriales y baja cobertura real que limitan su impacto como suelo universal de ciudadanía social

El Ingreso Mínimo Vital representa un avance histórico, pero queda atrapado en la inclusión selectiva por barreras estructurales

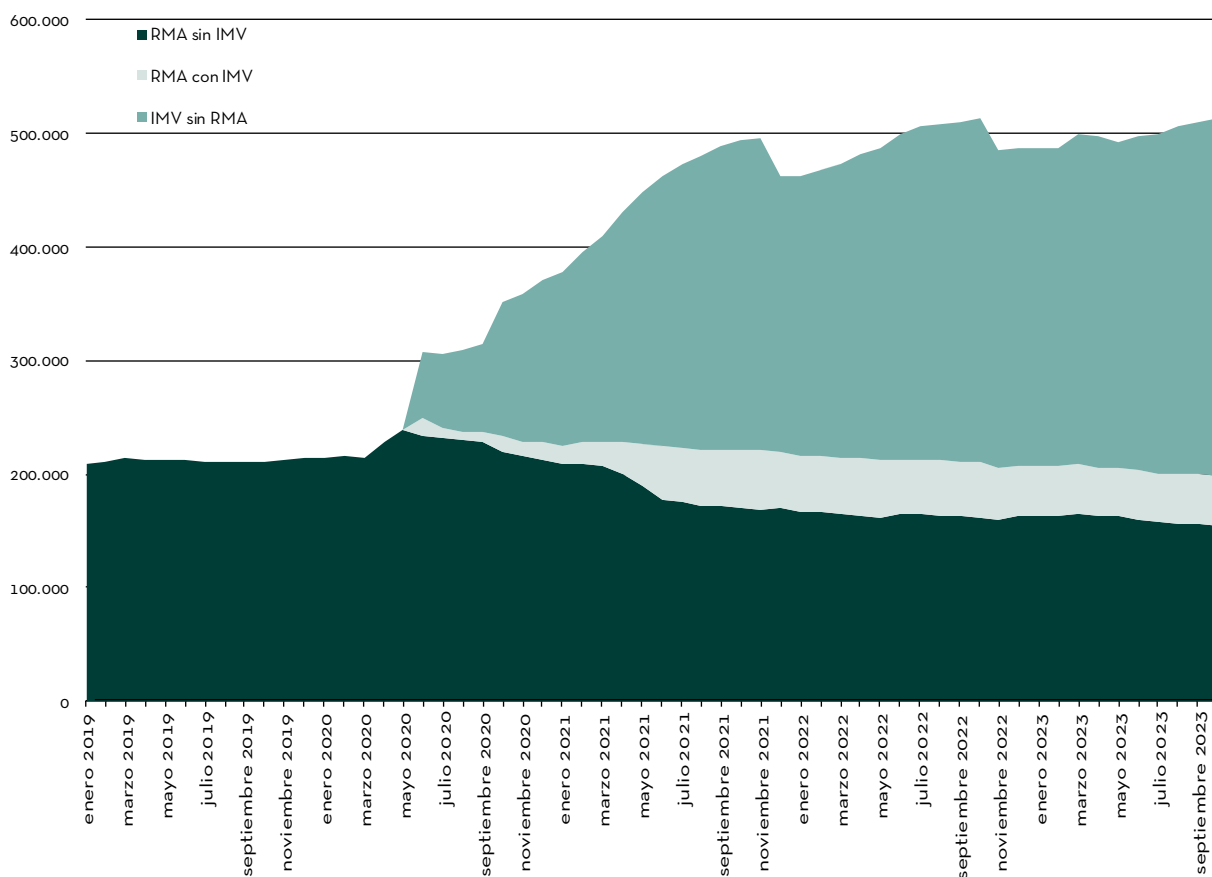
La puesta en marcha del IMV en 2020 supuso un hito en la política social española, representando el avance más importante en garantía de ingresos desde la transición democrática. La prestación ha permitido duplicar la cobertura respecto al sistema previo de rentas mínimas autonómicas fragmentadas, alcanzando al 2,2% de los hogares en 2024. Sin embargo, la distancia entre su ambición inicial y su impacto real es todavía considerable: según la AIReF, apenas llega al 44% de los hogares que podrían beneficiarse de ella, y su Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) cubre solo al 27% de los posibles destinatarios. Desde su implementación, el IMV ha ampliado la red de protección, pero no ha logrado alcanzar la cobertura prevista ni consolidarse como un verdadero suelo general, por las múltiples barreras que dificultan su acceso y permanencia.

Estas limitaciones tienen causas diversas, muchas de ellas estructurales. La falta de información clara y accesible, especialmente entre la población con menor capital cultural o digital, se combina con una burocracia

cia exigente, procedimientos lentos y criterios de elegibilidad poco adaptados a la volatilidad económica de los hogares vulnerables. El uso de ingresos del año fiscal anterior como referencia para valorar la situación actual genera desajustes graves: hay hogares sin ingresos en el presente que quedan excluidos, mientras que otros que ya han mejorado sus condiciones siguen percibiendo la ayuda. A ello se suman barreras culturales y lingüísticas que afectan especialmente a población de origen migrante, y un clima de desconfianza que lleva a muchas personas a autoexcluirse por miedo a futuras reclamaciones o devoluciones.

Las reformas introducidas desde su creación han mejorado parcialmente el sistema: se han reducido tiempos de espera, incorporado compatibilidades con empleo precario y creado el CAPI como complemento a la infancia. Sin embargo, estas mejoras siguen siendo insuficientes para revertir la baja cobertura efectiva. La digitalización, si bien necesaria, no siempre es accesible para quienes más necesitan la ayuda, y la complejidad normativa del sistema no se adapta al perfil de los hogares más excluidos. En este sentido, la simplificación radical de procedimientos, la eliminación de cuellos de botella y el refuerzo del acompañamiento en el proceso de solicitud son pasos imprescindibles para evitar que el IMV quede atrapado en una lógica de «inclusión selectiva».

Evolución del total de perceptores del IMV y de la renta mínima autonómica (sin considerar los que solamente recibe el Complemento de Apoyo para la Infancia (CAPI) en 2019-2023



Fuente: AIReF 2014, a partir de INSS y comunidades autónomas.

La distribución territorial del Ingreso Mínimo Vital no se ajusta a las necesidades reales, sino a capacidades administrativas y trayectorias autonómicas

A esta realidad se suma una dimensión territorial profundamente desigual, que revela tanto diferencias en las trayectorias autonómicas previas como en la capacidad de gestión administrativa. Comunidades como Navarra y País Vasco han integrado plenamente el IMV en sus sistemas propios, reforzando su coherencia interna; otras como Madrid o Castilla y León han optado por dejarlo sustituir a sus limitadas rentas mínimas autonómicas (RMA), mientras que regiones como Cataluña, Baleares o Comunidad Valenciana han adoptado estrategias de complementariedad. Por el contrario, territorios con sistemas de protección muy débiles –Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta o Melilla– han experimentado una transformación abrupta y dependiente del diseño estatal. Estas diferencias generan desigualdades importantes en intensidad protectora, capacidad de adaptación y claridad del itinerario para los usuarios.

La distribución territorial del IMV tampoco se ajusta de forma directa a los mapas de pobreza, reflejando más bien una combinación de necesidades, capacidad administrativa e historia institucional previa. Mientras que Melilla presenta una cobertura del 7,3%, Baleares apenas llega al 1%. Esta heterogeneidad cuestiona la promesa de universalidad e igualdad que subyace al IMV como política de Estado. Por otra parte, también han tenido gran diversidad las políticas de RMA reduciéndose o no generando una complementariedad con el IMV.

Flexibilizar el acceso, reforzar el acompañamiento social y coordinar los territorios es necesario para reforzar la capacidad protectora del Ingreso Mínimo Vital

Convertido en prestación de la Seguridad Social, el IMV ha ganado estabilidad institucional y resistencia frente a vaivenes políticos. Pero para cumplir su potencial transformador necesita reformas valientes y decididas. Es urgente realizar reformas normativas para flexibilizar los criterios de acceso, mejorar la información dirigida a colectivos vulnerables, reforzar el apoyo y el acompañamiento social, y fortalecer la coordinación con las RMA para cubrir vacíos y evitar duplicidades. Solo así el IMV podrá dejar de ser una red de protección fragmentada y desigual y convertirse en lo que prometía: un verdadero suelo común de ciudadanía social en España.

48. La integración ya no es una opción secundaria ni fase posterior, sino que debería constituir el centro del nuevo ciclo de la política migratoria en España como imperativo ético y necesidad estratégica para la cohesión social

El enfoque laboral domina la lógica migratoria ignorando dimensiones clave de inclusión e integración social

Tras cuatro décadas de políticas migratorias, España sigue arrastrando una concepción parcial y reactiva, más centrada en el control que en la integración. Aunque se han producido avances puntuales, no se ha logrado construir un enfoque estructural acorde con el hecho de que España es ya una sociedad de acogida, diversa y en transformación. Desde 1985, la política migratoria ha transitado por tres grandes etapas: un primer periodo

centrado casi exclusivamente en el control de fronteras y la restricción de entradas (1985-1991); un segundo ciclo caracterizado por la combinación de contingentes laborales poco operativos y regularizaciones masivas que evidenciaban la desconexión entre necesidades reales y herramientas legales (1992-2005); y una tercera fase (2006-2025) que, aunque ha reforzado el marco normativo para una migración legal, ordenada y segura, ha seguido postergando el desarrollo de una política pública robusta de acogida e integración social.

El enfoque laboral ha dominado la lógica migratoria española, intensificándose en los últimos años con la regularización de menores no acompañados o las reformas en materia de arraigo. Sin embargo, limitar la integración al mercado de trabajo es un reduccionismo que ignora dimensiones clave de la inclusión de las personas extranjeras con independencia de su estatus migratorio: el acceso a la vivienda, a la sanidad y a la educación, la participación cívica o el reconocimiento cultural. También es imprescindible garantizar el acceso a prestaciones sociales básicas a las personas extranjeras en situación irregular, tal y como reconoce el artículo 14.2 de la ley orgánica de extranjería. Integrar a quienes llegan no es solo un imperativo ético en una sociedad democrática, sino también una necesidad estratégica para garantizar la cohesión social y la sostenibilidad del modelo de bienestar en el contexto de un país envejecido y en transformación estructural.

Es preciso superar enfoques defensivos para construir activamente ciudadanía intercultural en el nuevo ciclo migratorio español

España necesita una política de integración que deje de ser el «eslabón olvidado» y se sitúe como pilar del nuevo ciclo migratorio. Esto implica consolidar un sistema de acogida digno desde el primer momento —no solo en emergencias—, con itinerarios claros y estables de inserción, acompañado de una política pública de integración que sea coherente, ambiciosa y transversal. También exige una narrativa renovada que supere los enfoques defensivos o funcionalistas (la migración como fuerza de trabajo) y apueste por una construcción activa de ciudadanía intercultural. En este sentido, la integración no puede seguir siendo tratada como una fase posterior o secundaria: debe ser el eje rector desde el que repensar todo el marco migratorio. Solo así podrá responderse a los retos complejos del presente y construir un futuro socialmente inclusivo.

49. Los servicios sociales enfrentan el reto transformador de redefinirse en un contexto de creciente complejidad social, soledad no deseada y desarraigo comunitario, buscando centrarse en la conexión social, la inclusión comunitaria y las capacidades relacionales más que en la mera subsistencia

Las nuevas vulnerabilidades obligan a repensar servicios sociales desde la autonomía funcional y el fortalecimiento de capacidades relacionales

En las últimas décadas, los servicios sociales han sido concebidos principalmente como una red de último recurso para cubrir necesidades básicas en situaciones de extrema carencia. Sin embargo, el actual panorama de vulnerabilidad es mucho más amplio y diverso: soledad no deseada, exclusión digital, inseguridad residencial, precariedad

laboral o desarraigo comunitario. Esta diversificación de riesgos sociales ha puesto en crisis el modelo tradicional y ha abierto un debate profundo sobre el papel de los servicios sociales en el nuevo ciclo del Estado de Bienestar.

La expansión progresiva de otros pilares como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia ha desplazado los límites tradicionales de intervención de los servicios sociales, obligándolos a repensar su función específica. Frente a esta redefinición, se abre una disyuntiva clara: continuar centrados en la mera garantía de subsistencia material, o apostar por una lógica más ambiciosa que sitúe en el centro la autonomía funcional, el fortalecimiento de las capacidades relacionales y la inclusión comunitaria. Esta segunda opción no solo responde mejor a la naturaleza de las nuevas vulnerabilidades, sino que permite reconectar los servicios sociales con su dimensión más transformadora: la de promover vínculos, sentido de pertenencia y participación activa en la vida colectiva.

La falta de financiación y la fragmentación institucional entre administraciones obstaculizan la transición de los servicios sociales hacia una lógica promocional y comunitaria

Esta transición hacia una lógica promocional, sin embargo, no está exenta de dificultades. La falta de financiación suficiente y sostenida, la fragmentación institucional entre administraciones, la profesionalización incompleta del servicio de ayuda a domicilio y las inercias burocráticas centradas más en gestionar prestaciones que en acompañar procesos personales suponen obstáculos estructurales de gran calado. Además, la creciente importancia de la atención sociosanitaria en un contexto de envejecimiento que incrementa las situaciones de dependencia y la cronicidad de la pobreza y la exclusión social exige un salto cualitativo en la coordinación entre servicios sociales y sistema sanitario, superando la simple yuxtaposición de intervenciones para construir respuestas realmente integradas.

A pesar de estas dificultades, el momento actual ofrece una oportunidad histórica para redefinir el lugar de los servicios sociales en la arquitectura del bienestar. Apostar por un modelo centrado en la interacción social y la comunidad no significa abandonar la atención a necesidades básicas, sino abordarlas desde un enfoque que reconozca la dimensión relacional de la inclusión. Esta orientación permitiría a los servicios sociales no solo adaptarse a la complejidad del presente, sino recuperar su potencial como espacios de innovación pública, proximidad institucional y reconstrucción del lazo social.

50. La reforma fiscal pendiente surge de la contradicción entre una creciente demanda de protección social que choca con un sistema fiscal obsoleto y una débil disposición ciudadana a sostenerlo, revelando la principal grieta estructural del Estado de Bienestar español

España enfrenta una contradicción insostenible entre demandas crecientes del bienestar y una base fiscal obsoleta e insuficiente

España enfrenta una contradicción estructural cada vez más insostenible: las demandas sobre el Estado de Bienestar no dejan de crecer —por el envejecimiento poblacional, la emergencia de nuevas necesidades

sociales o la transición ecológica—, pero su base fiscal sigue anclada en un modelo obsoleto, fragmentado e insuficiente. Esta brecha entre expectativas sociales y recursos disponibles no es solo un problema técnico, sino uno de los principales factores que explican la fragilidad defensiva del Estado de Bienestar español. En el fondo, la sostenibilidad del bienestar se juega en gran parte en el terreno fiscal.

El sistema fiscal español no ha experimentado una reforma integral desde la transición democrática. El *Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria* (2022) ofreció una hoja de ruta ambiciosa y coherente, pero su implementación ha quedado bloqueada por resistencias políticas y corporativas. Los problemas se acumulan: una estructura impositiva desequilibrada, con exceso de peso sobre el trabajo (50,6% de los ingresos) frente al capital (23,6%) y el consumo (25,8%); la proliferación de gastos fiscales que vacían de contenido los impuestos; una fiscalidad verde infrautilizada; y niveles de fraude fiscal que erosionan la equidad del sistema. Todo ello ha hecho que, aunque España se sitúe ligeramente por debajo de la media de ingresos públicos en la UE-27, lo haga con una estructura menos progresiva y más desigual.

La reforma fiscal debe vincular protección social con la responsabilidad fiscal compartida mediante una narrativa transformadora que supere la desconfianza institucional

Pero la raíz del problema no es solo técnica: también es cultural y política. Como se ha señalado anteriormente, uno de los principales desafíos del Estado de Bienestar español es la falta de disposición colectiva a sostenerlo fiscalmente. Existe un fuerte apoyo social a los servicios públicos, pero no se traduce en una cultura fiscal robusta. Esta grieta, atravesada por factores ideológicos, desconfianza institucional y baja legitimidad del sistema impositivo, debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos en condiciones de suficiencia. Sin una narrativa que vincule de forma clara la protección social con la responsabilidad fiscal compartida, seguirá prevaleciendo un modelo de adhesión afectiva pero desvinculada de compromisos reales.

En este contexto, la reforma fiscal pendiente debe abordarse como una prioridad política y como un pilar estructural del nuevo ciclo del bienestar. Requiere actuar en múltiples frentes: aproximar la tarifa del ahorro a la general en el IRPF, generalizar la estimación directa, revisar en profundidad los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades, reforzar la imposición patrimonial, avanzar en la simplificación del IVA, extender las deducciones reembolsables y desplegar de forma efectiva la fiscalidad ambiental. Sin una reforma fiscal valiente, España está condenada a sostener un Estado de Bienestar crónicamente infrafinanciado, siempre al borde de la insuficiencia, atrapado en una lógica de supervivencia en lugar de expansión.

51. España se encuentra en una encrucijada histórica que exige ir más allá del modelo clásico en el que el Estado asume en solitario la responsabilidad del bienestar, para avanzar hacia un nuevo pacto social basado en la corresponsabilidad inteligente y articulada entre Estado, mercado, familias y comunidad

En un contexto de vulnerabilidades crecientes, transiciones ecológicas y tecnológicas, y desafíos demográficos estructurales, ningún actor por sí solo puede garantizar respuestas justas, sostenibles y eficaces.

El bienestar debe concebirse como una tarea colectiva, donde cada parte asume un papel distinto pero complementario, al servicio de una sociedad cohesionada y justa.

El Estado, como actor central y garante último de derechos, debe reforzar su papel mediante una financiación suficiente (basada en una reforma fiscal ambiciosa y justa), una regulación eficaz de mercados clave como la vivienda o los servicios esenciales, una provisión universal de servicios básicos de calidad y una coordinación territorial que corrija desigualdades entre comunidades autónomas y territorios. Pero su acción no puede sostenerse sin la corresponsabilidad activa del resto de la sociedad.

El mercado debe estar al servicio del interés general y el Estado debe velar por un adecuado equilibrio que evite dinámicas de exclusión y segmentación, comprometido con una fiscalidad progresiva sobre beneficios y patrimonio, y enfocado en una función complementaria. Las familias, lejos de ser refugios de último recurso, deben avanzar hacia modelos corresponsables y equitativos, superando la división sexual del trabajo y compartiendo cuidados y apoyos intergeneracionales. Y las comunidades, por su parte, han de fortalecerse como espacios de vínculo, cooperación y participación: mediante redes de apoyo mutuo, autoorganización vecinal y articulación con las políticas públicas desde una lógica de proximidad.

Este nuevo modelo no puede imponerse desde arriba ni surgir espontáneamente desde abajo. Requiere voluntad política para impulsar reformas estructurales, pero también una profunda pedagogía social que conecte derechos con responsabilidades y construya marcos culturales favorables a la cooperación. Se necesita, además, un horizonte de consensos estables que desborde los ciclos electorales y apueste por un proyecto de bienestar común que sea resiliente ante las crisis, equitativo en sus resultados, ambiental y económicamente sostenible, y legitimado por la ciudadanía. Solo así será posible afrontar los desafíos del siglo XXI sin dejar a nadie atrás y sin agotar las bases colectivas que sostienen nuestra convivencia.

Capítulo 5

Confianza en el modelo de bienestar y capital social (*)

52. La legitimidad del Estado de Bienestar depende de una democracia robusta, capaz de representar, escuchar y responder; sin participación efectiva y sin confianza en las instituciones, el contrato social que lo sostiene se debilita y pierde su fuerza integradora

Una democracia percibida como ineficaz y desconectada debilita la participación ciudadana y erosiona la legitimidad necesaria para sostener colectivamente el Estado de Bienestar

La legitimidad del Estado de Bienestar no solo depende de su capacidad para garantizar derechos sociales, sino también de la solidez del sistema democrático que lo sostiene. Sin embargo, amplios sectores de la ciudadanía perciben que el funcionamiento real de la democracia está lejos de cumplir sus promesas. Aunque no hay un rechazo explícito al modelo democrático como tal, se extiende la sensación de que este ha perdido eficacia, capacidad de respuesta y conexión con la sociedad.

Muchos ciudadanos sienten que sus opiniones no tienen un impacto real en las decisiones públicas, lo que alimenta la desafección y el desapego institucional. Esta desconexión se traduce en una erosión progresiva del compromiso cívico y en una participación política debilitada, donde los mecanismos de expresión parecen insuficientes o ineficaces. La democracia representativa, sin mecanismos complementarios de participación más directa, se percibe como un sistema cerrado que no canaliza adecuadamente las demandas sociales.

(*) Estas páginas recogen el resumen del capítulo 5 de: FLORES MARTOS, R. (coord.) (2025). *IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

Esta fragilidad democrática constituye una amenaza silenciosa para el Estado de Bienestar, cuya legitimidad requiere una ciudadanía activa, crítica y comprometida. Si la ciudadanía no siente que forma parte del proceso político, difícilmente sostendrá, a largo plazo, un modelo basado en la solidaridad, la redistribución y la corresponsabilidad.

La corrupción, la desafección política y la incapacidad para resolver problemas estructurales alimentan la desconfianza institucional y abren fisuras en la cultura legitimadora del Estado de Bienestar

La corrupción sigue siendo una de las principales fisuras que minan la confianza ciudadana en las instituciones y, por extensión, en el Estado de Bienestar. Aunque se dieron ciertos avances entre 2015 y 2022, la percepción generalizada de que la corrupción sigue siendo sistémica o impune alimenta un sentimiento de injusticia y descreimiento. La corrupción no solo implica un desvío de recursos o un abuso de poder: actúa como un potente corrosivo de la legitimidad democrática.

Este fenómeno refuerza la creencia de que las reglas del juego no se aplican a todos por igual, de que el sistema favorece a quienes tienen más privilegios y no actúa en beneficio del bien común. Cuando las prácticas corruptas se asocian con la ineficacia en la gestión de recursos públicos, se erosiona el vínculo entre impuestos y servicios, debilitando la cultura fiscal que sostiene al modelo de bienestar.

A la corrupción se suma la persistencia de problemas estructurales como el acceso a la vivienda o el desempleo, que no han recibido respuestas políticas sostenidas ni eficaces. Esta incapacidad para abordar los retos que más afectan a la ciudadanía acrecienta la desafección política y profundiza la distancia entre gobernantes y gobernados. La legitimidad del Estado de Bienestar no puede sostenerse si el sistema político se percibe como incapaz de garantizar condiciones mínimas de protección social, equidad y progreso para todos.

El sentimiento de no ser escuchada refuerza el desapego de la ciudadanía y exige una renovación institucional que haga el sistema más receptivo, transparente y corresponsable

Una parte creciente de la ciudadanía siente que sus voces no son tenidas en cuenta por el sistema político. A pesar de la existencia formal de cauces democráticos, existe el sentimiento de que la participación se reduce a procesos electorales desconectados de una influencia real en las decisiones. Esta sensación de irrelevancia genera frustración, pasividad e incluso hostilidad hacia las instituciones.

El distanciamiento entre poder político y ciudadanía no es solo un problema de percepción: expresa una necesidad urgente de renovación institucional. No basta con reformar leyes o actualizar procedimientos; se requiere repensar cómo las instituciones pueden ser más accesibles, transparentes y permeables a las demandas sociales. La legitimidad del sistema pasa por reconstruir la relación de confianza entre la ciudadanía y sus representantes.

Fortalecer esa legitimidad implica abrir espacios más efectivos de participación, garantizar mecanismos de rendición de cuentas rigurosos y generar entornos donde las personas se sientan parte activa del proyecto colectivo. Sin esta renovación, el Estado de Bienestar corre el riesgo de volverse una estructura administrada desde arriba, desvinculada de la energía social que le da sentido y sostenibilidad.

53. El amplio respaldo ciudadano a los servicios públicos refuerza la legitimidad del Estado de Bienestar, pero sostenerlo en el tiempo exige reconstruir la confianza en el sistema fiscal, fortalecer la cultura de corresponsabilidad y vincular de forma visible los impuestos con derechos y bienestar colectivo

El amplio respaldo a los servicios públicos muestra que el Estado de Bienestar conserva una fuerte legitimidad social, sustentada en su impacto cotidiano y su capacidad de reducir desigualdades

A pesar del clima generalizado de desconfianza institucional, los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o el sistema de pensiones continúan gozando de un respaldo social muy sólido en España. La ciudadanía los percibe como herramientas fundamentales para la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la protección frente a los riesgos vitales. Este consenso es amplio, transversal y estable en el tiempo, y va más allá de las diferencias ideológicas o generacionales.

La valoración positiva de estos servicios públicos responde, en muchos casos, a experiencias personales concretas y a una conciencia social muy arraigada sobre el valor de lo común. No se trata solo de una adhesión abstracta a la idea de solidaridad, sino de un reconocimiento pragmático de que estos servicios mejoran la vida cotidiana y reducen desigualdades. La sanidad universal, la educación pública y las pensiones son percibidas como logros colectivos que deben ser preservados y fortalecidos.

Este respaldo es uno de los elementos de legitimidad estable del Estado de Bienestar y actúa como pilar del pacto social. Pero ese pacto no puede sostenerse solo desde la demanda de derechos; requiere también una cultura de corresponsabilidad fiscal que garantice su sostenibilidad a largo plazo.

La reticencia a pagar impuestos revela una fractura en el principio de reciprocidad, que pone en riesgo la sostenibilidad del pacto social si no se refuerza la cultura de corresponsabilidad

La alta valoración de los servicios públicos coexiste, sin embargo, con una importante reticencia a aceptar una mayor solidaridad fiscal. Una parte significativa de la ciudadanía considera que ya paga demasiados impuestos o se muestra escéptica ante cualquier propuesta de incremento impositivo, incluso cuando se justifica como necesario para mantener la calidad y universalidad del sistema.

Esta contradicción expresa una tensión de fondo entre el deseo de protección y la disposición a sostenerla colectivamente. La percepción de los impuestos como una «carga» desvinculada del beneficio recibido evidencia una fractura en el principio de reciprocidad que debe articular el contrato social. Si se percibe que el esfuerzo no es compartido equitativamente, o que lo aportado no se transforma en servicios efectivos, la voluntad de contribuir se debilita.

Superar esta contradicción requiere reforzar el vínculo entre impuestos y derechos, visibilizando cómo las aportaciones individuales hacen posible el bienestar colectivo. Se necesita una pedagogía fiscal

capaz de explicar que no hay cohesión sin corresponsabilidad, y que pagar impuestos no es un sacrificio individual, sino una inversión social.

La percepción de fraude fiscal y la ambivalencia ante su condena socavan la legitimidad del sistema tributario y hacen urgente reconstruir la confianza en su justicia y eficacia redistributiva

Una de las principales barreras para construir una cultura fiscal sólida en España es la percepción ampliamente extendida de que el fraude fiscal es estructural, impune y generalizado. Esta convicción genera desafección, desconfianza y un sentimiento persistente de injusticia. Muchas personas sienten que cumplen con sus obligaciones mientras otros —particulares o grandes empresas— burlan el sistema sin consecuencias.

Lo más preocupante es que esta percepción no siempre se traduce en una condena rotunda. En algunos sectores sociales se observa una cierta ambivalencia hacia el fraude, influida por la idea de que «todos lo hacen», por el descrédito de la Administración tributaria o por la sospecha de que los fondos públicos se gestionan con ineficiencia o favoritismo. Esta ambivalencia no solo dificulta el cumplimiento voluntario, sino que erosiona la legitimidad del sistema fiscal en su conjunto.

Restaurar la confianza en la fiscalidad requiere actuar simultáneamente en varios planos: combatir con más eficacia el fraude, reforzar la progresividad del sistema, asegurar la transparencia en el uso de los recursos y, sobre todo, demostrar con claridad que los impuestos se transforman en derechos reales. Un sistema percibido como justo, eficiente y redistributivo es la base para reconstruir el contrato fiscal y sostener el modelo de bienestar en el tiempo.

54. Se debilita la red de lazos personales con una confianza alta en círculos cercanos (familia, amistades) pero muy baja hacia personas desconocidas. La participación asociativa disminuye, y la pobreza agrava el aislamiento, fragmentando lazos comunitarios y limitando la cooperación social

La fortaleza de los lazos personales en España convive con una marcada desconfianza hacia el otro anónimo, lo que revela una red de lazos personales fragmentada que dificulta la construcción de vínculos cívicos amplios y proyectos comunes

Una de las características más destacadas de la red de lazos personales en España es la fuerte confianza depositada en el entorno más íntimo —familiares y amistades—, que funcionan como redes de apoyo fiables en momentos de necesidad. Esta cohesión relacional en el ámbito privado actúa como un refugio frente a la incertidumbre social, compensando en ocasiones la debilidad de otras estructuras de soporte institucional o comunitario. La familia extensa y las amistades cercanas operan como amortiguadores emocionales y materiales, reflejo de una cultura basada en vínculos afectivos sólidos.

Sin embargo, esta fortaleza en los lazos cercanos contrasta con un bajo nivel de confianza hacia personas desconocidas o hacia el conjunto de la sociedad, lo que revela una escasa «confianza generalizada» o cívica. Esta desconfianza hacia el otro anónimo limita la cooperación social más allá de los círculos próximos y debilita la capacidad para construir proyectos colectivos de mayor escala. La organización social basada en redes cerradas dificulta la articulación de una ciudadanía cohesionada y solidaria, al restringir los marcos de interacción pública y el compromiso con normas comunes que benefician a todos.

La debilitada vida asociativa limita la capacidad colectiva para construir comunidad y afrontar la incertidumbre, haciendo imprescindible reactivar la sociedad civil como actor autónomo y complementario del Estado

El declive en la participación ciudadana en asociaciones, redes de apoyo mutuo y estructuras comunitarias formales refleja un debilitamiento del tejido social en España. Esta tendencia se manifiesta en la baja tasa de asociacionismo, la fragmentación del entramado organizativo y una alta dependencia de la financiación pública. La falta de implicación activa puede explicarse por múltiples factores: procesos de individualización, desconfianza en la eficacia de la participación, precariedad vital o escasez de tiempo y recursos. Esta realidad no solo limita la capacidad de la sociedad civil para incidir en lo público, sino que deja vacíos relacionales que empobrecen el capital social y erosionan los vínculos de cooperación.

Sin embargo, el fortalecimiento de la sociedad civil es esencial para la cohesión social. Espacios como asociaciones vecinales, redes solidarias u organizaciones de base no solo generan pertenencia, sino que permiten afrontar colectivamente contextos de incertidumbre y desigualdad. Su vitalidad amplía el acceso a recursos, multiplica las capacidades de acción colectiva y refuerza la resiliencia democrática.

Frente al debilitamiento actual, el reto no pasa solo por reactivar la participación, sino por redefinir el marco de relación entre el Estado y el tercer sector. Es necesario evitar su instrumentalización como sustituto del Estado y garantizar que su papel en la provisión de bienestar sea complementario desde la corresponsabilidad, no desde la delegación. Solo así podrá construirse un modelo equitativo, legítimo y sostenible de acción social.

La pobreza no solo excluye económicamente, sino que también aísla socialmente, rompiendo vínculos de apoyo y debilitando la solidaridad necesaria para una cohesión comunitaria real

La pobreza no solo implica carencias materiales, sino que también provoca un empobrecimiento relacional profundo. En contextos de vulnerabilidad severa, no faltan únicamente los recursos económicos, sino también las relaciones significativas que permiten sostener la vida cotidiana. La exclusión social va acompañada de una contracción o ruptura de los lazos familiares, comunitarios, laborales y afectivos, lo que deteriora el bienestar emocional, limita las estrategias de afrontamiento y reduce las oportunidades de mejora vital.

La falta de recursos restringe además el acceso a espacios sociales, culturales o comunitarios, favoreciendo el retraimiento y agravando el aislamiento. Esta fragmentación no solo afecta a las personas en situación de pobreza, sino que debilita el capital social de la comunidad en su conjunto, al erosionar la diversidad de interacciones y la solidaridad mutua. Combatir la pobreza, por tanto, no es solo una

exigencia de justicia económica, sino también un imperativo relacional: reconstruir vínculos y reforzar el tejido social es clave para evitar la fractura comunitaria y promover una inclusión real.

55. La juventud española vive con un profundo pesimismo ante su futuro, marcado por la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y la incertidumbre sobre el relevo generacional y la sostenibilidad del sistema de pensiones

La juventud vive atrapada en una incertidumbre constante que mina la confianza en un futuro, marcado por la precariedad, la dependencia familiar y la imposibilidad de construir un proyecto vital autónomo

La población joven en España muestra un acusado pesimismo respecto a su futuro económico y social. A diferencia de generaciones anteriores, perciben un horizonte sin referentes claros, donde la precariedad laboral impide construir un proyecto de vida autónomo. Esta sensación de bloqueo alimenta la percepción de vivir en una sociedad volátil, donde todo es provisional, inestable y frágil.

El malestar generacional no es solo una reacción emocional, sino una respuesta racional a un entorno que ha debilitado las vías tradicionales de movilidad social. La dificultad para imaginar una trayectoria vital estable afecta no solo al bienestar subjetivo, sino también a la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para ofrecer horizontes de futuro.

La imposibilidad de emanciparse y acceder a un empleo digno condena a muchos jóvenes a la dependencia familiar, rompe el ciclo vital y alimenta una brecha generacional que compromete el equilibrio social

Uno de los problemas más acuciantes que afectan a la juventud, y que contribuye a su pesimismo, es la extrema dificultad para lograr la emancipación del hogar familiar y alcanzar la estabilidad laboral. Las barreras en el mercado de trabajo, caracterizadas por altos niveles de paro juvenil, contratos temporales y salarios bajos, impiden a muchos jóvenes iniciar un proyecto de vida autónomo. Esta precariedad laboral se relaciona directamente con la incapacidad de acceder a una vivienda propia o de alquiler, prolongando la dependencia económica de sus familias. La emancipación tardía no es solo un indicador demográfico; refleja un desajuste profundo en el ciclo vital, impidiendo la acumulación de capital social y económico en las etapas iniciales de la vida adulta, lo que genera una brecha intergeneracional y presiones adicionales en las estructuras familiares.

La preocupación de la juventud por las pensiones no es solo económica, sino política: expresa el temor de quedar fuera de un contrato social que ya no perciben como inclusivo ni sostenible

Junto al presente precario, la juventud expresa una creciente preocupación por su futuro a largo plazo. La sostenibilidad del sistema público de pensiones y la viabilidad del relevo generacional aparecen como

fuentes de incertidumbre estructural. La percepción de que el sistema no podrá garantizar prestaciones dignas cuando les llegue la jubilación alimenta una crisis de confianza en el pacto intergeneracional. Conscientes de una pirámide poblacional invertida y de los desafíos demográficos, gran parte de la juventud duda de que el sistema de pensiones pueda garantizarle prestaciones dignas en el futuro, cuando llegue el momento de jubilarse. Esta incertidumbre sobre el futuro de las pensiones refleja una crisis de confianza en el pacto intergeneracional y en la capacidad del Estado para asegurar el bienestar a largo plazo. La percepción de que son ellos quienes sufrirán las consecuencias de las decisiones actuales o la falta de previsión, acentúa su desconfianza en el sistema, instando a una reflexión profunda sobre las reformas necesarias para garantizar la equidad y la sostenibilidad de las prestaciones sociales para las generaciones venideras.

56. La vivienda se ha convertido en una barrera estructural que bloquea la emancipación juvenil, alimenta la frustración y erosiona la confianza en el Estado de Bienestar, al prolongar la dependencia familiar y hacer inalcanzable el acceso a una vida digna e independiente

La crisis de acceso a la vivienda en España se ha convertido en un factor estructural de exclusión que erosiona la confianza social y debilita la cohesión comunitaria

El acceso a una vivienda digna y asequible se ha consolidado como uno de los problemas sociales más acuciantes en España, generando un impacto directo en la confianza social y la estabilidad de los hogares. El encarecimiento de los precios del alquiler y la compra, sumado a la precariedad laboral, dificultan enormemente que amplios sectores de la población, especialmente la juventud, puedan acceder a una vivienda en condiciones razonables. Esta barrera no es solo económica, sino que se traduce en una limitación fundamental para el desarrollo de proyectos de vida, la formación de nuevas unidades familiares y la creación de arraigo comunitario. La incapacidad del mercado y de las políticas públicas para garantizar este derecho básico genera frustración, estrés y una sensación de desprotección que mina la confianza en el sistema y en la equidad social.

La emancipación tardía convierte a la familia en un escudo de contención, desdibujando la responsabilidad pública y generando nuevas formas de desigualdad intergeneracional

La dificultad generalizada en el acceso a la vivienda tiene como consecuencia directa una significativa emancipación tardía de los jóvenes del hogar familiar. España se sitúa a la cola de Europa en la edad media de salida del hogar parental, una situación que no se debe a la preferencia cultural, sino a la imposibilidad material de acceder a una vivienda propia o de alquiler. Esta prolongada dependencia económica y residencial de la familia no solo retrasa el desarrollo de la autonomía personal de la juventud, sino que también ejerce una presión adicional sobre los hogares de origen. La familia se convierte así en un amortiguador de las deficiencias del mercado laboral y de vivienda, asumiendo costes que no se darían de existir políticas públicas más efectivas. Esta dinámica no solo genera tensiones intergeneracionales y

limita la capacidad de ahorro y planificación a largo plazo, sino que también profundiza las desigualdades sociales: mientras algunas familias pueden asumir ese rol de soporte, otras —con menos recursos— no tienen margen para hacerlo, dejando a sus miembros más jóvenes en una situación de mayor vulnerabilidad y reduciendo aún más sus posibilidades de emancipación y desarrollo vital.

57. La emergencia climática y sus efectos son una preocupación creciente. Se demanda una acción colectiva y global. La confianza en la capacidad de las instituciones para ofrecer soluciones es crucial para movilizar a la sociedad y evitar el fatalismo ambiental

La percepción del cambio climático como amenaza palpable refuerza una conciencia colectiva sobre la interdependencia entre la salud del planeta y el bienestar humano, y alimenta una demanda social de acción urgente y coordinada

La percepción del cambio climático como amenaza real y presente refleja una creciente conciencia colectiva sobre la interdependencia entre bienestar humano y sostenibilidad ambiental. La preocupación por el cambio climático ha escalado significativamente en la agenda social española, consolidándose como una inquietud central para la ciudadanía. La percepción de una «emergencia climática» ya no es una cuestión abstracta, sino que se materializa en la observación directa de fenómenos extremos más frecuentes y severos, como sequías prolongadas, inundaciones devastadoras u olas de calor sin precedentes. Estos impactos tangibles generan ansiedad y un sentido de vulnerabilidad ante un futuro incierto. La conciencia sobre la gravedad de las consecuencias del cambio climático impulsa una demanda social de acción contundente y coordinada, tanto a nivel nacional como internacional. Esta preocupación colectiva refleja no solo un conocimiento de los riesgos científicos, sino una creciente conciencia de la interdependencia entre el bienestar humano y la salud del planeta, y la necesidad de una respuesta eficaz.

La respuesta efectiva a la emergencia climática exige confianza en la acción pública y global, pero también requiere cerrar la brecha social en torno a la percepción del problema para sostener un proyecto común de futuro

Frente a la magnitud del desafío climático, resulta imprescindible avanzar hacia respuestas colectivas que superen la lógica individual y apuesten por una transformación estructural del modelo de desarrollo. La ciudadanía demanda políticas públicas ambiciosas, cooperación internacional efectiva y liderazgo institucional que inspire confianza.

Sin embargo, la construcción de esta confianza se ve amenazada por una fractura profunda en la forma en que diferentes sectores sociales perciben la emergencia climática. Mientras las clases medias y acomodadas tienen una mayor preocupación por el cambio climático, frente a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad (EINSFOESSA 2024) —con preocupación por necesidades más inmediatas como el empleo, la vivienda o la alimentación— no lo identifican como una prioridad. Esta brecha en las

experiencias vitales y los marcos de valores pone en riesgo la posibilidad de construir consensos amplios y sostenidos, y debilita la capacidad del Estado de Bienestar para proyectarse como un proyecto común de futuro.

Frente a ello, se hace necesario tejer una narrativa inclusiva, que combine conciencia del riesgo con horizonte de esperanza, que reconozca la diversidad de situaciones sociales y que garantice que la transición ecológica sea también una transición justa. De este modo será posible evitar el fatalismo, fortalecer el compromiso colectivo y sostener una respuesta democrática frente a la crisis climática.

58. Vivimos en una sociedad marcada por la aceleración, la incertidumbre y el desarraigo, en la que el malestar se canaliza a menudo a través de identidades excluyentes que erosionan la cohesión social

Construir cohesión exige resistir la tentación de definirnos contra otros y volver a imaginar un «nosotros» más amplio y compartido

En contextos de creciente incertidumbre, la identidad se convierte en un refugio y, a la vez, en una frontera. Los marcos identitarios excluyentes ganan fuerza cuando parte de la población —particularmente en sectores acomodados— proyecta sus miedos sobre figuras externas, construyendo enemigos simbólicos como las personas migrantes, pobres o excluidas. Estos temores no siempre responden a riesgos reales, sino que en muchos casos son inducidos por discursos que transforman la inseguridad económica en una amenaza identitaria. Así, la cohesión social se resiente, desplazada por narrativas que dividen en lugar de unir.

Al mismo tiempo, se observa un giro en los valores que articulan parte del malestar social, especialmente entre algunos sectores jóvenes. Se impone una lógica en la que priman el orden, la seguridad y la protección frente a valores más abiertos como la participación, la justicia social o la autorrealización. Este cambio cultural, silencioso pero profundo, redefine el modo en que se interpreta el papel del Estado y la pertenencia al proyecto colectivo, abriendo espacio a discursos que legitiman la exclusión como forma de defensa.

La nostalgia de un orden perdido y la impaciencia del presente alimentan identidades que dividen

En un mundo cada vez más acelerado y volátil, donde las identidades son inestables, las relaciones se tornan efímeras y los referentes colectivos se desdibujan, muchas personas experimentan una sensación de desarraigo. Esta «modernidad líquida» impone ritmos incompatibles con los tiempos deliberativos de la democracia y genera una impaciencia estructural —lo que algunos autores han denominado una ciudadanía «despacientada»— que abre la puerta a propuestas políticas que prometen respuestas rápidas, directas y sin matices. En ese terreno de incertidumbre, los discursos que ofrecen orden, pertenencia y normas claras ganan tracción, incluso cuando lo hacen a costa de los principios democráticos y la inclusión social.

A esta aceleración se suma un sentimiento de pérdida: la percepción de que se ha roto un equilibrio cultural, normativo o económico que antes ofrecía seguridad. Esta nostalgia por un pasado idealizado —a menudo reescrito, reinterpretado o directamente inventado— alimenta propuestas que buscan recuperar una supuesta solidez perdida. Así, el auge de identidades excluyentes no se explica solo por una ideología concreta, sino también por el malestar subjetivo que genera una sociedad sin anclajes estables ni horizontes compartidos.

	Identidades	Demandan un Estado...
Incertidumbre	Refugio y frontera que rompen el nosotros y «construyen» enemigos simbólicos	Donde prime el orden y la seguridad sobre todo lo demás
Aceleración	Identidades inestables y cambiantes	Incompatible con los tiempos de una democracia deliberativa
	Ciudadanía despacientada	Que aplique recetas rápidas y simplistas
Desarraigo	Tradición	En el que vuelva un pasado idealizado

59. La proliferación de noticias falsas en el entorno digital polariza la opinión pública y socava la credibilidad informativa. Esto erosiona la verdad compartida y dificulta el diálogo democrático, planteando un desafío fundamental para la cohesión social y la toma de decisiones informadas

La desinformación digital fragmenta el espacio público, refuerza la polarización ideológica y erosiona la verdad compartida necesaria para el diálogo democrático y la cohesión social

La omnipresencia de la tecnología digital, y en particular de las redes sociales, ha introducido nuevos desafíos para la cohesión social y la confianza. Una de las preocupaciones más extendidas es la proliferación de las noticias falsas (*fake news*) y su capacidad para manipular la opinión pública. La desinformación no solo distorsiona la percepción de la realidad y socava la credibilidad de las fuentes fiables, sino que también actúa como catalizador de la polarización ideológica. Generar «burbujas de filtro» o «cámaras de eco» donde las personas se exponen casi exclusivamente a contenidos que refuerzan sus creencias previas obstaculiza el diálogo constructivo y fragmenta el espacio público. Esta erosión de una verdad compartida compromete los marcos de interpretación colectiva sobre los que se sostiene la deliberación democrática y la capacidad de alcanzar consensos básicos.

La sobrecarga informativa y la desconfianza en las fuentes dificultan una ciudadanía crítica y participativa, planteando un reto educativo y político clave en la era digital

La gestión de la información en el entorno digital presenta un desafío sin precedentes. La velocidad y el volumen con los que se produce y difunde contenido, sumados a la dificultad para verificar su veracidad, generan una sobrecarga informativa que desborda la capacidad de procesamiento de la ciudadanía. Esta situación no solo genera confusión, sino que alimenta una actitud de escepticismo generalizado hacia cualquier fuente, dificultando la construcción de una opinión pública crítica e informada. Garantizar un acceso a información de calidad y promover la alfabetización mediática y digital se vuelven esenciales para empoderar a la ciudadanía. Este desafío no es solo tecnológico, sino también social y educativo, ya que de él depende la capacidad de la sociedad para formarse una opinión crítica y participar de manera informada en la vida pública.

Las plataformas digitales, lejos de conectar comunidades, tienden a generar nuevas formas de aislamiento y fragmentación afectiva, cuestionando los fundamentos relacionales de la democracia deliberativa

Aunque internet y las plataformas digitales nacieron con la promesa de conectar al mundo, su impacto real en la vida democrática y social está siendo crecientemente cuestionado. En lugar de propiciar conversaciones compartidas y comprensión mutua, las redes sociales han contribuido a la fragmentación política, la polarización ideológica y la expansión de discursos extremos.

Esta fragmentación digital socava los marcos colectivos de interpretación y las experiencias comunes necesarias para sostener una democracia deliberativa. La paradoja es evidente: herramientas diseñadas para unir a las personas terminan generando nuevas formas de aislamiento. La arquitectura algorítmica de las plataformas recompensa los contenidos más emocionales y polarizantes, mientras penaliza las voces matizadas o reflexivas. Como consecuencia, las comunidades digitales tienden a encerrarse en círculos de afinidad que refuerzan sesgos y dificultan la construcción de lazos sociales sólidos fuera del entorno *online*. Esta dinámica no solo pone en cuestión la calidad del debate público, sino que debilita los vínculos sociales que sustentan cualquier proyecto democrático común.

Capítulo 6

El futuro que estamos construyendo (*)

60. Hemos llegado a la sociedad del miedo conscientes de los riesgos que enfrenta refugiándose en un improbable «sálvese quien pueda». Necesitamos reaccionar individual y colectivamente ante un futuro ya presente sin lugar para lo auténticamente humano, superando la instalación en el lado privilegiado del mundo

Estamos transitando de la sociedad desvinculada a la sociedad del miedo

En el VIII Informe de la Fundación FOESSA utilizábamos el término de *la desvinculación* para referirnos al modelo social que emergía del análisis realizado. En este damos un paso más, y condensamos lo visto hasta ahora en esta nueva idea: la sociedad del miedo. En ella vivimos con una plena conciencia y conocimiento de muchos de los riesgos que nos acechan individual y colectivamente. Riesgos sabidos que nos instalan en una suerte de estado de inseguridad que define el vivir social. Los riesgos estructurales se normalizan, colonizando el discurso público a través de la amenaza, la incertidumbre y una cultura global que pone la (in)seguridad en el foco de nuestras preocupaciones, alimentando actitudes xenófobas y erosionando la confianza en las instituciones democráticas.

Las ciencias sociales nos han evidenciado que los riesgos que afrontamos como sociedad no proceden fundamentalmente del exterior de esta, o de sus incapacidades, sino que responden precisamente a la acción efectiva que las sociedades ejercen sobre la realidad natural y social. Enfrentamos una especie de catástrofe sin acontecimiento. Un proceso de desintegración gradual y silenciosa que no se manifiesta en un único evento devastador, sino en transformaciones acumulativas que alteran profundamente nuestro entorno. Cambios que son difíciles de prever y suelen pasar desapercibidos hasta que la capacidad de

(*) Estas páginas recogen el resumen del sexto capítulo de: FLORES MARTOS, R. (coord.) (2025). *IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

autorregulación deja de funcionar. Continuar con nuestros estilos de vida actuales nos encamina gradualmente hacia el desastre, aunque no podamos prever exactamente cómo ni cuándo ocurrirá.

Los riesgos de seguir mirando para otro lado cristalizan en el repliegue individualista y en el sálvese quien pueda

Paradójicamente, no parece haberse fortalecido la actitud precautoria y responsable de la ciudadanía para afrontar los riesgos que asumimos como sociedad, ni de los individuos para forzar a las instituciones a tomar medidas. Por el contrario, tendemos mucho más al repliegue individualista y a desconfiar de lo colectivo, buscando una especie de quimérico «sálvese quien pueda». En un contexto en el que algunos de los riesgos (el colapso ecológico, la exclusión social de miles de personas...) son de tal magnitud que, de materializarse en toda su potencia, harán imposible esa salvación.

Si no se logra el giro, la transición hacia un bienestar sostenible para todas las personas, consolidaremos el escenario de «Estados fortaleza» que empezamos a vislumbrar en la práctica, con regímenes autoritarios enfocados en la seguridad y supervivencia nacional, donde los sistemas de bienestar se erosionan, llevando a un declive de las oportunidades de una vida digna para la mayoría de la población.

Necesitamos un cambio de paradigma para entender que la crisis social (pobreza, desigualdad) y la crisis ecológica (cambio climático, extinción) son dos problemáticas interconectadas que conforman una crisis sistémica y universal que exige una nueva cosmovisión. De lo contrario seguiremos abordándolas de maneras contradictorias, oponiendo las soluciones para la crisis social (más crecimiento y consumo) a las de la crisis ecológica (menos consumo y decrecimiento).

Para diseñar el futuro necesitamos deslocalizarnos del lado bueno de la vida y desacelerarla

Los avances tecnológicos nos ensueñan en la posibilidad de otra vida, una experiencia más, otra cosa que tener, acumular, tirar u olvidar modificando las expectativas individuales y las propias estructuras sociales. Sin embargo, lo que el desarrollo tecnológico hace es llevarnos a la aceleración, despojándonos de la resonancia y de la experiencia de sentirnos en conexión con algo más grande que nosotros mismos, ya sea en la naturaleza, el arte, las relaciones humanas o la contemplación cotidiana. Vivimos en una realidad acelerada que, lejos de proporcionarnos más tiempo libre, nos apresura, desborda y aliena, dificultando el establecimiento de relaciones profundas con el entorno (social y natural) y la posibilidad de darnos espacios a la presencia y tiempos para el encuentro. En definitiva, la posibilidad de experimentar el mundo con profundidad y significado.

Pero el futuro no es un destino fijo, sino que, impulsado por la esperanza y la incertidumbre, lo creamos con nuestras acciones presentes. Siempre hay, pues, espacio para mejores posibilidades. Para acercarnos a ellas hay que superar la mirada cuantitativa que concluye que el modelo social actual ampara el bienestar de muchas más personas que hace cien años, obviando en su cálculo el insoportable e injustificable sufrimiento de millones de personas que es requisito imprescindible para el disfrute de los primeros. Olvida, deliberadamente, que la fortuna de los bienaventurados de esta ecuación y el dolor de los sacrificados se relacionan en un doble sentido: la primera es imposible sin la segunda y la segunda podría ser fácilmente evitable por la primera.

61. No podemos aspirar a llegar a otro lugar haciendo lo mismo de siempre. Necesitamos políticas públicas audaces que afronten la crisis sistémica, respondiendo coherentemente a todas sus dimensiones sin dejar a nadie atrás, elaborando un nuevo pacto social que cuestione consensos contruidos y genere un nuevo imaginario social

El poder del imaginario social hace que relato venza al dato

El imaginario social es un magma de significaciones imaginarias sociales que regula discursos, deseos, prácticas y sentimientos de una sociedad⁽¹⁾. Es la fuente de las definiciones y, en consecuencia, condiciona nuestro hacer justificando algunas prácticas dentro de la esfera de lo incuestionable, aun cuando la terca realidad nos evidencia la falsedad manifiesta de lo que afirmamos. No siempre es cierto aquello de que «el dato mata al relato».

Persiste a la evidencia, entre otros, el relato de que existen individuos independientes, dueños y dominadores de la naturaleza, que para vivir necesitan competir unos con otros, de lo que la desigualdad resulta un proceso natural, un resultado de la lógica supervivencia del más apto, que en nuestro sistema se ha traducido en la idea, no siempre cierta, de que ha trabajado más que otros.

Sin romper esa cadena de pensamiento, y aun aplicándole la ética de la proximidad, de la empatía con el otro, que ponga en marcha mecanismos de atenuación de sus consecuencias, no estaremos en condiciones de afrontar el futuro de otra manera y nos resultará realmente difícil emprender políticas públicas audaces.

Es urgente el desarrollo de políticas más o menos nuevas

En vivienda urge expandir el parque público de alquiler, implementar regulaciones de emergencia y aplicar políticas diferenciadas territorialmente. El sistema de salud requiere reducir listas de espera y aplicar una estrategia nacional de salud mental comunitaria. En educación se debe combatir el abandono temprano, universalizar la educación infantil y luchar contra la segregación escolar. La igualdad de género y étnica exige políticas específicas de inclusión social, especialmente para población gitana y migrante. La transición ecológica debe tener en su horizonte también la justicia social para evitar que reproduzca desigualdades territoriales y sociales, implicando a las comunidades locales en la planificación de proyectos renovables. Todo ello sustentado en una reforma fiscal realmente progresiva que garantice una financiación que reparta con justicia los impuestos entre trabajo, capital y consumo.

(1) CASTORIADIS, C. (1997). «El imaginario social instituyente», *Zona Erógena*, 35.

Frente a esta realidad, no faltan propuestas prácticas y viables. Citamos a modo de ejemplo algunas de ellas. La superación de los desafíos estructurales requiere una agenda ambiciosa de políticas públicas que abarque desde el empleo de calidad hasta la transición ecológica justa. En el ámbito laboral, se necesitan medidas para reducir la temporalidad, combatir la parcialidad involuntaria, fortalecer la negociación colectiva y desarrollar empleos verdes y comunitarios. La garantía de ingresos debe evolucionar hacia sistemas más accesibles como el Ingreso Mínimo Vital, complementados con itinerarios de inserción.

Necesitamos políticas audaces que desarrollen las lógicas redistributivas y que incorporen la producción de lo común

Pero es necesario ir más allá. Las propuestas aquí recogidas, más aquellas otras que no están, pero hacen falta, se mantienen en la lógica tradicional, permiten avanzar pero no impulsar el cambio de fondo que urge emprender con paciencia, pero con firmeza. Solo con estas, sin un cambio de mentalidad, no tendremos capacidad para aplicar las necesarias lógicas redistributivas que busquen prevenir la desigualdad en lugar de posponer su corrección *ex post* con las prácticas redistributivas, lo que dificultará, por ejemplo, avanzar hacia un sistema de garantía de rentas con criterios de universalidad, o hacer lo necesario para prevenir exclusiones futuras con orígenes tecnológicos, ambientales o demográficos, entre otros.

Y seremos incapaces de generar la lógica de lo común como punto de partida que regula y sitúa de manera complementaria lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, la sociedad y el estado, la competencia y la colaboración. Una lógica que reivindica la igualdad, que es algo que va más allá de lo material, pues es también una forma de mirar y concebir a las otras y a los otros, es la «producción de lo común», categoría eminentemente relacional que exige «participación común, intercomprensión común y circulación común»⁽²⁾.

62. La creciente y transformada desigualdad desvela cómo la integración social depende más de la posición de partida y la herencia que del mérito propio, contrastando con la idea vigente de meritocracia. El cambio necesario precisa reconocernos como seres interdependientes y ecodependientes, recuperando una ética del trabajo desligada del empleo

Una creciente y transformada desigualdad que genera una fractura generacional

La desigualdad es una realidad creciente que ya no se limita a los ingresos, sino que abarca el acceso desigual a muchos de los considerados como derechos básicos. Como factores centrales en los procesos de exclusión social emergen las dificultades en el acceso a la vivienda y la pérdida de la centralidad del empleo como vía de integración social.

⁽²⁾ ROSANVALLON P. (2012). *La sociedad de los iguales*. Barcelona: RBA.

Las reformas redistributivas tradicionales se muestran insuficientes frente a la consolidación de un modelo de «neopropietarismo» en el que el patrimonio heredado define las oportunidades vitales, especialmente en relación con la vivienda, que ha agudizado su carácter de bien especulativo expulsando a grupos vulnerables del acceso digno a esta. La exclusión residencial actúa como multiplicador de otras formas de precariedad: deteriora la salud, limita el acceso a la educación y reduce la participación social.

El acceso a un empleo decente y suficiente también depende de la herencia, en forma de capital social y relacional en el marco de un mercado laboral estructuralmente dualizado. Así, el empleo de gran cualificación y remuneración convive con empleos precarios, temporales y mal remunerados que no permiten el acceso al conjunto de aquellos derechos que no cuentan con un sistema de garantías real de los ingresos y la renta disponible. Empleos precarizados que dificultan y, en ocasiones, impiden la integración verdadera de amplias capas sociales.

A pesar de estar más formadas que nunca, las generaciones jóvenes enfrentan peores perspectivas que sus progenitores, rompiendo la promesa de progreso intergeneracional. Esta situación provoca un conflicto intergeneracional donde las políticas públicas favorecen implícitamente a las generaciones propietarias (pensiones, desgravaciones hipotecarias) frente a las nuevas generaciones excluidas del acceso a derechos básicos. La juventud se convierte en una generación sacrificada que debe asumir los costes de las crisis sistémicas sin haber disfrutado de los beneficios del crecimiento anterior.

El cómodo y falso relato de la meritocracia legitima la exclusión basándose en un modelo donde el concepto de trabajo queda reducido al empleo

Nuestro imaginario colectivo vive del mito del «hombre hecho a sí mismo» que vincula el éxito al mérito propio e individual. Y, a pesar de la experiencia de la irrealidad de este arquetipo, no hemos dado el salto a cuestionarlo como un objetivo social deseable, algo tan claramente imposible en una especie tan social como la nuestra y tan ecodependiente como todas. La meritocracia se convierte así en un «relato cómodo» que legitima la exclusión transformando el privilegio en premio y la precariedad en castigo merecido. Aunque tiene poder emocional porque nos gusta creer que somos dueños de nuestro destino, es una «ilusión cruel» que oculta las condiciones materiales de partida, la herencia visible y la invisible de los entornos, y el azar de nacer en un lugar específico.

Y, como derivada directa, es preciso resituar el papel del trabajo y su ética, que en el imaginario ha sido absorbido por la categoría del empleo. El empleo no es más que la forma histórica que el modelo capitalista se ha dado para organizar una parte de todo lo que el trabajo humano es, supone y representa. Trabajar, entendido como la capacidad intrínsecamente humana de utilizar y transformar su entorno para satisfacer sus necesidades, va mucho más allá del tener o no tener un empleo. Trabajar, trabajamos todas las personas todos los días, pero en el imaginario solo «se construye a sí mismo» quien consigue un empleo de «triunfador», subordinando e invisibilizando como «reproductivo» todo lo que se sale de lo «productivo.»

La ciudadanía precisa reconocer su interdependencia y la humanidad su ecodependencia

Es urgente dar el paso de reconocer la interdependencia frente a la independencia como aquello que nos define como individuos y como especie. El crecimiento sostenido en un planeta de recursos finitos y la ilusión de independencias resultan una quimera suicida. El destino del planeta, la justicia social y el bienestar humano están profundamente entrelazados.

Así, tenemos que elegir entre ver el mundo como una comunidad interdependiente o como un juego de suma cero. La elección entre estas visiones define el tipo de futuro que construiremos colectivamente, especialmente ante desafíos globales que requieren respuestas coordinadas y solidarias.

63. En el marco del debilitamiento individualista de lo comunitario y del cuestionamiento neoliberal de lo estatal, estamos situados en un falso e interesado debate entre sociedad y Estado que es preciso reubicar en términos complementarios, necesitando entrar en la lógica de lo común para profundizar en la democracia

La crisis de lo comunitario: cuando el individualismo nos deja sin vínculos y sin raíces

Vivir en sociedad aporta como ventaja la capacidad para asegurar colectivamente el afrontamiento de dificultades y riesgos vitales individuales de los que nadie está exento. En la medida en que las sociedades se han ido complejizando, ha resultado necesario desarrollar mecanismos más complicados para hacer esto, generando prácticas sociales complejas, algunas de las cuales han terminado cuajando en instituciones formales que solemos identificar como lo estatal, mientras que otras se despliegan mediante redes informales que englobamos en el difuso concepto de lo comunitario.

El «hombre que se ha hecho a sí mismo» es independiente, lo que tiene y lo que es lo ha construido con su esfuerzo. En la sociedad del miedo, este es un Robinson Crusoe en su isla de individualismo que rechaza lo que viene de la otredad. Los demás son el difuso enemigo, al que no podemos destruir, pero sí instrumentalizar en beneficio propio. Este referente, un tanto caricaturizado, está en el origen de la analizada crisis de lo comunitario, que más allá de la idea utilitarista de ayuda mutua, nos deja sin vínculo, y por tanto, sin raíces.

La ciudadanía consumidora y la crisis de participación política

En el campo de lo institucional, no sin lucha, hemos construido, aun con sus déficits, eso que englobamos bajo el paraguas del Estado de Bienestar y que hoy sufre una crisis, sobre todo de legitimidad. Se desea

un Estado del Bienestar fuerte, pero existe resistencia a sostenerlo fiscalmente. Persiste la demanda de más y mejores servicios públicos que convive con la negativa a mayores impuestos amparada por la desconfianza y la desafección hacia las instituciones y, en ocasiones, hacia el propio sistema democrático en su conjunto.

Parece que la red heredada de mecanismos políticos no cumple con lo prometido y le cuesta iniciar nuevos caminos e imaginar nuevas herramientas con una ciudadanía convertida en consumidora de lo político, como si se tratara de un servicio o producto más. Ciudadanía consumidora que, de manera mayoritaria, renuncia a ser productora de lo común, a participar como agente activo, transfiriendo la agencia, la iniciativa de acción, a los políticos.

El resultado es una sociedad fracturada en mundos separados, con lenguajes que no se tocan, donde la política se ha vuelto un campo de batalla en el que cada bando ve al otro como amenaza existencial. El populismo emerge como expresión de una ciudadanía exhausta y una cultura incapaz de sostener sus propias instituciones, requiriendo una renovación cultural profunda que vuelva a preguntarse qué significa vivir bien juntos.

Más allá de la dicotomía, instituciones públicas y redes comunitarias como parte del hecho social

No faltan propuestas, ideas y prácticas en la buena dirección, proponiendo multiplicar los modos de expresión, procedimientos e instituciones democráticas más allá del papel a la vez imprescindible y limitado del ejercicio electoral, impulsando una democracia interactiva con dispositivos permanentes de consulta, información y rendición de cuentas⁽³⁾.

Propuestas que son sin duda necesarias pero insuficientes en un contexto en el que la crisis comunitaria y la institucional se retroalimentan y nos dejan sin vínculos ni raíces, desconfiando de lo construido en común. Y nos hacen olvidar que tanto instituciones como redes son partes del hecho social, ambas necesarias y que no conforman modelos antagónicos. Ambas pertenecen al ámbito de lo público, de lo colectivo, de lo social. Y en el imaginario colectivo se suelen enfrentar y situar en competencia por prevalecer una sobre otra.

Nos han convencido de que todo lo bueno se sitúa en ese espacio tan poco claro de «lo privado» donde habita la libertad. Y, sin embargo, todos los derechos, incluso los «negativos» como la libertad de expresión, requieren inversión pública: tribunales, jueces, policía, leyes. No hay libertad sin Estado. Si esto es cierto para derechos civiles y políticos, mucho más para los sociales: salud, educación, vivienda, trabajo. El Estado no es obstáculo a la libertad, sino su condición. Y el Estado no es algo separado y distinto de la sociedad, sino uno de sus instrumentos esenciales.

⁽³⁾ ROSANVALLON (2020). *El siglo del populismo*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

64. Tenemos una ética construida para un mundo que ya no existe. La ética del buen vecino empático con lo próximo es insuficiente en el mundo global e interconectado donde lo hecho aquí afecta allí. Necesitamos construir la ética del buen antepasado capaz de empatizar con lo lejano y operar en lógica de trascendencia

De la ética de proximidad a la responsabilidad global: el desafío moral de actuar más allá de nuestros círculos cercanos

Durante milenios hemos desarrollado competencias éticas para ser aplicadas en coordenadas espacio-temporales bien delimitadas, en comunidades pequeñas basadas en la proximidad y la reciprocidad. Sin embargo, los problemas éticos contemporáneos deben resolverse atendiendo al «ahí» (lugares lejanos, personas muy «otras») y al «mañana» (generaciones futuras). Estamos biológicamente equipados para la empatía con nuestros «prójimos próximos» a través de neuronas espejo, pero somos «xenófobos empáticos» con dificultades para extender la cooperación más allá de nuestros grupos de afinidad. La globalización ha convertido en ficción la tesis de los espacios cerrados: lo que hacemos localmente puede influir en las condiciones de vida de gente en lugares que nunca visitaremos y de generaciones que no conoceremos jamás, requiriendo una responsabilidad extendida espacial y temporalmente.

El cambio climático ejemplifica perfectamente los dilemas de la responsabilidad contemporánea. Su dispersión espacial y temporal genera confusión moral: un coche en Toledo contribuye al derretimiento glaciar en el Himalaya, que eleva el nivel del mar y pone en peligro comunidades en Bangladesh. No es evidente que una acción aislada tenga impacto directo en algún daño, y precisamente por eso la responsabilidad recae colectivamente en millones de personas y en miles de decisores políticos, cuyos pequeños actos y resoluciones cortoplacistas o autocentradas se suman hasta provocar consecuencias catastróficas.

Necesidad de una ética de largo alcance: pensar como «buenos antepasados»

La construcción de una ética adecuada para esta época moral de largo alcance requiere aprender a pensar a largo plazo, en escala translocal, en sistemas y en complejidad. Necesitamos proyectarnos hacia el futuro y comportarnos como «buenos antepasados». Esto implica superar el descuento hiperbólico que hace que las consecuencias futuras no influyan en nuestras decisiones actuales. Este mundo de acontecimientos improbables y cambios no lineales requiere no solo capacidad de cálculo, sino sobre todo moralidad y compasión, pues el problema no es aritmético, sino ético: no tenemos problema con los números, sino con las personas que ocultan esos números. Una ética transformadora debe ser capaz de integrar racionalidad, intuición, compasión, visión y moralidad para abordar la interconexión entre todos los problemas contemporáneos y construir respuestas que honren tanto las necesidades presentes como futuras.

De no hacerlo, se consolidará un sistema de irresponsabilidad organizada donde los riesgos globales son generados colectivamente, pero sin atribución clara de responsabilidad. Los actores (empresas, gobiernos, ciudadanía) trasladan o justifican sus responsabilidades dentro de un complejo entramado que dificulta la rendición de cuentas. Además, el problema es intergeneracional: las generaciones actuales del norte global disfrutan los beneficios del uso de combustibles fósiles, mientras las del sur global y las futuras pagarán las consecuencias, planteando paradojas morales sin precedentes históricos.

Todo está conectado: propuestas para una ética del cuidado mutuo y la colaboración entre humanos y con la naturaleza

La ética de la colaboración de Merchant⁽⁴⁾ se basa en la idea de relación, no de dominio. Reconoce la interdependencia vital entre comunidades humanas y no humanas y propone una nueva forma de tomar decisiones: participativa, inclusiva, sensible a las diferencias culturales y ecológicamente viable. Este enfoque implica reconocer a la naturaleza como una interlocutora legítima, no como un recurso pasivo. Impulsa acciones que respetan tanto las necesidades humanas básicas como la integridad de los ecosistemas, y exige límites al crecimiento económico descontrolado. En la ética de la colaboración, el ser humano se reconoce como un actor ético que coexiste con el resto de la Tierra, no como su dueño. Es una ética que propone alianzas entre saberes tradicionales y científicos, entre espiritualidades ancestrales y políticas contemporáneas. En ella, la justicia social y la sostenibilidad ambiental no son objetivos separados, sino mutuamente dependientes.

En la encíclica *Laudato si'*⁽⁵⁾ el papa Francisco apunta en una dirección muy similar. La ecología integral se basa en una convicción fundamental: todo está conectado. Esta afirmación, simple pero radical, obliga a repensar nuestras formas de vivir, producir, consumir y relacionarnos, tanto con la naturaleza como entre nosotros. No basta con proteger especies o reciclar residuos; es necesario también cuestionar las lógicas económicas, los estilos de vida consumistas y los modelos de desarrollo que generan desigualdad y destruyen el tejido social y ambiental.

La ecología integral no minimiza el valor único de la persona humana, sino que resitúa esa dignidad en una trama de interdependencia y cuidado. No hay verdadera sensibilidad ecológica si no está acompañada por una ternura concreta hacia la persona pobre, la descartada, la víctima invisible. Así, la ecología integral se convierte en una espiritualidad del cuidado, que no se limita a grandes decisiones políticas o técnicas, sino que se encarna en hábitos, elecciones y contemplaciones diarias. Recuperar una serena armonía con la creación significa también detenerse, escuchar, agradecer, dejar espacio a lo sagrado que habita en el mundo y en las otras y los otros.

(4) MERCHANT C. (2005). *Radical Ecology: The Search for a Livable World*. New York: Routledge.

(5) FRANCISCO (2015). *Laudato si'*. <https://www.vidanuevadigital.com/documento/enciclica-laudato-si-del-papa-francisco-pdf/>

65. La espiritualidad como dimensión constitutiva de lo humano es sustento esencial para aportar profundidad al cambio necesario, pues conlleva pertenencia a algo más amplio, permitiendo la experiencia trascendente y proponiendo la conversión como práctica. Ambas cuestiones son sustentos necesarios para avanzar en la dirección deseada y deseable

El valor de la(s) espiritualidad(es) como un posible y necesario soporte del cambio

Entendemos la espiritualidad como la búsqueda de significado o conexión con algo más allá del propio ser, no necesariamente ligada, ni lo contrario, a una determinada religión o creencia organizada o institucionalizada.

Si queremos afrontar las dificultades e incomodidades de la necesaria transición, debemos ser capaces de armar un proyecto emancipador que sea entusiasmante. Etimológicamente, entusiasmo significa tener a Dios en nuestro interior, estar inspirada o poseída por lo divino.

Hoy en día, entusiasmo se utiliza sin esta connotación espiritual, pero se refiere a una fuerte emoción de interés, alegría o energía por algo. Si de lo que se trata es de entusiasmarlos con la transición eco-social, creemos que es acertado hablar de poner en valor muchas de esas búsquedas, de orígenes y naturalezas diferentes, que comparten elementos constitutivos de un soporte ético, no excluyente de otros, pero nada despreciable. Lejos de nuestra intención afirmar que es el único camino, pero sí que es uno. Y no estamos sobrados de ellos.

La conexión trascendente como experiencia

Muchas espiritualidades nos aportan el poder sentirnos conectados con la otredad, más allá del yo, del aquí y del hoy. Desde la perspectiva católica, el papa Francisco dice que todo está conectado, y Mickey(6) sostiene que estamos al borde de una civilización planetaria, no como una utopía tecnocrática, sino como una conciencia emergente de que todo está interrelacionado. Sin embargo, para alcanzarla necesitamos superar las divisiones artificiales entre ser humano y naturaleza, razón y sensibilidad, ciencia y sabiduría ancestral. Así, su propuesta se convierte en una ética del entrelazamiento, una cosmología relacional.

Desde la visión de la ecología profunda propuesta por Naess(7), que plantea el valor intrínseco de todo lo vivo, hasta a la ecoespiritualidad de Itel,(8) para quien esta «representa una convergencia significativa del ambientalismo y la espiritualidad, revelando una profunda amalgama de conciencia ecológica con

(6) MICKEY, S. (2012). *On the Verge of a Planetary Civilization: A Philosophy of Integral Ecology*. Rowman & Littlefield Publishers.

(7) NAESS A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.

(8) ITEL, JULIA (2025) «Uniendo la fuerza y la espiritualidad», en *Politics and Rights Review*, <https://politicsrights.com/ecospirituality-bridging-science-spirituality/>

búsquedas espirituales personales» y pasando por Vandana Shiva (2024), la espiritualidad es el conocimiento consciente de que todo está interconectado y debe ser respetado, el convencimiento de que el bienestar ecológico va unido al bienestar humano. Sus reflexiones se sitúan en la perspectiva de reivindicar nuestra pertenencia a la familia humana, según la cual somos miembros de la colectividad que conformamos humanidad y demás seres vivos con quienes compartimos nuestra vida planetaria.

También algunas espiritualidades llamadas laicas, que desligadas de aparatos institucionalizados hacen referencia al cultivo de la dimensión espiritual del ser humano, enfocadas en aspectos universales como la conciencia o la conexión con los demás y la naturaleza, invitan a reflexionar sobre nuestra humanidad común y a construir un sentido de propósito más allá de lo material.

Y la conversión como propuesta

Las espiritualidades aportan una segunda idea compartida, que aun con diversos nombres podemos identificar con la conversión, es decir, la transformación profunda y rápida de las creencias y las prácticas mantenidas hasta un determinado momento⁽⁹⁾ para adoptar otras radicalmente diferentes, accediendo así a una «vida nueva».

Santiago Muiño⁽¹⁰⁾, citando al filósofo Manuel Sacristán, decía «Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador: tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión»

Por su parte, Riechmann⁽¹¹⁾ nos dice: «Vivir sencillamente para que los demás, sencillamente, puedan vivir: sabemos que los privilegiados de este mundo tenemos que reducir nuestro impacto ambiental en un factor de diez, aproximadamente (vale decir: una décima parte del actual consumo de energía, de agua, de otros recursos naturales...). Una parte de esta reducción puede lograrse a través de una "revolución de la ecoeficiencia" (hacer más con menos), pero otra parte, sustancial, ha de provenir de modificaciones de nuestros hábitos, valores y pautas de conducta. Es decir, no se trata solo de mejoras técnicas —que también—, sino de conversión espiritual».

Dos autores no adscritos a ninguna confesión particular, que convergen con Francisco⁽¹²⁾ en la importancia de este elemento como impulso para el cambio necesario: «La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura».

⁽⁹⁾ Representada, en la tradición cristiana, con la «caída del caballo» de Pablo en su camino a Damasco, a pesar de que en el relato bíblico no se hable de ninguna cabalgadura (Hch 9, 1-21).

⁽¹⁰⁾ SANTIAGO MUIÑO, E. (2016). *Rutas sin mapa. Horizontes de transición ecosocial*. Madrid: Catarata.

⁽¹¹⁾ RIECHMANN, J. (2025). *Ecoespiritualidad para laicos. Cuaderno de apuntes*. Santander: El Desvelo Ediciones.

⁽¹²⁾ FRANCISCO. (op. cit.)

66. Es urgente avanzar hacia un cambio radical de paradigma civilizatorio pasando de la visión mecanicista y darwinista a una que ponga en el centro la interdependencia, la ecoddependencia y el cuidado. El feminismo aporta valores relacionales, el ecologismo sitúa la sostenibilidad como eje y el ecofeminismo invita a poner la vida en el centro

Es necesario un cambio de paradigma que cuestione aspectos considerados incuestionables

La crisis civilizatoria actual, caracterizada por múltiples dimensiones interrelacionadas (climática, social, política y cognitiva) abre una «ventana de oportunidad para poner las bases para otro mundo que garantice una sociedad más justa y equitativa. Esta metacrisis sistémica que abarca todas las esferas y es universal, exige abandonar el catastrofismo paralizante para poner la mirada en posibles alternativas y medidas transformadoras. Se requiere un cambio de paradigma para mirar el mundo desde otras perspectivas y plantear sociedades más justas. Solo pensando fuera de los márgenes, delimitados por el sentido considerado común que nos marca la ideología hoy dominante, podremos construir un paradigma civilizatorio que emancipe a los seres humanos y devuelva la dignidad a la naturaleza»⁽¹³⁾.

Una serie de ideas y valores han venido organizando nuestras vidas y nos han llevado a una situación crítica que debemos transformar. Nuestra cultura descansa en un paradigma que se basa en una visión del universo como un sistema mecánico compuesto de piezas, el cuerpo humano como una máquina y la vida social como una competencia constante. Este modelo promueve el progreso material mediante el crecimiento económico ilimitado, legitima la subordinación de la mujer al hombre como orden natural y ubica a la humanidad en la cumbre de la pirámide como dueña y señora de la naturaleza y sus recursos.

Frente a esto, emerge, y es necesario impulsarlo, un nuevo paradigma que contemple la interdependencia no solo de las diversas partes sociales, sino también con el entorno natural. Esta visión ecológica profunda revela una percepción espiritual donde el individuo experimenta un sentimiento de pertenencia y conexión con el cosmos como totalidad. El cambio de paradigma exige cuestionar aspectos considerados «incuestionables» y desarrollar nuevos valores que orienten comportamientos e instituciones en otra dirección.

Ese camino de cambio ya ha empezado, pero nadie puede garantizar su consolidación. No es esta una reflexión que empiece ahora, y por ello queremos recoger algunos de los elementos de lo andado que nos aportan propuestas de sentido que nos permiten seguir andando, y que encontramos sobre todo en los aportes de los diversos y plurales movimientos ecologistas y feministas.

⁽¹³⁾ NAREDO, J.M. (2024). «Una polémica estéril entretiene y divide al movimiento ecologista». *Galde*, 43. <https://www.galde.eu/es/una-polemica-esteril-entretiene-y-divide-al-movimiento-ecologista/>

Creer en igualdad y cultivar valores hasta ahora despreciados

A lo largo de la historia se han venido atribuyendo unos determinados valores a lo que era masculino y otros distintos a lo considerado femenino⁽¹⁴⁾. Al sexo masculino, los hombres, se le atribuyen rasgos tales como la fuerza, el honor, la conquista, la dominación, la proeza o la hazaña que construyen la imagen arquetípica de la virilidad. Al sexo femenino, las mujeres, otros muy distintos: la afectividad, el cuidado, la discreción, la sumisión o la intimidad, que hace lo propio con la feminidad. Los varones han venido asumiendo valores instrumentales: la competencia, la actividad, la racionalidad, la eficacia, la autonomía, o incluso el saber. Las mujeres, valores relacionales: la intuición, los sentimientos, la dependencia o los cuidados. Lo activo se ha asociado a lo masculino, lo pasivo a lo femenino. Los hombres y, con ellos, lo masculino, han detentado el poder a lo largo de los siglos. Pensamientos y percepciones se han ido modelando de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación. Prácticamente nada de esto tiene que ver con la biología o con la psicología: se trata de androcentrismo, que no es sino una construcción autoritaria de normas que privilegian los rasgos asociados con la masculinidad, mientras que devalúan o degradan aquello que se asocia a lo femenino.

Además de la necesaria y urgente lucha por la igualdad, y por el acceso de las mujeres a los puestos y espacios de poder, el feminismo nos propone que los valores despreciados y falsamente atribuidos como propios de la mujer son los que realmente necesitamos desarrollar y cultivar hombres y mujeres para realizar ese cambio paradigmático, pues es con ellos con los que podremos empujar el cambio. Son la clave para la toma de las decisiones políticas necesarias, para construir un vivir social que merezca la pena y en armonía con nuestro planeta. Un giro de timón que debe poner en marcha, también un nuevo modelo de masculinidad divergente con la atribución tradicional de rol.

Cambiar el modelo productivo y reducir el consumo

El ecologismo lleva más de 60 años advirtiéndonos, desde la publicación en 1962 de *Primavera silenciosa*, pasando por los informes del Club de Roma, hasta hoy mismo, cuando 11.000 investigadoras e investigadores de 153 países nos recuerdan que «la crisis ha llegado antes y está acelerándose más de lo que los científicos esperaban [...], amenazando los ecosistemas y el futuro de la humanidad», que «el planeta Tierra afronta una emergencia climática [...] estrechamente vinculada al consumo excesivo del estilo de vida rico», lo que nos obliga a «un incremento inmenso de esfuerzos a gran escala para conservar la biosfera de manera que se evite un sufrimiento indecible debido a la crisis climática»⁽¹⁵⁾.

El gran debate suscitado por las turbulencias en nuestro planeta ha girado alrededor del clima y de la energía. Se ha venido reflexionando y aportando información y propuestas desde el movimiento eco-

⁽¹⁴⁾ LORBER, J. (2023). *La nueva paradoja del género*. Barcelona: Paidós.

CONNELL, R. Y PEARSE, R. (2018). *Género: Desde una perspectiva global*. Valencia: Universitat de València.

⁽¹⁵⁾ RIPPLE, W. J., et al. (2020). «World Scientists' Warning of a Climate Emergency». *BioScience*, 70(1).

gista, que apuntan en la dirección de modificar y reducir los hábitos de consumo y un necesario cambio en el modelo productivo teniendo en cuenta los límites de la explotación de la naturaleza, para evitar un colapso sistémico.

Poner la vida y su cuidado en el centro

El ecofeminismo se propone el dialogo entre estos dos mundos, desarrollando así una mirada más amplia e interconectada para afrontar los problemas que ha generado el desarrollo del sistema capitalista. Se trata de una filosofía y de una práctica cuyo enfoque plantea una alternativa al modelo económico y cultural que se ha desarrollado de espaldas a las bases materiales y relacionales que sostienen la vida. Plantea una visión en la que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza son dos caras de una misma moneda y responden a una lógica común: la lógica de la dominación y del sometimiento de la vida a la lógica de la acumulación.

Y con ello irrumpe en el panorama de la ética ambiental como una voz crítica, profunda y transformadora. No se limita a añadir una perspectiva femenina al discurso ecológico, sino que cuestiona las raíces mismas del pensamiento occidental que ha separado mente y cuerpo, cultura y naturaleza, razón y emoción, varón y mujer. Frente al mecanicismo dominante propone una visión orgánica, interrelacionada y holística de la vida

Articula una ética relacional, que reconoce la vulnerabilidad, la interdependencia y el cuidado como principios fundamentales planteando una ética del cuidado y la responsabilidad, encarnada en vínculos concretos entre seres humanos, y entre los humanos y la naturaleza. Pone la sostenibilidad de la vida en el centro del pensamiento económico, priorizando la calidad de vida de las personas y los cuidados del medio ambiente. Porque nuestra economía, nuestra política y nuestra cultura se desarrollan de espaldas y en contra de las insoslayables relaciones de ecodependencia e interdependencia que las sostienen.

Su propuesta de transición ecosocial podría resumirse en estas palabras de Yayo Herrero: «Una cultura de la suficiencia y la autocontención en lo material, cambiar los patrones de consumo, reducir drásticamente la extracción de materiales y el consumo de energía, apostar por las economías locales y los circuitos cortos de comercialización, restaurar una buena parte de la agricultura campesina, disminuir el transporte y la velocidad, aprender de la sabiduría acumulada en las culturas sostenibles y situar el cuidado de las personas en el centro del interés».

67. Debemos girar la mirada del mero bienestar hacia el biencuidar, poniendo los cuidados como eje de la vida social y avanzando hacia una democracia del cuidado que lo haga cuestión política. Frente a la cultura de apropiación se crea un mundo responsivo que une receptividad, respuesta y responsabilidad con relaciones vibrantes y transformadoras

El cambio de mirada y de acción debe transitar desde el mero y material «bienestar» hacia el modelo del «biencuidar», que integrando lo que de avance supone el anterior sea capaz de incorporar los elementos faltantes en el marco de los límites del planeta y de la plena inclusión en los beneficios del modelo de todas las personas, especialmente de las vidas descartadas.

Una democracia del cuidado: política centrada en la interdependencia

Joan Tronto⁽¹⁶⁾ nos propone una democracia del cuidado. Lo democrático no se puede concebir como el mero ejercicio electoral, sino como un proceso colectivo de preguntarnos y responder quién cuida, a quién, cómo y con qué apoyo. Lo que supone reconocer la necesidad, asumir la responsabilidad, administrar y recibir el cuidado y «concuidar» con justicia.

La verdadera ciudadanía debe construirse desde la interdependencia, no desde la ilusión de independencia. Frente a la «irresponsabilidad privilegiada» que otorga a los varones productivos un «pase» para despreocuparse del cuidado, se propone que la verdadera libertad no estriba en la independencia sino en la capacidad de cuidar y comprometerse con lo que nos preocupa.

Solo cuando el cuidado se hace colectivamente, con estructuras igualitarias y mirada política, se convierte en cimiento democrático. El modelo neoliberal ha erosionado el valor del cuidado privatizándolo, externalizándolo o ignorándolo, creando una ciudadanía idealizada como autosuficiente cuando en realidad todas y todos dependemos del cuidado en algún momento de nuestras vidas.

Hay que redistribuir cargas de cuidado, repensar nuestras instituciones para que sean sensibles a las necesidades humanas reales y crear espacios donde la ciudadanía pueda deliberar sobre cómo queremos cuidarnos mutuamente. Es fundamental ver el cuidado como algo político, ya que está impregnado de poder, no como un acto individual, sino como una responsabilidad compartida. En un mundo donde la indiferencia y la desigualdad se normalizan, cuidar no es una debilidad, sino una forma de poder, y la pregunta más urgente no es solo quién gobierna, sino quién cuida.

(16) TRONTO, J. C. (2024). *Democracia y cuidado: Mercados, igualdad y justicia*. Barcelona: Rayo Verde.

Responsividad y resonancia: alternativas a la cultura de la apropiación

El neologismo *responsividad* propuesto por Hartmut Rosa⁽¹⁷⁾ combina tres conceptos: receptividad, respuesta y responsabilidad. Un mundo responsivo es aquel que «nos habla» y al cual sabemos responder, estableciendo relaciones vibrantes y transformadoras, una alternativa necesaria frente a la cultura de la apropiación que busca «poner el mundo a disponibilidad».

«No todo en el mundo debe ser conocido, dominado, conquistado y aprovechado», sino que según su propuesta debemos asumir la aceptación de la limitación, la «indisponibilidad», porque «el modo fundamental de la existencia viviente del ser humano no es disponer sobre las cosas, sino entrar en resonancia con ellas»⁽¹⁸⁾. Muestra una forma no instrumental y no dominadora de relacionarse con el mundo mediante la cual el sujeto se abre al mundo, se deja afectar por él y, en esa interacción, ambas partes cambian: el sujeto transforma lo que encuentra, pero también se transforma a sí mismo. No se trata de dominar, explotar o poseer el objeto, la persona o la experiencia, sino de entrar en una relación viva y dialógica, donde lo que tocamos también nos toca y donde el cambio es mutuo. Los momentos más valiosos solo pueden acontecer si nos abrimos a ellos sin intentar dominarlos. Aceptar la indisponibilidad es un acto de humildad frente al mundo y una puerta hacia la resonancia, reconociendo la vulnerabilidad y fragilidad constitutiva de las personas y del propio mundo.

⁽¹⁷⁾ ROSA, H. (2019). *Resonancia. Una sociología de la relación con el mundo*. Buenos Aires: Katz.

⁽¹⁸⁾ *Ibid.*



FUNDACIÓN FOESSA



Caritas